



**Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos**

Distr. general
28 de abril de 2015
Español
Original: inglés
Español, francés e inglés únicamente

Comité de Derechos Humanos

114º período de sesiones

29 de junio a 24 de julio de 2015

Tema 5 del programa provisional

**Examen de los informes presentados por los Estados
partes en virtud del artículo 40 del Pacto**

**Lista de cuestiones relativa al séptimo informe periódico
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte**

Adición

**Respuestas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a la lista de cuestiones***

[Fecha de recepción: 25 de marzo de 2015]

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.



Lista de siglas

AITHS	Estudio sobre la salud de los itinerantes en Irlanda
EEE	Espacio Económico Europeo
EPU	examen periódico universal
LRDFI	Ley de Retención de Datos y Facultades de Investigación de 2014
LRFI	Ley de Regulación de las Facultades de Investigación de 2000
CDHIN	Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte ¹
ONG	organización(es) no gubernamental(es)
RRCANI	Asociación de la Comunidad de Romaníes Rumanos de Irlanda del Norte

¹ www.nihrc.org/.

Introducción

1. El Gobierno del Reino Unido agradece al Comité de Derechos Humanos la oportunidad de responder a la lista de cuestiones que van a conformar la base del examen del Reino Unido (así como de los Territorios Británicos de Ultramar y las Dependencias de la Corona a los que se ha ampliado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que tendrá lugar en julio de 2015. La respuesta a la lista de cuestiones se adjunta a continuación.

2. La lista de cuestiones consta de 30 párrafos que, según el Gobierno del Reino Unido, se subdividen en 87 cuestiones independientes a las que se debe responder. Aunque se ha tratado de respetar el límite de 30 páginas recomendado por la secretaría del Comité² para la respuesta del Reino Unido, no ha sido posible debido a:

- El número de cuestiones planteadas;
- La necesidad de reflejar, en su caso, la postura específica de la administración descentralizada (en Irlanda del Norte, Escocia y Gales);
- La necesidad de reflejar que el Reino Unido tiene tres jurisdicciones (Inglaterra y Gales; Escocia; e Irlanda del Norte) y que la aplicación del Pacto, aunque sea uniforme en todo el Reino Unido, puede llevarse a cabo a través de diferentes mecanismos.

3. A fin de reducir al mínimo el número de palabras, la respuesta incluye varias referencias a distintos informes del Reino Unido presentados a las Naciones Unidas, así como enlaces a un amplio abanico de documentos que el Comité quizá desee tomar en consideración a efectos de evaluar el cumplimiento del Pacto por parte del Reino Unido.

4. El Gobierno del Reino Unido confía en que la respuesta abordará las preocupaciones del Comité y espera con interés el diálogo con el Comité en julio.

Respuesta a la lista de cuestiones

1. Extraterritorialidad

5. Como se indica en el informe de mitad de período del EPU³, el personal del Reino Unido que realiza operaciones militares en el extranjero está sujeto a las leyes de Inglaterra y Gales, y debe actuar de conformidad con el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

6. Como se señala en el séptimo informe periódico presentado por el Reino Unido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁴, las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos son principalmente de tipo territorial y solo en circunstancias muy excepcionales podría el Pacto tener efecto fuera de su territorio. De forma análoga, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha determinado que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa solo se aplica de forma extraterritorial en circunstancias excepcionales, aunque los tratados internacionales de derechos humanos no tienen necesariamente el mismo ámbito de aplicación. El Reino Unido trata de cumplir sus obligaciones en materia de derechos

² Carta de fecha 11 de noviembre de 2014, referencia KF/112/LOI.

³ Informe de mitad de período de 2014, pág. 32.

⁴ CCPR/C/GBR/7, pág. 97.

humanos en relación con todas las personas privadas de libertad por sus fuerzas armadas.

2. Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

7. El Gobierno del Reino Unido remite respetuosamente al Comité a los informes periódicos anteriores a 1998, en particular los informes periódicos primero⁵ y cuarto⁶, en los que se explica el modo en que el Reino Unido daba efecto a los derechos consagrados en el Pacto antes de la Ley de Derechos Humanos de 1998. Como se indica en esos informes, y también en los informes posteriores a 1998, el Reino Unido promulgó un número significativo de leyes, además de la Ley de Derechos Humanos, y adoptó medidas para dar efecto a los derechos consagrados en el Pacto, como por ejemplo:

- Derecho a la libre determinación (artículo 1): proceso de traspaso de competencias (Ley de Irlanda del Norte de 1998⁷; Ley de Escocia de 1998⁸; Ley de Escocia de 2012⁹; Ley del Gobierno de Gales de 1998¹⁰; Ley del Gobierno de Gales de 2006¹¹). También cabe señalar que hay debates políticos en curso para reforzar las competencias del Parlamento de Escocia en el ámbito del Reino Unido (véase el informe¹² de la Comisión Smith de fecha 27 de noviembre de 2014).
- No discriminación e igualdad entre los géneros (artículos 2 y 3): consolidación y ampliación de la legislación contra la discriminación, incluida la introducción de una “obligación de igualdad en el sector público” (Ley de Igualdad de 2006¹³; Ley de Igualdad de 2010¹⁴; Reglamento de 2011 por el que se desarrolla la Ley de Igualdad de 2010 (obligaciones jurídicas) (Gales)¹⁵; y Reglamento de 2012 por el que se desarrolla la Ley de Igualdad de 2012 (obligaciones específicas) (Escocia)¹⁶; reconocimiento legal del nuevo género de las personas transexuales (Ley de Reconocimiento del Género de 2004¹⁷); reconocimiento legal de la relación entre dos personas del mismo sexo (Ley de Uniones Civiles de 2004¹⁸); legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo respectivamente en Inglaterra y Gales, y en Escocia (Ley de Matrimonio (Parejas del Mismo Sexo) de 2013¹⁹; Ley de Matrimonio y Unión Civil (Escocia) de 2014²⁰); legislación contra el matrimonio forzado respectivamente en Inglaterra y Gales, y en Escocia (Ley de Prevención de la Delincuencia y Conducta Antisocial y de Servicios Policiales de 2014²¹; Ley sobre Matrimonios Forzados, etc. (protección y jurisdicción) (Escocia) de 2011²²).

⁵ CCPR/C/1/Add.17.

⁶ CCPR/C/95/Add.3.

⁷ www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents.

⁸ www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/contents.

⁹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/11/contents.

¹⁰ www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/38/contents.

¹¹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/contents.

¹² <https://www.smith-commission.scot/>.

¹³ www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/contents.

¹⁴ www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents.

¹⁵ www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1064/contents/made.

¹⁶ www.legislation.gov.uk/ssi/2012/162/contents/made.

¹⁷ www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents.

¹⁸ www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/contents.

¹⁹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/30/contents.

²⁰ www.legislation.gov.uk/asp/2014/5/contents.

²¹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/part/10.

²² www.legislation.gov.uk/asp/2011/15/contents.

- Derecho a la vida (artículo 6): abolición de la pena de muerte (Ley sobre Asesinato (Abolición de la Pena de Muerte) de 1965²³; Ley de Delitos y Disturbios de 1998²⁴).
- Prohibición de la tortura (artículo 7): tipificación del delito de tortura (Ley de Justicia Penal de 1988²⁵).
- Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso (artículo 8): Ley contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (justicia penal y apoyo a las víctimas) (Irlanda del Norte) de 2015²⁶. En la actualidad se están debatiendo un proyecto de ley sobre la esclavitud moderna y un proyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos (Escocia), en el Parlamento del Reino Unido y el Parlamento de Escocia respectivamente.
- Derecho a la libertad y a la seguridad (artículos 9 y 10): la extensa legislación, como la Ley de Policía y Pruebas en el Ámbito Penal de 1984²⁷ y los Códigos de Conducta²⁸ conexos, proporciona un marco reglamentario contra las detenciones arbitrarias.
- Derecho a la intimidad (artículo 17): legislación en virtud de la cual se protegen los datos personales y se contempla la difamación (Ley de Protección de Datos de 1998²⁹; Ley de Difamación de 2013³⁰ (en Inglaterra y Gales)).
- Libertad de expresión (artículo 19): fortalecimiento de los derechos relacionados con la información a través de la Ley de Libertad de Información de 2000³¹ (en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) y la Ley de Libertad de Información (Escocia) de 2002³² (en Escocia).
- Prohibición de la incitación al odio racial o religioso (artículo 20): legislación que castiga la incitación al odio religioso (Ley de Orden Público de 1986³³; Ley contra el Odio Racial y Religioso de 2006³⁴).
- Protección de los niños (artículo 24): en el quinto informe periódico del Reino Unido presentado en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño³⁵ se ofrece una perspectiva de la legislación vigente para la protección de las familias y los niños.

8. Además, como se indica en el documento básico de 2014³⁶, hay varios derechos civiles y políticos que hace largo tiempo han sido reconocidos y protegidos en la legislación o el *common law*, por ejemplo, el derecho de toda persona a no ser castigada sino en virtud de la ley o de un juicio legal de sus pares (Carta Magna de 1297³⁷, en Inglaterra y Gales); el derecho a impugnar una detención ilícita (Ley de *Habeas Corpus* de 1679³⁸, en Inglaterra y Gales; y la Proclamación de Derechos

²³ www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/71/contents.

²⁴ www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/section/36.

²⁵ www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/33/part/XI/crossheading/torture.

²⁶ www.legislation.gov.uk/nia/2015/2/contents/enacted.

²⁷ www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents.

²⁸ <https://www.gov.uk/police-and-criminal-evidence-act-1984-pace-codes-of-practice>.

²⁹ www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents.

³⁰ www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/contents.

³¹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents.

³² www.legislation.gov.uk/asp/2002/13/contents.

³³ www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents.

³⁴ www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/1/contents.

³⁵ CRC/C/GBR/5.

³⁶ HRI/CORE/GBR/2014, pág. 31.

³⁷ www.legislation.gov.uk/aep/Edw1cc1929/25/9/contents.

³⁸ www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/31/2/contents.

(Claim of Right Act) de 1689³⁹, y la Ley de Procedimiento Penal de 1701⁴⁰, en Escocia); el derecho a la propiedad privada y a su inviolabilidad (*Entick v Carrington & Ors* [1765] EWHC KB J98⁴¹, en Inglaterra y Gales).

9. Por último, el Reino Unido, además de ser parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo es también en otros tratados internacionales en virtud de los cuales se protegen los derechos civiles y políticos (véase el documento básico de 2014⁴²).

10. En lo que se refiere específicamente a Escocia, el Gobierno de Escocia ha tratado de reflejar los principios enunciados en los tratados pertinentes, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a través de leyes y políticas en la medida de lo posible, y de actuar en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y no hacerlo de manera incompatible con dichas obligaciones. La labor que se está llevando a cabo en el marco del Plan de Acción Nacional en Materia de Derechos Humanos de Escocia⁴³ (que se puso en marcha en diciembre de 2013) tiene por objeto desarrollar y ampliar el diálogo constructivo existente en Escocia entre el Gobierno y la sociedad civil a fin de mejorar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en general. Dicha labor incluirá un examen más detenido de las medidas adoptadas el reconocimiento de los derechos enunciados en el Pacto, en caso de que no estén contemplados en la Ley de Derechos Humanos. El Gobierno de Escocia sigue oponiéndose a cualquier intento de derogar la Ley de Derechos Humanos o de retirarse del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Declaración de Derechos de Irlanda del Norte

11. Los avances en relación con la Declaración de Derechos de Irlanda del Norte dependen del consenso político en Irlanda del Norte respecto del contenido de dicha Declaración. El Gobierno del Reino Unido facilitó las negociaciones que culminaron en el Acuerdo de Stormont House de 23 de diciembre de 2014⁴⁴. Aunque no hay en la actualidad un consenso sobre esta cuestión, las partes se comprometieron a servir al pueblo de Irlanda del Norte en pie de igualdad y de conformidad con sus obligaciones de promover la igualdad y el respeto y prevenir la discriminación. El Gobierno del Reino Unido está firmemente decidido a realizar progresos respecto de esa cuestión sobre la base de un consenso global entre las partes de Irlanda del Norte.

Ley de Derechos Humanos de 1998

12. Por el momento, el Gobierno del Reino Unido no tiene previsto derogar la Ley de Derechos Humanos. Es importante diferenciar las declaraciones de los partidos políticos de la política del Gobierno del Reino Unido.

13. El Gobierno del Reino Unido ha acordado en el contexto del acuerdo de coalición⁴⁵ que las obligaciones contempladas en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales seguirán consagradas en el derecho nacional. Si bien los partidos políticos han expresado (y continúan expresando) sus opiniones acerca de las orientaciones de política que quizá deseen considerar en el futuro, en el acuerdo de coalición se establece claramente que

³⁹ www.legislation.gov.uk/aosp/1689/28/contents.

⁴⁰ www.legislation.gov.uk/aosp/1701/6/contents.

⁴¹ www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/1765/J98.html.

⁴² HRI/CORE/GBR/2014, págs. 29 y 30.

⁴³ <http://scottishhumanrights.com/actionplan>.

⁴⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/the-stormont-house-agreement>.

⁴⁵ <https://www.gov.uk/government/collections/coalition-programme-for-government>.

no podrá introducirse ningún cambio importante al marco de derechos humanos antes de las elecciones generales de mayo de 2015.

3. Ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

14. El Gobierno del Reino Unido tiene dudas acerca de las ventajas prácticas que podrían derivarse del derecho de un particular a presentar denuncias ante las Naciones Unidas. Para información más detallada sírvanse consultar el informe de mitad de período del Reino Unido de 2014⁴⁶ presentado en virtud del EPU.

15. En la preparación del mencionado informe, el Gobierno del Reino Unido colaboró con un amplio abanico de interlocutores externos⁴⁷, como el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos del Parlamento del Reino Unido, instituciones nacionales de derechos humanos y una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG). Los eventos organizados por las partes interesadas se celebraron en: Londres (el 19 de marzo y el 18 de septiembre de 2013); Edimburgo (el 12 de junio de 2013, organizado por el Gobierno de Escocia); Cardiff (el 31 de julio de 2013, organizado por el Gobierno de Gales); y Belfast (el 16 de diciembre de 2013). Además, desde marzo hasta el 1 de octubre de 2013 estuvo disponible al público y a todos los miembros de las organizaciones un sistema de presentación de información en línea.

Reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

16. La reserva del Reino Unido al artículo 11 del Pacto en nombre de Jersey se retiró el 4 de febrero de 2015.

17. Además, el Gobierno del Reino Unido considera que aquellas reservas del Reino Unido que no se confirmaron en el momento de la ratificación ya han expirado, y que las reservas formuladas por el Reino Unido en nombre de antiguos Territorios Británicos de Ultramar (a saber, Belice/Honduras Británica; Fiji; Islas Gilbert; Hong Kong; Islas Salomón; Rhodesia del Sur; Tuvalu) se consideran obsoletas en relación con la ratificación del Reino Unido.

18. Todas las suspensiones del Pacto han concluido.

19. Las reservas y declaraciones restantes se mantienen por las razones expuestas en el séptimo informe periódico presentado por el Reino Unido en virtud del Pacto⁴⁸, pero el Gobierno del Reino Unido las revisará de nuevo antes del examen de julio de 2015 y proporcionará al Comité información actualizada en caso de que adopte otra posición.

4. Contribuciones del poder ejecutivo de Irlanda del Norte

20. El Gobierno del Reino Unido ha planteado en varias ocasiones con la administración descentralizada la cuestión de las contribuciones a los informes periódicos que se presentan a las Naciones Unidas y le ha recordado sus obligaciones. El Gobierno del Reino Unido continuará supervisando el desempeño de la administración descentralizada a ese respecto y colaborará con ella a fin de asegurarse de que se facilita la información necesaria.

⁴⁶ Informe de mitad de período de 2014, págs. 9 y 10.

⁴⁷ www.justice.gov.uk/human-rights/universal-periodic-review/upr-events.

⁴⁸ CCPR/C/GBR/7, págs. 33 a 45.

Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (CDHIN)

21. En la Ley de Irlanda del Norte (disposiciones varias) de 2014⁴⁹ se impone al Gobierno del Reino Unido la obligación de celebrar consultas acerca de las repercusiones de la independencia de la CDHIN y su capacidad de cumplir dichos requisitos, como los enunciados en los Principios de París, antes de efectuar el traspaso de competencias a la administración descentralizada. El Gobierno del Reino Unido colabora estrechamente con la CDHIN a fin de velar por que disponga de recursos financieros suficientes para funcionar eficazmente.

5. Lucha contra el racismo

22. El Gobierno del Reino Unido ha expuesto su plan para combatir los delitos motivados por prejuicios en el documento “*Challenge it, Report it, Stop it: The Government’s Plan to Tackle Hate Crime*”, publicado en 2012⁵⁰ y actualizado en 2014⁵¹. El plan abarca todos los delitos motivados por prejuicios y establece tres prioridades: prevenirlos; aumentar la presentación de denuncias y el acceso a los servicios de apoyo; y mejorar la respuesta a esos delitos.

23. El Programa Intergubernamental contra los Delitos Motivados por Prejuicios reúne a todos los departamentos gubernamentales del Reino Unido junto con los organismos de justicia penal de Inglaterra y Gales para garantizar una respuesta coordinada. El Programa también se beneficia de un grupo consultivo permanente e independiente en el que participan las víctimas, de modo que los intereses de estas ocupan un lugar central en las decisiones de política. Los logros incluyen:

- Supervisión de la formulación de directrices para profesionales clave. El College of Policing publicó *Hate Crime Strategy and Operational Guidance* (Guía Operacional y Estrategia para Luchar contra los Delitos Motivados por Prejuicios) en 2014⁵² y la Fiscalía General del Estado ha publicado su propia guía destinada a los fiscales⁵³;
- Desarrollo de recursos educativos dirigido por la Fiscalía General del Estado⁵⁴ para que los educadores puedan combatir el acoso escolar.

24. Se ha elaborado una serie de iniciativas para reducir el perjuicio que ocasionan los delitos motivados por prejuicios en Internet que están destinadas al público en general⁵⁵, fiscales⁵⁶ y agentes de policía⁵⁷. Los funcionarios han colaborado con la asociación Society of Editors para ayudarles a elaborar una guía para sus colegas⁵⁸.

25. El Gobierno del Reino Unido publica los datos de los delitos motivados por prejuicios como parte de las Estadísticas Nacionales de Delincuencia. En el informe publicado en octubre de 2014⁵⁹ se muestra que, en el período 2013-2014, la policía de Inglaterra y Gales registró 37.484 delitos motivados por prejuicios relativos a la raza y 2.273 delitos motivados por prejuicios relativos a la religión. Estas cifras reflejan un

⁴⁹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/13/contents.

⁵⁰ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97849/action-plan.pdf.

⁵¹ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307624/HateCrimeActionPlanProgressReport.pdf.

⁵² www.report-it.org.uk/strategy_and_guidance.

⁵³ www.report-it.org.uk/files/cps_policy_on_racial_and_religious_hate_crime.pdf.

⁵⁴ www.report-it.org.uk/education_support.

⁵⁵ www.report-it.org.uk/reporting_internet_hate_crime.

⁵⁶ www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/communications_sent_via_social_media/index.html.

⁵⁷ www.report-it.org.uk/strategy_and_guidance.

⁵⁸ www.societyofeditors.co.uk/page-view.php?page_id=1088&parent_page_id=141.

⁵⁹ <https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crimes-england-and-wales-2013-to-2014>.

aumento del 4% y el 45% respectivamente con relación a los datos del período 2012-2013.

26. En Inglaterra y Gales, la Fiscalía General del Estado informó⁶⁰ de que: en el período 2013-2014 se emprendieron acciones judiciales en 11.818 causas con agravantes raciales, el 85,2% de ellas dio lugar a una sentencia condenatoria y en el 75,9% el acusado admitió su culpabilidad; se emprendieron acciones judiciales en 550 causas relativas a hostilidad con agravantes religiosos y el 84,2% de estas dio lugar a una sentencia condenatoria. Además de los datos registrados sobre delincuencia, el Gobierno del Reino Unido lleva a cabo una amplia encuesta en los hogares sobre delincuencia para realizar una estimación de la incidencia de la delincuencia e informar de dicha actividad a fin de colmar las lagunas entre el número de delitos registrados y la cifra real de delitos. En la Encuesta sobre Delincuencia en Inglaterra y Gales⁶¹ se brinda amplia información sobre la incidencia de los delitos motivados por prejuicios, así como el efecto sobre las víctimas y su experiencia del sistema judicial penal. En el informe publicado en 2013 se daba cuenta de 154.000 delitos motivados por prejuicios relativos a la raza y 70.000 delitos motivados por prejuicios relativos a la religión.

27. En Irlanda del Norte, el poder ejecutivo ha trabajado con otros órganos estatutarios y ONG para luchar contra los peligrosos prejuicios racistas que circulan y velar por que la población conozca la verdad acerca de los beneficios que reportan la inmigración y una sociedad multicultural. El poder ejecutivo de Irlanda del Norte destina más de 1,1 millones de libras esterlinas al año a organizaciones que trabajan con comunidades étnicas minoritarias para emprender acciones que fomenten la capacidad en dichas comunidades para promover la integración y mejorar las relaciones raciales. También está trabajando con líderes de comunidades y personas de influencia en ámbitos específicos en los que han ocurrido incidentes racistas. El Departamento de Educación de Irlanda del Norte financia y forma parte del Foro de Irlanda del Norte contra el Acoso Escolar, que ha establecido un subgrupo relativo al acoso escolar por motivos de raza. Ese grupo elaboró contenidos para el sitio web del Foro, entre otras cosas recursos para las escuelas específicamente destinados a promover la diversidad y la inclusión cultural, a fin de prevenir el acoso escolar por motivos de raza, religión y cultura. El Departamento de Educación también está proponiendo legislación adicional para intensificar los esfuerzos destinados a erradicar el acoso escolar en todas sus formas. En el documento del Departamento de Justicia de Irlanda del Norte que lleva por título *Community Safety Strategy for Northern Ireland 2012-2017, Building Safer, Shared and Confident Communities* se establecen los compromisos que asumirá el sistema judicial penal para poner fin a los delitos motivados por prejuicios, incluidos los relativos a la raza y la religión, y al perjuicio que estos originan. Se han elaborado planes de acción para cumplir esos compromisos y la supervisión de su aplicación la lleva a cabo un grupo interinstitucional de aplicación de medidas contra los delitos motivados por prejuicios.

28. El Gobierno de Escocia ha adoptado una serie de medidas tendientes a lograr la igualdad racial y mejores resultados para las comunidades étnicas y religiosas minoritarias de Escocia, entre otras:

- En diciembre de 2013, la publicación de la estrategia sobre los refugiados, “*New Scots: Integrating Refugees in Scotland’s Communities*”⁶². En la actualidad se está suministrando financiación por valor de 2,81 millones de libras esterlinas para el período comprendido entre 2012 y 2015 a varias organizaciones que

⁶⁰ www.cps.gov.uk/publications/docs/cps_hate_crime_report_2014.pdf.

⁶¹ www.report-it.org.uk/files/ons_hate-crime-report_2013.pdf.

⁶² www.scotland.gov.uk/Publications/2013/12/4581.

trabajan con refugiados y solicitantes de asilo, incluidas organizaciones del sector terciario que brindan asesoramiento sobre derechos y prerrogativas.

- En julio de 2014, se lanzó la campaña “One Scotland” (Una Escocia) orientada a promover la igualdad para todos y celebrar la diversidad de Escocia. La campaña incluye anuncios en radio y televisión, colaboraciones y actividades en los medios sociales.

29. Las estadísticas de delitos motivados por prejuicios en Escocia muestran que en 2012-2013 la policía registró 4.628 incidentes racistas (un descenso del 14% con respecto a 2011-2012, período en el que se registraron 5.389)⁶³. Las cifras para 2013-2014⁶⁴ indican que ese año se denunciaron a la Fiscalía 4.148 casos relativos a delitos racistas (un incremento del 3% respecto de 2012-2013, aunque es la segunda cifra anual más baja desde 2003-2004). En total, un 93% de los casos denunciados en 2013-2014 desembocó en actuaciones judiciales (incluidas aquellas incorporadas en otros cargos contra el mismo acusado), y no se emprendieron medidas en el 3% de los casos. En relación con las sentencias condenatorias, en 2012-2013 se probó el cargo con el agravante racial, registrado en los términos del artículo 96 de la Ley de Delitos y Disturbios de 1998, en 998 delitos (un incremento de 50 respecto de las cifras de 2011-2012)⁶⁵. Sin embargo, puesto que esas cifras no incluyen los delitos por los que se han iniciado actuaciones judiciales en virtud de otros instrumentos legislativos relativos a los delitos motivados por prejuicios racistas, no representan todos los casos en los que quedó probado el agravante de acoso o conducta racista.

30. En Gales, las escuelas deben mantener un registro de todos los incidentes racistas e informar de ellos a la autoridad local al menos una vez al año. Las directrices del Gobierno de Gales sugieren que los buenos procedimientos de registro permiten a las escuelas demostrar que están tomando medidas para hacer frente al acoso escolar y que las iniciativas son eficaces. En octubre de 2011, el Gobierno de Gales publicó el documento “*Respecting Others*” (Respetando a los demás), una continuación de las extensas directrices contra el acoso escolar que abarca cinco ámbitos clave. Uno de esos ámbitos está dedicado al acoso escolar por motivos de raza, cultura y religión.

31. En 2013-2014, el Gobierno de Gales encargó a Estyn (la oficina del Organismo de Inspección de Educación y Formación en Gales) que revisara la eficacia de las medidas adoptadas por las escuelas para luchar contra el acoso escolar basado en las características protegidas de los alumnos que se establecen en la Ley de Igualdad de 2010. En su informe⁶⁶, que se publicó en junio de 2014, Estyn señaló que, cuando en las escuelas hay un marcado espíritu que promueve la igualdad y la diversidad, los alumnos denuncian menos casos de acoso. El Gobierno de Gales ha tomado ese informe como base para orientar las acciones y políticas futuras en materia de acoso escolar.

32. Véase también el informe de mitad de período del Reino Unido de 2014 presentado en el marco del EPU⁶⁷ y, en lo que respecta a la lucha contra el acoso escolar, el quinto examen periódico del Reino Unido presentado en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño⁶⁸.

⁶³ www.scotland.gov.uk/Publications/2013/12/4535.

⁶⁴ www.copfs.gov.uk/images/Documents/Equality_Diversity/Hate%20Crime%20in%20Scotland%202013-14.pdf.

⁶⁵ www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/DatasetsCrimProc/crimprocaggrav2012-13.

⁶⁶ www.estyn.gov.uk/english/docViewer/315915.6/action-on-bullying-june-2014.

⁶⁷ Informe de mitad de período de 2014, págs. 20 y 21, 67 a 71, 73 a 76, y 119 a 122.

⁶⁸ CRC/C/GBR/5, págs. 44 y 45.

6. Lucha contra la discriminación motivada por la casta

33. En 2013, el Parlamento del Reino Unido decidió que debería haber una protección legislativa expresa contra la discriminación motivada por la casta. Para hacer efectiva dicha protección, se añadiría la casta como uno de los elementos contemplados en las disposiciones relativas a la raza en la Ley de Igualdad de 2010. En mayo de 2013, el Gobierno del Reino Unido presentó su calendario para la introducción de dicha legislación y se encomendaron investigaciones preparatorias a la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos. Los informes de dicha investigación contribuyeron a orientar la reflexión del Gobierno respecto de la legislación. La siguiente medida prevista en el calendario consistía en realizar una consulta pública exhaustiva para recabar opiniones sobre la posibilidad de elaborar una definición legal del término “casta” e identificar qué excepciones previstas en la Ley de Igualdad deberían aplicarse o no a ese elemento. Sin embargo, la consulta se retrasó en espera del resultado de una causa en materia laboral, *Chandhok v. Tirkey*, sometida a un procedimiento judicial interno en 2014. En diciembre de 2014, el fallo del Tribunal Laboral de Apelación⁶⁹ en la causa abrió la posibilidad de poder contar con una reparación legal para las denuncias de discriminación relacionada con la casta en virtud de la legislación nacional vigente, a saber, mediante el elemento “orígenes étnicos” del artículo 9 de la Ley de Igualdad de 2010. El Gobierno del Reino Unido está analizando detenidamente las repercusiones de dicho fallo para la legislación en materia de casta antes de determinar la mejor forma de proceder.

34. En Irlanda del Norte, recientemente ha concluido una consulta acerca de una estrategia destinada a lograr la igualdad racial y una estrategia de buenas relaciones raciales para el poder ejecutivo de Irlanda del Norte. Aunque todavía se están analizando los resultados de una consulta de 19 semanas de duración, ninguno de los encuestados identificó la discriminación por motivos de casta como una cuestión preocupante en Irlanda del Norte. No obstante, el poder ejecutivo de Irlanda del Norte estudiará detenidamente la necesidad de legislar en la materia cuando obtenga pruebas, en su caso, de que se trata de una cuestión problemática que no puede abordarse mediante la legislación existente.

Aumentar la diversidad en la administración pública y el poder judicial

35. Para crear una administración pública de primer orden propia del siglo XXI, el Gobierno del Reino Unido debe reclutar y retener a los mejores funcionarios públicos, independientemente de su origen. Los nombramientos de la administración pública siempre deben efectuarse sobre la base de los méritos, teniendo en cuenta únicamente la capacidad de la persona para realizar el trabajo. La administración pública no puede permitirse excluir a personas en razón, por ejemplo, de su género, etnia, sexualidad, origen social o discapacidad. En septiembre de 2014, el Gobierno del Reino Unido publicó su “*Talent Action Plan*”⁷⁰ (Plan de Acción para el Talento), que se fundamenta en la labor que se realiza para mejorar las capacidades y la gestión del talento en la administración pública. El Plan de Acción, uno de los ejes centrales del Programa de Reforma de la Administración Pública que actualmente está llevando a cabo el Gobierno del Reino Unido, tiene por objeto crear una administración pública de primer orden, adecuada al siglo XXI, en la que las personas con más talento prosperen y alcancen los cargos más altos, independientemente del género, la etnia, la sexualidad o la discapacidad. En lugar de volver a los objetivos que podrían entrar en conflicto con el importante y arraigado principio de reclutar sobre la base del mérito, el Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a adoptar medidas concretas que den lugar a un liderazgo sólido que establezca una cultura abierta y promueva

⁶⁹ www.bailii.org/uk/cases/UKCAT/2014/0190_14_1912.html.

⁷⁰ <https://www.gov.uk/government/publications/talent-action-plan-removing-the-barriers-to-success>.

su talento. Las medidas más inmediatas previstas en el Plan de Acción para el Talento incluyen: abonar una licencia parental compartida en los mismos términos que la licencia de maternidad en toda la administración pública; publicar una declaración de la jefatura que establezca la conducta que se espera de los líderes de la administración pública, y proporcionar información objetiva y rigurosa acerca del desempeño; adoptar medidas para mejorar la experiencia de las mujeres en relación con la licencia de maternidad, entre otras cosas brindándoles más apoyo y efectuando una supervisión más enérgica del desempeño de la administración pública; exigir que los funcionarios de mayor nivel presten apoyo y asesoramiento a los empleados de rango inferior, en particular las personas con talento de grupos insuficientemente representados. El Gobierno del Reino Unido también ha encargado cuatro informes distintos en los que se examinen las experiencias de las mujeres; las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero; aquellas que afirman pertenecer a una minoría étnica; y las personas que afirman tener una discapacidad o un problema de salud de larga duración. El primero de esos informes, *“Women In Whitehall”*⁷¹, elaborado por Hay Group, se publicó el 5 de septiembre de 2014, junto con el Plan de Acción para el Talento. Ese Plan se fundamenta en iniciativas existentes para ayudar a las personas con talento a alcanzar el éxito profesional, independientemente de su género, raza, sexualidad o de si tienen una discapacidad. Entre esas iniciativas figuran, entre otras: el programa “Talento en Aumento” de la asociación Minority Ethnic Talent Association, destinado al personal de raza negra o perteneciente a una minoría étnica con un grado 6/7 y potencial para convertirse en futuros líderes de la administración pública; el programa “Camino para la Acción Positiva”, que tiene por finalidad fomentar la promoción laboral de las mujeres con talento, el personal de raza negra o una minoría étnica, y las personas con discapacidad; y “Cruzando Umbrales”, un programa de orientación con mentores para mujeres de un año de duración.

36. En lo que respecta al poder judicial en Inglaterra y Gales, en 2010 se estableció el Grupo de Trabajo sobre la Diversidad Judicial, integrado por el Gobierno del Reino Unido (Ministerio de Justicia), altos funcionarios del poder judicial, la Comisión de Nombramientos Judiciales, el Consejo de Abogados, la Law Society y The Chartered Institute of Legal Executives, a fin de supervisar la aplicación de las recomendaciones que figuran en el informe del Grupo Asesor Independiente sobre la Diversidad Judicial, presidido por la Baronesa Neuberger⁷². El Grupo de Trabajo publica informes anuales⁷³ sobre el progreso logrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Grupo Asesor. Además de la labor significativa que realizan los demás miembros del Grupo de Trabajo, el Gobierno del Reino Unido ha aplicado, a través del anexo 3, parte 2, de la Ley sobre Delincuencia y Tribunales de 2013⁷⁴, una nueva disposición introducida en julio de 2014 para que se tenga en cuenta la diversidad cuando dos candidatos a un cargo judicial tengan igualdad de méritos. Con esa Ley se introdujo la obligación de que el Lord Canciller y el Presidente del Tribunal Supremo fomentaran la diversidad judicial. Con ella se introdujo también el trabajo remunerado a tiempo parcial en el Alto Tribunal de Justicia (High Court), brindando de ese modo a los altos funcionarios que ocupan cargos judiciales la posibilidad de trabajar con un horario flexible. Durante los últimos 12 meses, los ministros han colaborado con las profesiones jurídicas para intervenir en actividades de divulgación dirigidas a abogados de minorías étnicas y con la profesión de la abogacía para promover un mayor número de solicitudes de candidatos de diversos ámbitos.

⁷¹ <https://www.gov.uk/government/publications/women-in-whitehall-culture-leadership-talent>.

⁷² <https://www.judiciary.gov.uk/publications/advisory-panel-recommendations/>.

⁷³ Véase el informe de 2013 en <https://www.gov.uk/government/publications/improving-judicial-diversity-judicial-diversity-taskforce-annual-report-2013>.

⁷⁴ www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/schedule/13.

37. En Irlanda del Norte, la Administración Pública practica una política de igualdad de oportunidades en sus procesos de selección y se da amplia difusión a todos los puestos vacantes utilizando diversos métodos para velar por que el conocimiento de las oportunidades de empleo lleguen a las personas de todos los orígenes sociales. La gran mayoría de las convocatorias para esos puestos están abiertas a nacionales del Reino Unido, ciudadanos de la Commonwealth y candidatos del Espacio Económico Europeo (EEE). La Administración Pública de Irlanda del Norte sigue un procedimiento de nombramiento basado en los méritos y se adhiere a los principios de reclutamiento establecidos por los comisionados independientes de la Administración Pública. El poder ejecutivo de Irlanda del Norte es consciente de la cuestión y examinará las medidas que se pueden llevar a cabo en el contexto de su nueva estrategia para mejorar la representación de las personas de minorías étnicas en la administración pública.

38. El Gobierno de Escocia tiene un compromiso permanente de evaluar sus procesos para mejorar los resultados en materia de igualdad, y ha consultado a otras organizaciones para saber de qué forma promueven el talento a fin de responder a diversas necesidades. El Gobierno de Escocia está trabajando con redes internas y externas en materia de diversidad para encontrar el mejor modo de atraer a personas con características protegidas a su Programa de Desarrollo para Licenciados Universitarios, el Programa de Desarrollo del Potencial, y los Programas de Pasantías para Licenciados Universitarios. El Gobierno de Escocia apoya los programas de la administración pública destinados, entre otros, a los grupos pertenecientes a minorías étnicas. Por ejemplo, el programa con mentores en el que todos los funcionarios de alto nivel tienen el cometido de brindar asesoramiento al menos a un miembro del personal incluye una rama específicamente orientada a los grupos étnicos minoritarios.

39. En relación con el poder judicial en Escocia, la Junta de Nombramientos Judiciales para Escocia tiene la obligación legal de realizar los nombramientos sobre la base de los méritos y no aplica ninguna medida de discriminación positiva para aumentar la representación de los grupos insuficientemente representados en el poder judicial. Sin embargo, en el desempeño de sus funciones, la Junta debe tener presente la necesidad de fomentar la diversidad entre el grupo de candidatos que reúnan los requisitos necesarios y sean susceptibles de ser recomendados con miras a su nombramiento para un cargo judicial. La Junta lleva a cabo una política de divulgación y diversidad y, en sus anuncios, alienta y muestra interés por recibir candidaturas del mayor número posible de personas que reúnan los requisitos necesarios. El Subgrupo para la Igualdad y Diversidad de la Junta de Justicia⁷⁵ incluye el Servicio de Fiscalía de la Corona, la Policía de Escocia, la Law Society of Scotland, el Servicio Penitenciario de Escocia, el Servicio de Juzgados de Escocia, la Junta de Asistencia Letrada de Escocia y la Dirección de Justicia. Con el fin de subsanar la representación insuficiente que tienen entre los altos funcionarios del sector judicial todas las características protegidas, como las mujeres y los grupos étnicos minoritarios, el Subgrupo está impulsando los seis ejes de intervención siguientes: asesoramiento con mentores destinado al desarrollo del personal; redes transversales de personal del sector judicial para fomentar la confianza y proporcionar apoyo y modelos de referencia; grupos dedicados al personal que establezcan las barreras a la progresión y el desarrollo; programa de formación sobre la parcialidad inconsciente; programa de fuerza de trabajo futura para alentar a los alumnos a que consideren una carrera profesional en el sector de la justicia; y consulta especializada para obtener asesoramiento de un experto acerca de los pasos que se deben seguir a continuación.

⁷⁵ www.buildingsafercommunities.co.uk/justice-board.html.

Gitanos/romaníes e itinerantes

40. El Gobierno del Reino Unido está profundamente preocupado por las desigualdades que sufren los gitanos y los itinerantes, y está firmemente decidido a paliarlas. En abril de 2012, el Grupo de Trabajo Ministerial para Reducir las Desigualdades de los Gitanos y los Itinerantes publicó⁷⁶ un informe sobre los progresos realizados en el que se incluían los 28 compromisos contraídos por todas las instancias del Gobierno del Reino Unido para contribuir a la integración de servicios, como la sanidad, la educación y el empleo, y trabajar mejor con los gitanos y los itinerantes. El Gobierno del Reino Unido ha logrado importantes avances en la consecución de estos compromisos y tiene previsto publicar informes adicionales en que se resuman esos logros.

41. El Gobierno del Reino Unido también alienta a las autoridades locales a que, en consulta con las comunidades locales, ofrezcan emplazamientos adecuados para los itinerantes. El Organismo de Viviendas y Comunidades del Gobierno del Reino Unido prevé que en marzo de 2015 habrá desembolsado 50 millones de libras esterlinas del Fondo para la Creación de Emplazamientos para los Itinerantes a fin de ayudar a los concejos y otros proveedores registrados a que construyan 625 nuevos emplazamientos para itinerantes y rehabiliten 369 emplazamientos existentes. Las autoridades locales han recibido incentivos para crear nuevas viviendas, incluidos emplazamientos para itinerantes, mediante el Plan para el Fomento de la Creación de Nuevas Viviendas.

42. El Gobierno del Reino Unido ha fortalecido la seguridad de la tenencia para las personas que viven en los emplazamientos para itinerantes autorizados por la autoridad local, concediéndoles los mismos derechos que a las personas que viven en otros tipos de emplazamientos para casas móviles.

43. En Irlanda del Norte, la comunidad romaní se sitúa principalmente en Belfast y se ha emprendido una serie de acciones destinadas específicamente a atender sus necesidades. Estas incluyen:

- Un centro de salud familiar semanal con la Asociación de la Comunidad de Romaníes Rumanos de Irlanda del Norte (RRCANI);
- Financiación para el coordinador de la Atención de la Salud Romaní y un trabajador de apoyo (de la comunidad romaní) a fin de prestar servicios a mujeres y niños, con especial atención a la inscripción con un médico generalista, llevar a cabo una labor de coordinación con los demás servicios de atención de la salud, concienciar a la población sobre los servicios y mejorar la asistencia;
- Financiación para un trabajador de apoyo para las familias de raza negra y minorías étnicas que centre su labor en los romaníes;
- Financiación para un programa de apoyo familiar en el este de Belfast destinado a romaníes húngaros y eslovacos;
- Apoyo al Programa de Empleo para Romaníes Rumanos en colaboración con la organización Mediation Northern Ireland (gastos para el cuidado de los hijos);
- Ayudar a la asociación RRCANI a que acceda a la financiación para los proyectos destinados a jóvenes romaníes;

⁷⁶ <https://www.gov.uk/government/publications/reducing-inequalities-for-gypsies-and-travellers-progress-report>.

- Financiación directa a la asociación RRCANI para realizar una cartografía de las familias romaníes y celebrar el Día Internacional de los Romaníes y el Día Nacional de Rumanía;
- Continuar colaborando con el Ayuntamiento de Glasgow y la Municipalidad de Arad (Rumanía) para el intercambio de mejores prácticas, prestando una atención particular a los niños.

44. Con respecto a los servicios de salud, en junio de 2014 se publicó el nuevo marco estratégico definitivo para la atención de la salud pública, “Mejorar la Vida 2013-2023”. Con él se brinda orientación estratégica para políticas y acciones destinadas a mejorar la salud y reducir las desigualdades en la materia. Para ello, será precisa una labor conjunta del Gobierno, el sector estatutario, las comunidades y el voluntariado. A fin de lograr los objetivos de mejor salud y bienestar para todos, y reducir las desigualdades en materia de salud, en el marco se aboga por un enfoque primordial según el cual se debe tener en cuenta la necesidad de aumentar la intensidad de acción para aquellas personas que sufren una mayor desventaja en materia social, económica y de atención de la salud. A tal fin, será necesario adoptar medidas para mejorar los servicios universales, así como para ofrecer más servicios específicos a las personas que más lo necesitan. Se ha reconocido que los itinerantes figuran entre aquellos grupos de población que se enfrentan a desafíos específicos en materia de atención de la salud y bienestar, como, por ejemplo, la vulnerabilidad a ciertas enfermedades y cuestiones más generales como la exclusión social. El Departamento de Salud, Servicios Sociales y Seguridad Pública y el Departamento de Salud y de la Infancia de la República de Irlanda presentaron en septiembre de 2010 el “All Ireland Traveller Health Study” (AITHS), un estudio sobre la salud de los itinerantes en Irlanda. En el estudio se examinaron el estado de salud y las necesidades de todos los itinerantes que viven en Irlanda (Irlanda del Norte y la República de Irlanda). Las conclusiones del estudio proporcionan un marco para la labor futura. En septiembre de 2011 se publicó un estudio de seguimiento de cohortes en materia de natalidad; el estudio se había encargado en 2007 y en él se proporcionaban datos complementarios sobre las madres y los niños itinerantes que pudieran servir de ayuda en la elaboración de políticas futuras. En octubre de 2010 se estableció un Foro Regional sobre la Salud y el Bienestar de los Nómadas para lograr las prioridades establecidas en el estudio AITHS. Cada año se elabora un Plan de Acción Temático sobre Salud y Bienestar Social en el que se reflejan las prioridades del estudio AITHS y se trata de conseguir mejores resultados para los nómadas. El Plan para 2014-2015 cuenta con medidas de acción que se estructuran en torno a las siguientes esferas temáticas: vivienda y alojamiento; apoyo en la primera infancia y rendimiento escolar; empleo y competencias; reducción de la estigmatización; servicios sociales y de atención de la salud para los itinerantes; programas específicos; seguimiento, evaluación e investigación; colaboración y trabajo conjunto.

45. En relación con la vivienda, el Programa de Selección de Vivienda Social en Irlanda del Norte está gestionado por la Dirección de la Vivienda de Irlanda del Norte. En el marco del Programa se evalúa a todos los candidatos mediante un sistema de puntos según sus necesidades en materia de vivienda y se les clasifica en una lista de espera común en orden descendente. A continuación se ofrecen las viviendas a los solicitantes que figuran en la lista de espera, tomando en cuenta las necesidades y la idoneidad de la vivienda para el solicitante en cuestión. Los miembros de la comunidad de itinerantes irlandeses tienen derecho a ser evaluados del mismo modo que el resto de personas de la población.

46. Si un miembro de la comunidad de itinerantes irlandeses busca alojamiento específico para itinerantes, la Dirección de la Vivienda, en virtud del artículo 28A de la Orden de Vivienda (Irlanda del Norte) de 1983, tiene la función de facilitar un

emplazamiento para su caravana. Una serie de asociaciones para la promoción de la vivienda también ofrecen Programas de Vivienda Colectiva (consistentes en proyectos de viviendas residenciales que cuentan con servicios e instalaciones adicionales específicamente concebidos para el alojamiento de familias extensas o itinerantes de forma permanente). En lo que respecta a los emplazamientos para los itinerantes irlandeses, conservados y gestionados por la Dirección de la Vivienda, en virtud de la Ley de Caravanas (Irlanda del Norte) de 2011 se proporciona protección y se establecen los motivos por los que un propietario puede solicitar una orden de posesión. La Dirección de la Vivienda efectúa una evaluación integral de las necesidades de los itinerantes para un período de cinco años, que da lugar a un programa de vivienda quinquenal para esas personas. Todos los lugares se construyen con arreglo a las directrices vigentes relativas a los emplazamientos para itinerantes, que el Departamento de Desarrollo Social (el departamento gubernamental de Irlanda del Norte encargado de la política de vivienda) está actualizando en la actualidad y cuya publicación está prevista para 2015. Anteriormente, la Dirección de la Vivienda puso en marcha actividades de formación para la sensibilización acerca de la cultura de los itinerantes, destinadas al personal y los miembros de la Red Comunitaria de Vivienda a nivel local, su grupo representativo de arrendatarios.

47. El Encargado de Relaciones Raciales de la Dirección de la Vivienda representa a este órgano en el Grupo de Trabajo Interinstitucional para los Romaníes. La finalidad de la Política de Relaciones Raciales de la Dirección de la Vivienda es: “Garantizar que todas las personas de raza negra o pertenecientes a minorías étnicas en Irlanda del Norte puedan disfrutar de un acceso pleno y en pie de igualdad a los servicios de vivienda y las oportunidades de empleo en la Dirección de la Vivienda. Esa política tiene por objeto respaldar la promoción de buenas relaciones entre diversas comunidades y grupos étnicos”. El personal de la Dirección de la Vivienda puede contratar a intérpretes para facilitar el acceso a los servicios, mejorando su prestación y aumentando la satisfacción del cliente. Se han facilitado servicios de interpretación en rumano de forma presencial. Los intérpretes pueden acompañar al personal en las visitas y las entrevistas para explicar claramente su finalidad y, en su caso, tranquilizar y asesorar al residente.

48. Desde el 1 de enero de 2014, todos los ciudadanos búlgaros y rumanos tienen el mismo derecho de acceder a las prestaciones sociales del Reino Unido, como vivienda y asistencia a las personas sin hogar, que los ciudadanos del resto de la Unión Europea y el EEE. Su derecho a acceder a las prestaciones sociales del Reino Unido depende de su actividad económica en el país y de factores como, por ejemplo, si están empleados o si trabajan por cuenta propia. Algunos romaníes de Irlanda del Norte también provienen de Eslovaquia, Hungría y la República Checa, y estos ya cuentan con los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea o el EEE.

49. Han surgido algunas cuestiones relativas a las relaciones raciales asociadas principalmente al elevado número de personas y familias romaníes que viven en el sur y el este de Belfast y a la respuesta ante esa situación. En la actualidad se calcula que viven en esa zona entre 800 y 1.000 romaníes. Los grupos comunitarios han estado trabajado de forma activa durante más de seis años para fomentar las buenas relaciones y promover la cohesión comunitaria entre ese grupo y la comunidad local mediante una serie de iniciativas. Además, un Defensor de la Salud y la Vivienda para los Romaníes ha estado trabajando a tiempo parcial para incluir el asesoramiento en materia de vivienda y otras cuestiones conexas en su ámbito de competencia con miras a garantizar un acceso a la vivienda pleno y equitativo para ese grupo de población desatendido. El poder ejecutivo de Irlanda del Norte reconoce la necesidad de adoptar medidas destinadas en particular a subsanar las claras desventajas que sufren los romaníes y los itinerantes irlandeses, y establecerá un grupo de trabajo de alto nivel encargado específicamente de abordar las cuestiones subyacentes de las desventajas a

que se enfrentan los romaníes y los itinerantes, así como las tensiones en la comunidad.

50. En relación con la educación, un proceso de inscripción abierto brinda a todos los niños, independientemente de su origen, igualdad de oportunidades al solicitar una plaza financiada en la institución educativa de su elección. Ya hay disponible una serie de programas para prestar ayuda a grupos vulnerables específicos, en los que se incluye a los itinerantes. El Servicio de Apoyo Educativo para los Itinerantes presta ayuda a niños y jóvenes itinerantes y a sus familias respecto de una gran variedad de temas en todas las etapas de la enseñanza durante la edad escolar. Se ofrece financiación adicional para alumnos itinerantes matriculados en una escuela a través de la Fórmula de Financiación Común.

51. El Gobierno de Escocia reconoce a los gitanos y los itinerantes como un grupo étnico diferenciado y está trabajando para desarrollar una estrategia y un plan de acción globales para esas comunidades que se publicarán en 2015; esa labor está siendo supervisada por un grupo integrado por los principales interesados (Grupo de Desarrollo de Estrategias para Gitanos e Itinerantes), que incluye miembros de la comunidad de gitanos itinerantes. La estrategia y el plan de acción globales se fundamentarán en las recomendaciones de los informes elaborados por la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Parlamento de Escocia, que llevan por título *Gypsy/Travellers and Care* (los gitanos, los itinerantes y la asistencia) y *Where Gypsy/Travellers Live* (Lugares donde viven los gitanos y los itinerantes). Además, tendrán en cuenta la labor en curso del Grupo de Trabajo sobre los Gitanos y los Itinerantes, y el Grupo de Evaluación de la Educación de los Itinerantes en Escocia.

52. En Gales, la iniciativa “Travelling to a better future” (Viajando hacia un futuro mejor), un marco para la adopción de medidas y plan de ejecución en relación con las personas de las comunidades gitanas y los itinerantes, refleja la visión del Gobierno de Gales para la inclusión de los gitanos y los itinerantes en la sociedad galesa. Incluye 17 objetivos relativos a la vivienda, la salud, la educación y la participación, entre otras esferas.

53. En virtud de la Ley de Vivienda (Gales) de 2014 se impone a las autoridades locales la obligación de procurar emplazamientos para los gitanos y los itinerantes cuando se identifique esa necesidad en las Evaluaciones sobre la Vivienda de Gitanos e Itinerantes. Por primera vez, estas evaluaciones serán examinadas por los ministros galeses, a fin de velar por que hayan seguido una metodología coherente.

54. Con la Ley de Caravanas (Gales) de 2013 se aplica el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa en *Connors c. el Reino Unido* (y posteriormente *Buckland c. el Reino Unido*), garantizando que los residentes de los emplazamientos de la autoridad local para gitanos e itinerantes tengan la debida seguridad de la tenencia, así como los derechos y responsabilidades enunciados en los Acuerdos sobre Emplazamientos.

55. En el proyecto de directriz titulado *Travelling to Better Health* (Viajando hacia una salud mejor) se recogen las expectativas del Gobierno de Gales en cuanto al modo en que las juntas locales de salud deberían garantizar que gitanos e itinerantes tengan acceso a los servicios de salud, incluida la realización de evaluaciones periódicas sobre las necesidades en materia de salud para establecer información de referencia.

Bermudas – edad de consentimiento sexual

56. En la actualidad no se han previsto medidas para igualar la edad de consentimiento sexual. El Código Penal establece la edad de consentimiento sexual en 16 años para las relaciones entre un hombre y una mujer, y en 18 años para las relaciones entre dos hombres (artículos 177 y 179).

Territorio Británico del Océano Índico

57. El “Manual sobre cláusulas finales de tratados multilaterales”⁷⁷ de las Naciones Unidas confirma que: “Al manifestar el consentimiento en obligarse, el Reino Unido puede notificar por escrito al depositario en cuáles de sus territorios, en su caso, se aplicará el tratado. Si el instrumento que expresa el consentimiento en obligarse se refiere únicamente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, este solo se aplicará al territorio metropolitano”.

58. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Reino Unido manifestó su consentimiento en aplicar el Pacto⁷⁸ *únicamente* en nueve de los Territorios Británicos de Ultramar habitados permanentemente (Bermudas; Islas Caimán; Islas Falkland y sus dependencias; Gibraltar; Montserrat; Islas Pitcairn; Santa Elena y sus dependencias; Islas Turcas y Caicos; e Islas Vírgenes (Británicas)), y en las tres dependencias de la Corona (la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey, y la Isla de Man).

59. A la luz de lo que antecede, la aplicación del Pacto no se ha extendido al Territorio Británico del Océano Índico (donde, por tanto, no es aplicable). Por consiguiente, el Gobierno del Reino Unido considera que la recomendación del Comité respecto del Territorio Británico del Océano Índico excede su ámbito de competencia, y que ese Territorio no debería incluirse en los informes periódicos que el Reino Unido presenta en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

60. No obstante, el Gobierno de Reino Unido quisiera señalar a la atención del Comité el hecho de que dicho Territorio no tiene habitantes permanentes. El personal de las fuerzas armadas, los funcionarios y contratistas presentes en el Territorio son tan solo ocupantes temporales sin derecho de residencia. Por tanto, no está claro qué ventajas tendría ampliar el Pacto a este territorio.

61. Con respecto a los chagosianos, el Gobierno del Reino Unido quisiera señalar a la atención del Comité el fallo⁷⁹ de la Cámara de los Lores (la máxima jurisdicción interna en aquel momento, ahora el Tribunal Supremo del Reino Unido), que anuló la decisión en la causa *Bancoult* 2⁸⁰ citada por el Comité; además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa dictaminó⁸¹ en 2012 que los chagosianos ya habían sido plenamente indemnizados. A pesar de esas sentencias, el Gobierno del Reino Unido afirmó que revisaría su política de reasentamiento de los chagosianos en el Territorio Británico del Océano Índico. Con ese fin, en enero de 2015 concluyó un estudio de viabilidad independiente relativo a dicho reasentamiento⁸² y en la actualidad el Gobierno del Reino Unido está ultimando la revisión de la política. Además, la Administración del Territorio Británico del Océano Índico financia y facilita el acceso temporal a ese Territorio para permitir que los anteriores habitantes de las islas puedan realizar visitas “patrimoniales”.

⁷⁷ Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, *Handbook on final clauses of multilateral treaties*, pág. 82.

⁷⁸ Véase *UK Treaties Online* en <http://treaties.fco.gov.uk/treaties/treatyrecord.htm?tid=2535>.

⁷⁹ *R (on the application of Bancoult) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs* [2008] UKHL 61.

⁸⁰ *R (on the application of Bancoult) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs* [2006] EWHC 1038 (Admin).

⁸¹ *Chagos Islanders v. United Kingdom* – 35622/04 [2012] ECHR 2094 (11 de diciembre de 2012).

⁸² La versión preliminar del estudio está disponible en <https://www.gov.uk/government/speeches/publication-of-the-draft-biot-resettlement-feasibility-study>.

7. Estadísticas del sistema de justicia penal

62. El Gobierno del Reino Unido vigila de cerca la cuestión de la raza en el contexto del sistema de justicia penal (véase por ejemplo el Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes) “Informe anual sobre la igualdad de los delincuentes 2013-2014”⁸³, y también “Estadísticas sobre la raza y el sistema de justicia penal 2012”⁸⁴, de carácter más general).

63. En lo que respecta al uso de las facultades de interpelación y registro, cabe señalar que se ha producido un descenso durante el Gobierno actual del Reino Unido desde el período 2010-2011. El Gobierno del Reino Unido también encargó a la Inspección General de Policía de Su Majestad que realizase una inspección temática sobre el uso de esas facultades en 2012; las conclusiones del informe de la Inspección General⁸⁵ fueron motivo de gran preocupación. El Gobierno del Reino Unido inició una consulta pública⁸⁶ sobre las facultades de interpelación y registro en el verano de 2013. La consulta generó una respuesta abrumadora de la población; más de 5.000 personas dieron su opinión, incluida una gran proporción de personas de raza negra y minorías étnicas. La respuesta del Gobierno del Reino Unido a la consulta incluye diversas medidas, como:

- Introducir el “*Best use of stop and search scheme*”⁸⁷ (El mejor uso del régimen de interpelación y registro) para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la comunidad en relación con el uso de esas facultades. Se prevé que todas las fuerzas policiales actúen en consonancia con ese régimen para fines de noviembre de 2015.
- Revisar el Código A (interpelación y registro)⁸⁸ en virtud de la Ley de Policía y Pruebas Penales de 1984 para esclarecer qué constituyen “motivos razonables para tener sospechas”, que es la base legal sobre la cual los agentes de policía llevan a cabo la mayoría de las interpelaciones.

64. En relación con el índice de detenciones, la legislación, a saber, el Código G⁸⁹ en virtud de la Ley de Policía y Pruebas Penales (en el que se tienen en cuenta los requisitos legales en materia de antidiscriminación previstos en la Ley de Igualdad de 2010) sigue siendo el principal punto de referencia de los agentes de policía para el uso de sus facultades de interpelación. En el Código se establece claramente que la detención debe estar plenamente justificada y que la policía debe considerar si los objetivos de la detención pueden lograrse a través de otros medios menos intrusivos. Además, en la Ley de Igualdad de 2010⁹⁰ se establece que es ilegal que, al hacer uso de sus facultades, los agentes de policía discriminen, acosen o victimicen a cualquier persona en razón de los “aspectos que gozan de protección”, esto es, la edad, la discapacidad, el cambio de sexo, la raza, la religión o las creencias, el sexo y la orientación sexual, el matrimonio y la unión civil, y el embarazo y la maternidad.

65. En referencia a las sentencias, cabe señalar que el marco y las directrices vigentes, incluidas todas las circunstancias agravantes y atenuantes, son de naturaleza completamente neutra y aplicables a todos los infractores. Además, la pronunciación de sentencias compete exclusivamente al poder judicial, independiente, que tiene en cuenta todas las circunstancias relativas al delito y al infractor. Por ello, puede haber

⁸³ <https://www.gov.uk/government/statistics/noms-annual-offender-equalities-report-2013-to-2014>.

⁸⁴ <https://www.gov.uk/government/statistics/statistics-on-race-and-the-criminal-justice-system-2012>.

⁸⁵ www.justiceinspectores.gov.uk/hmic/publication/stop-and-search-powers-20130709/.

⁸⁶ <https://www.gov.uk/government/consultations/stop-and-search>.

⁸⁷ <https://www.gov.uk/government/publications/best-use-of-stop-and-search-scheme>.

⁸⁸ <https://www.gov.uk/government/publications/circular-0212014-police-and-criminal-evidence-act-1984-pace-codes-of-practice-revision-to-code-a-stop-and-search>.

⁸⁹ <https://www.gov.uk/government/publications/pace-code-g-2012>.

⁹⁰ www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents.

muchos factores diferentes que influyan en la sentencia (de ahí el número de presos e infractores de raza negra y minorías étnicas en libertad condicional), entre otros la naturaleza y la gravedad del delito cometido y si el infractor se declaró culpable.

66. Respecto del número de presos e infractores de raza negra y minorías étnicas en libertad condicional, cabe señalar que el actual Gobierno del Reino Unido ha aplicado sistemáticamente una política encaminada a reducir la reincidencia y mejorar la rehabilitación. Puede obtenerse una perspectiva general de esta política en el informe de mitad de período del Reino Unido de 2014 presentado en virtud del EPU⁹¹. Además, la Junta de Justicia de Menores: a) trabaja con el College of Policing para influir en los cambios que puedan ocurrir en cuanto a la práctica de interpelación y registro, ya que se aplica a niños y jóvenes; y b) brinda apoyo a los equipos locales que se ocupan de los jóvenes infractores y a los establecimientos penitenciarios, en los que hay constancia de una proporción excesiva de personas de raza negra y minorías étnicas, a fin de que elaboren un plan de acción para abordar la cuestión.

8. Facultades de interpelación y registro en Irlanda del Norte

67. La finalidad de la Ley de Justicia y Seguridad (Irlanda del Norte) de 2007⁹² (Ley de 2007) era introducir una serie de medidas que se consideraban necesarias para cumplir el compromiso de normalización de la seguridad en Irlanda del Norte, garantizando al mismo tiempo que se hubieran instaurado las facultades necesarias para proteger a la población. Las facultades que dispone la Ley de 2007 son específicas para Irlanda del Norte, y siguen siendo necesarias y proporcionadas para proteger a la población frente a la situación de amenaza constante para la seguridad en Irlanda del Norte. En el anexo 3 de la Ley de 2007 se incluyen facultades en virtud de las cuales la policía puede interpelar y registrar a una persona por tenencia ilícita de munición o dispositivos inalámbricos en un lugar público sin una sospecha razonable. En 2012 se introdujo un procedimiento de autorización para el uso de esas facultades mediante la Ley de Protección de las Libertades de 2012⁹³. En las disposiciones de autorización de la Ley de 2007 se establece que, de no haber sospechas, las facultades de interpelación y registro únicamente pueden ejercerse si un alto funcionario de la policía, que tenga al menos el rango de jefe adjunto (Assistant Chief Constable), ha autorizado previamente el uso de dichas facultades en una zona específica y durante un período limitado de tiempo —hasta un máximo de 14 días. A fin de autorizar el uso de la facultad en cuestión, el alto funcionario de la policía debe: a) tener la sospecha razonable de que la seguridad de una o varias personas puede estar amenazada debido a la utilización de munición o dispositivos inalámbricos; y b) considerar razonablemente que la autorización es necesaria para evitar dicha amenaza, y que la zona especificada y la duración de la autorización no exceden la amplitud necesaria para evitar dicha amenaza. Esa autorización debe ser confirmada después por el Secretario de Estado en caso de que tenga una duración superior a 48 horas.

68. La Ley relativa al Código de Prácticas para el Ejercicio de Facultades, de 2007, entró en vigor en 2013, proporcionando así orientación y salvaguardias adicionales sobre la discreción que deberían ejercer los agentes de policía en el ejercicio de esas atribuciones⁹⁴. El formulario de autorización también incluye una orientación detallada sobre las cuestiones que se deben concluir y tomar en consideración antes de que se pueda conceder la autorización. Además, en virtud del artículo 31A de la Ley de la Policía (Irlanda del Norte) de 2000, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte tiene la obligación absoluta de desempeñar sus funciones con el objeto de “garantizar

⁹¹ Informe de mitad de período de 2014, págs. 111 a 115.

⁹² www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/6/contents.

⁹³ www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/9/contents.

⁹⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-for-the-exercise-of-powers-in-the-justice-and-security-northern-ireland-act-2007>.

el apoyo de” y “actuar en cooperación con” la comunidad local; el Servicio de Policía de Irlanda del Norte debe regirse por el Código Deontológico publicado en el artículo 52 de dicha Ley.

69. Las facultades establecidas en la Ley de 2007 están sujetas a un intenso escrutinio y supervisión externos, principalmente por parte de la personalidad independiente encargada de examinar la Ley de 2007, pero también por la Junta de Fiscalización de la Policía en Irlanda del Norte y el Ombudsman de la Policía para Irlanda del Norte, al que se pueden presentar denuncias. La personalidad independiente es nombrada por el Secretario de Estado y debe examinar la aplicación de los artículos 21 a 32, y los anexos 3 y 4 de la Ley de 2007, que abarcan una serie de facultades, entre otras las de interpelación y registro, y las de interpelar e interrogar. Dicha personalidad independiente prepara un informe anual para el Secretario de Estado, que se presenta al Parlamento, en el que debe emitir un juicio sobre si existen motivos para mantener sin cambios las atribuciones durante otro año.

70. En otro orden de cosas, la Junta de Fiscalización de la Policía en Irlanda del Norte tiene la obligación legal de supervisar el desempeño del Servicio de Policía de Irlanda del Norte en su cumplimiento de la Ley de Derechos Humanos. El Comité de Desempeño de la Junta lleva a cabo esta labor de supervisión, que se plasma en informes públicos anuales⁹⁵.

Evaluación y seguimiento de las facultades de interpelación y registro en Escocia

71. La interpelación y el registro conforman una de las numerosas tácticas que utiliza la Policía de Escocia para mantener las calles de Escocia seguras y, utilizada de forma apropiada y proporcionada, es un instrumento eficaz. La Policía de Escocia está decidida a cumplir los requisitos establecidos en la legislación, incluidas la Ley de Reforma de la Policía y Bomberos (Escocia) de 2012, La Ley de Derechos Humanos de 1998, la Ley de Igualdad de 2010, y también el Código Deontológico y de Valores de la Policía⁹⁶, según los cuales la interpelación y el registro deben realizarse con integridad, equidad y respeto. El Gobierno de Escocia celebra el hecho de que la Policía de Escocia esté llevando a cabo una serie de iniciativas para mejorar los procesos de interpelación y registro y de registro de datos, y que colabore de forma activa con las partes interesadas. Para el Gobierno de Escocia es evidente que los órganos pertinentes deberían cuestionar y realizar un escrutinio de forma eficaz y proporcionada en los casos relativos a asuntos de interés público, y acoge con satisfacción la labor llevada a cabo en Escocia por la Autoridad Policial y la Inspección General de Policía de Su Majestad, que desempeñan un papel fundamental para asegurar que los procesos de interpelación y registro están sujetos a la supervisión adecuada.

72. La integridad, la equidad y el respeto son aspectos fundamentales de la ética y los valores de la Policía de Escocia. Se ha revisado la formación que se imparte a fin de garantizar que los derechos humanos, los valores organizacionales y el Código Deontológico se tengan en cuenta en la concepción de todos los cursos. Los nuevos reclutas reciben formación sobre ética y valores, así como sobre el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Ley de Derechos Humanos de 1998. Además, todos los agentes de policía tienen la obligación de realizar la Declaración como Agente de Policía (Declaration of Constable), que incluye el compromiso de defender los derechos humanos fundamentales. Esos principios se han incorporado en funciones esenciales, como los procedimientos operacionales estándar y las órdenes operacionales, y el proceso de

⁹⁵ www.nipolicingboard.org.uk/index/our-work/content-humanrights.htm.

⁹⁶ www.scotland.police.uk/about-us/code-of-ethics-for-policing-in-scotland/.

examen de desarrollo personal se ha revisado para velar por que los valores y el código ético sean principios fundamentales del desarrollo y la progresión. Se ha ofrecido una presentación sobre el código ético y los valores, que incluye la protección de los derechos humanos, a los equipos del personal directivo superior para crear un efecto en cascada hacia todo el personal y los agentes de policía, y se ha enviado a cada miembro del personal una guía de bolsillo sobre los valores, el código ético y el modelo nacional de toma de decisiones.

73. En relación con la interpelación y el registro, los agentes de policía en período de prueba (Probationer Constables) reciben la formación del primer nivel del Programa Nacional de Aprendizaje sobre Métodos de Registro. Se dedican ocho horas de teoría y formación práctica al registro de personas, que abarcan los tres principios de la interpelación y el registro (confianza pública, legalidad y eficacia de la búsqueda), la seguridad de los agentes y los ciudadanos, las consideraciones en materia de derechos humanos y la dignidad de la persona objeto de registro. También incluye información acerca de los cuatro niveles de registro, desde el “inicial” hasta el “íntimo”, así como el procedimiento adecuado para efectuar y emplear registros “consensuales”. La facultad de la policía para registrar a personas se explica y se enseña en relación tanto con el *common law* como con el derecho legislado, y se ofrece orientación sobre las consideraciones que pueden dar lugar a “motivos fundados de sospecha” para registrar a una persona. Se advierte a los agentes que, cuando surgen dichas circunstancias, recae sobre ellos a título personal la responsabilidad de justificar cualquier registro que efectúen. Durante la formación, los agentes observan una demostración de un registro, y ellos mismos realizan un registro ante los instructores para que estos puedan facilitarles consejo e información adicionales, a fin de garantizar que los agentes sean competentes en cuanto a los elementos prácticos del registro y tengan el nivel adecuado de conocimientos en relación con sus facultades al considerar la posibilidad de efectuar el registro de una persona. Además, todos los agentes tienen acceso a un conjunto de herramientas en línea en materia de interpelación y registro.

9. Diversidad en la administración pública y la administración de justicia

74. En comparación con otras instituciones de los sectores público y privado, el Gobierno del Reino Unido se destaca en lo referente a la diversidad entre sus empleados⁹⁷: más de la mitad de los funcionarios (53%) son mujeres, el 10% pertenece a una minoría étnica, y cerca del 9% declara tener alguna discapacidad. Desde 1996, el porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos en la administración pública se ha duplicado con creces; actualmente las mujeres representan más de un tercio del personal directivo (37,9%). Esa proporción de mujeres que ocupan altos cargos supera la de otras instituciones (según el índice FTSE 100, la representación de las mujeres en puestos directivos es del 20,7%). La proporción de funcionarios pertenecientes a minorías étnicas ha aumentado de un 5,7% en 1997 a un 10,1% en marzo de 2014, una cifra ampliamente representativa de la actual población económicamente activa (11,4%). La proporción de funcionarios públicos que afirman tener alguna discapacidad ascendió de un 8,3% en 2012 a un 8,8% en 2014. La representación de las personas con discapacidad en la administración pública casi se ha triplicado desde el 3,1% registrado en 2001. Ese porcentaje es comparable con el de la población económicamente activa que declara tener alguna discapacidad, que actualmente asciende al 11%. Además, el 48,8% de los titulados universitarios que participan en los programas de inserción en la administración pública son mujeres, el 11,5% afirma pertenecer a una etnia minoritaria y el 11,9% tener alguna discapacidad; y entre los

⁹⁷ Fuente: *Civil Service Diversity and Inclusion Team* (Equipo para la Diversidad y la Inclusión en la Administración Pública) (<https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service/about/equality-and-diversity>).

participantes en el programa de formación de funcionarios públicos, el 43% son mujeres y el 16% afirma pertenecer a una etnia minoritaria.

75. Por lo que respecta a la administración de justicia en Inglaterra y Gales, véanse los párrafos 35 a 39. Asimismo, cabe señalar que, mediante la Ley sobre Delincuencia y Tribunales de 2013⁹⁸, el Gobierno del Reino Unido ha introducido el trabajo remunerado a tiempo parcial en el Tribunal Superior y en instancias superiores como medio para incrementar la diversidad judicial a través de la flexibilidad en el trabajo. Eso debería alentar a un mayor número de mujeres a presentar su candidatura para cargos superiores, ya que anteriormente las condiciones de trabajo eran un factor disuasorio para algunas candidatas. La obligación reglamentaria del Lord Canciller de aumentar la diversidad y la disposición de méritos iguales señalada en el punto 11 *supra* también son aplicables a las mujeres. En los tribunales especializados, el 43% de los funcionarios judiciales (que ocupan cargos jurídicos) son mujeres, mientras que en los demás tribunales el porcentaje asciende al 24,5%⁹⁹. Se han registrado mejoras en lo que atañe al número de mujeres nombradas. En un análisis de las tendencias en lo referente a la diversidad de los candidatos y las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos Judiciales¹⁰⁰ se indica que, en comparación con las candidaturas presentadas durante los nueve años que precedieron al establecimiento de la Comisión en 2006, se ha registrado un aumento estadísticamente sustancial del número de candidaturas presentadas por mujeres para todos los cargos judiciales. El número de candidatas recomendadas ha aumentado para todos los cargos judiciales, con un incremento estadísticamente sustancial en 4 de 7 cargos. Con todo, el Gobierno del Reino Unido reconoce que aún tienen que realizarse mejoras, en especial en los tribunales superiores. Junto con la Comisión de Nombramientos Judiciales, la judicatura y los profesionales del derecho, el Gobierno del Reino Unido seguirá desempeñando su labor orientada a aumentar la diversidad.

76. En Irlanda del Norte, la administración pública realiza análisis integrales sobre el perfil de género de sus empleados y reconoce que en algunos cargos y niveles existe una infrarrepresentación de mujeres u hombres en comparación con cargos similares en el resto de la población económicamente activa de Irlanda del Norte. La administración pública de Irlanda del Norte está resuelta a nombrar a personas sobre la base de sus méritos y adopta medidas legales apropiadas de discriminación positiva para atraer a un mayor número de personas de los sexos infrarrepresentados a fin de que presenten sus candidaturas. También se revisan los métodos de contratación a fin de garantizar, en la medida de lo posible, que sean imparciales y brinden las mismas oportunidades a ambos sexos. Uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia sobre la Igualdad de Género 2006-2016 consiste en lograr la igualdad de género en todos los comités, juntas y otros órganos oficiales pertinentes nombrados por el Gobierno. Actualmente se está elaborando una nueva estrategia sobre la igualdad de género, cuyos objetivos son los siguientes: salvar las diferencias estadísticas respecto de la ocupación de los puestos directivos en el sector privado u otras esferas; adoptar un enfoque positivo para la identificación, comprensión y respuesta a las diferentes necesidades de las mujeres y los hombres; elaborar medidas para contrarrestar la infrarrepresentación, por ejemplo revisando las políticas que obstaculizan esa labor; y garantizar que los estereotipos de género no influyan en la elaboración de políticas ni en los procesos de adopción de decisiones.

⁹⁸ www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/contents/enacted.

⁹⁹ <https://www.judiciary.gov.uk/publications/judicial-diversity-statistics-2014/>.

¹⁰⁰ https://jac.judiciary.gov.uk/sites/default/files/sync/basic_page/trend_analysis_december_2014.pdf.

77. En Escocia, el Gobierno ha introducido varias medidas para aumentar la representación de las mujeres (también en la administración pública), a saber:

- Organización en 2012 de la Cumbre sobre el Empleo de la Mujer, cuyo objetivo fue ayudar a las mujeres a alcanzar su máximo potencial en el mercado de trabajo de Escocia; las medidas de la Cumbre están siendo aplicadas por el Grupo Estratégico sobre la Mujer y el Trabajo y el Grupo Interinstitucional sobre la Segregación en el Empleo;
- Ampliación, en agosto de 2014, del programa de aprendizaje en la primera infancia y guardería infantil, con un incremento de horas anuales de 475 a un mínimo de 600, para los niños de 3 a 4 años de edad, y la incorporación de un 15% de los niños de 2 años más vulnerables y desfavorecidos (está previsto que ese porcentaje aumente al 27% a partir de agosto de 2015)¹⁰¹;
- Desembolso de 200.000 libras esterlinas adicionales para la Alianza de Lucha contra la Pobreza a fin de incrementar de 70 a al menos 150 el número de empleadores acreditados que pagan el salario mínimo vital en Escocia¹⁰²;
- Dotación de 250.000 libras esterlinas (a lo largo de dos años) para la iniciativa CareerWise, lanzada en abril de 2013 con el fin de alentar a un mayor número de mujeres a considerar la posibilidad de hacer carrera en las esferas de la ciencia, la tecnología y la ingeniería;
- Publicación, el 15 de diciembre de 2014, de un plan de aplicación para las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo de los Trabajadores Jóvenes de Escocia¹⁰³, en el que se contempla, entre otras cosas, el fomento de la participación de la mujer;
- Desembolso de 601.000 libras esterlinas para la organización Equate Scotland (entre 2012 y 2015), a fin de fomentar la contratación, la retención, el retorno y el éxito de las mujeres en las esferas en que se encuentran sustancialmente infrarrepresentadas, y de 615.000 libras esterlinas para la organización Close the Gap (entre 2012 y 2015), con miras a cambiar las prácticas de empleo y la cultura del lugar de trabajo para promover la igualdad de género y combatir las diferencias salariales.

78. También cabe señalar que el Gabinete de Ministros de Escocia tiene una composición equilibrada entre hombres y mujeres, y que en el Programa de Gobierno para Escocia 2014-2015¹⁰⁴ (publicado el 26 de noviembre de 2014) se contempla el compromiso de alentar a los sectores público, terciario y privado a fijarse el objetivo voluntario de conseguir la paridad de género en sus juntas para 2020. Por lo que respecta a la administración pública, el Gobierno de Escocia promueve activamente la presentación de candidaturas de mujeres y está explorando medios para aumentar su representación, entre otras cosas mediante un evento titulado “Mujeres a bordo: la diversidad al servicio de la calidad”, el “Consejo de Juntas Públicas y Supervisión del Programa de Fomento de la Diversidad en las Empresas”¹⁰⁵, el Programa de Desarrollo para Titulados, el Programa de Explotación del Potencial y proyectos de pasantía para titulados.

¹⁰¹ www.scotland.gov.uk/Topics/People/Young-People/legislation.

¹⁰² www.scotland.gov.uk/Publications/2014/11/6336.

¹⁰³ www.scotland.gov.uk/Topics/Education/edandtrainingforyoungple/commissionondevelopingscotlandyoungworkforce.

¹⁰⁴ www.scotland.gov.uk/Publications/2014/11/6336.

¹⁰⁵ www.scotland.gov.uk/Topics/People/Equality/PublicBoardsCorporateDiversityProg/Documents.

79. En cuanto a la administración de justicia de Escocia, el número de mujeres que la componen¹⁰⁶ ha aumentado desde 1998, año en el que solo había una magistrada y 12 juezas titulares de primera instancia (sheriffs) entre los empleados a tiempo completo de la administración de justicia. En 2002 esa cifra se había casi duplicado, y desde entonces se ha registrado un incremento considerable en el porcentaje de juezas de los tribunales superiores (senators), del 9% al 26%, aunque todavía deben realizarse mejoras en otras esferas.

80. En Gales, la representación de mujeres y hombres en el Gobierno¹⁰⁷ es del 58% y el 42%, respectivamente. Si bien no hay dificultades para atraer a las mujeres hacia la administración pública, existen claramente obstáculos que les impiden ascender a cargos de mayor rango. Para hacer frente a ese problema, se está a punto de poner en marcha un programa de desarrollo destinado a las mujeres con alto potencial en el ejecutivo, que tiene por finalidad prestarles apoyo para ascender a cargos directivos de la administración de justicia.

81. Véanse también los párrafos 35 a 39.

Diferencia salarial por razón de sexo

82. Durante muchos años, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el Reino Unido no ha dejado de disminuir y actualmente se sitúa en el nivel más bajo jamás registrado; las mujeres de menos de 40 años que trabajan a tiempo completo perciben un salario superior al de los hombres del mismo grupo de edad. En particular¹⁰⁸, la diferencia salarial media por razón de sexo ha disminuido al 19,1% si se consideran en conjunto todos los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, y al 9,4% si se consideran únicamente los trabajadores a tiempo completo.

83. El Gobierno del Reino Unido ha adoptado medidas tanto legislativas como voluntarias para reducir la diferencia salarial por razón de sexo. El 10 de marzo de 2015 se introdujo una modificación del proyecto de ley relativo a las pequeñas empresas y el empleo, por la que se aplicará el artículo 78 de la Ley de Igualdad de 2010. Eso conllevará la necesidad de imponer a las grandes empresas la obligación de presentar informes de género.

84. El Gobierno del Reino Unido sigue realizando avances en su colaboración con el sector privado para fomentar las aptitudes femeninas en el lugar de trabajo a través de iniciativas tales como “Reflexionar, Actuar, Informar”, en cuyo marco las empresas se comprometen a *reflexionar* acerca de la igualdad de género entre sus empleados, recabando y examinando los datos recogidos en toda la empresa; *actuar* en los ámbitos en los que se haya identificado la necesidad de hacerlo; y finalmente *informar* de los avances realizados. Ya hay resultados tangibles: 270 empresas, que en su conjunto emplean a más de 2,5 millones de trabajadores, han hecho suyos los principios encarnados en la iniciativa; la gran mayoría de las empresas que se han adherido a ella ya están tomando medidas para fomentar las aptitudes femeninas.

85. En estrecha colaboración con el Consejo Empresarial de Mujeres, el Gobierno del Reino Unido también ha establecido políticas a largo plazo que tienen por objeto, entre otras cosas, alentar a las niñas a optar por una gama más amplia de carreras profesionales, incluidas las que se inscriben en el marco de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; transformar el lugar de trabajo a fin de brindar a las mujeres una oportunidad justa de alcanzar los más altos niveles de dirección, a través de iniciativas que tengan por objeto promover más modelos femeninos; modernizar las

¹⁰⁶ Fuente: Gobierno de Escocia.

¹⁰⁷ Fuente: Gobierno de Gales.

¹⁰⁸ www.ons.gov.uk/ons/rel/ashe/annual-survey-of-hours-and-earnings/2014-provisional-results/stb-ashe-statistical-bulletin-2014.html#tab-Gender-pay-differences.

prácticas de contratación y contribuir al cambio de la cultura empresarial, y promover una mayor transparencia en los pagos para garantizar que las mujeres reciban un salario igual por un trabajo de igual valor.

86. Desde la entrada en vigor, el 1 de octubre de 2014, del Reglamento de 2014 por el que se desarrolla la Ley de Igualdad de 2010, relativo a las auditorías de igualdad salarial, toda empresa declarada culpable ante el Tribunal del Trabajo en un caso de diferencia salarial será objeto de sanciones más severas (podrá, por ejemplo, recibir la orden de realizar una auditoría sobre las remuneraciones cuando se sospeche la existencia de discriminación sistémica).

87. En Irlanda del Norte, la administración civil ha aplicado el denominado Examen Integral de la Remuneración y la Clasificación de Puestos para abordar los problemas relativos a la igualdad salarial. Según estadísticas oficiales¹⁰⁹ publicadas el 18 de diciembre de 2014, la diferencia entre la remuneración de los hombres y de las mujeres en la administración pública de Irlanda del Norte ha seguido disminuyendo gracias a esta medida.

88. En Escocia, el Convenio sobre Trabajo Justo tiene por objeto fomentar el diálogo entre los sindicatos, los empleadores, los órganos del sector público y el Gobierno. Las mujeres tienden a trabajar en sectores de baja remuneración y el Convenio está destinado a desarrollar, promover y mantener un marco laboral justo para Escocia mediante, entre otras cosas, recomendaciones basadas en pruebas para el establecimiento de un salario mínimo y la formulación de políticas que favorezcan al mayor número posible de trabajadores con salarios bajos y contribuyan a un crecimiento económico sostenible. Con las políticas del Gobierno de Escocia relativas a la remuneración en el sector público se sigue exigiendo que las entidades públicas garanticen una remuneración justa y no discriminatoria y apoyen las labores de sensibilización y promoción para la adopción por los trabajadores y los empleadores de medidas orientadas a abordar las causas de la desigualdad salarial y a salvar esa diferencia.

89. En Gales, el Gobierno introdujo la obligación de respetar la igualdad en el sector público con el fin de hacer frente las diferencias de remuneración y empleo, y en particular las diferencias salariales por razón de sexo. Esta obligación se impuso en virtud del Reglamento por el que se desarrolla la Ley de Igualdad de 2010, relativo a las obligaciones reglamentarias (Gales).

90. Todos los empleadores del sector público de Gales con más de 150 empleados también tienen la obligación de presentar informes anuales no solo sobre las diferencias salariales por razón de sexo, sino también sobre las disparidades existentes entre hombres y mujeres en lo que atañe a la categoría, el oficio y otros aspectos relativos al trabajo que resultan en diferencias salariales. Los Ministros de Gales tienen la obligación de publicar un informe sobre el modo en que las autoridades públicas autónomas de Gales cumplen con su obligación de respetar la igualdad en el sector público. El primer informe se publicará el 31 de diciembre de 2014 y posteriormente cada cuatro años. En el informe se evaluarán los avances realizados en relación con las exigencias de la obligación, se destacarán los resultados positivos y se identificarán los obstáculos a su aplicación.

91. Además, el proyecto “Women Adding Value to the Economy” (Mujeres que agregan valor a la economía) contará con la financiación del Fondo Social Europeo, a través del Gobierno de Gales y de sus asociados en el proyecto (la Universidad de Gales del Sur, la Universidad de Cardiff y la organización Women’s Workshop), hasta junio de 2015. En la Universidad de Cardiff, el equipo del proyecto está esquematizando la interrelación entre el género, los oficios, los tipos de contrato y la

¹⁰⁹ Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

remuneración en Gales. El equipo trabaja directamente con grandes empleadores dispuestos y comprometidos para analizar las diferencias salariales entre hombres y mujeres y dar consejo sobre las medidas que se pueden adoptar, y comparte ese conocimiento con un gran número de empleadores en todo Gales, de tal modo que estos puedan abordar las causas de las diferencias salariales por razón de sexo en sus propias organizaciones. El 22 de septiembre de 2014 se puso en marcha en el marco del proyecto el denominado barómetro de igualdad salarial. Esa herramienta de búsqueda en línea señala los cargos que ocupan los hombres y las mujeres, ya sea a tiempo completo o parcial, el salario medio que perciben por el desempeño de esas funciones y los sectores en que existen diferencias salariales por razón de sexo. Con ese barómetro se pretende facilitar a las personas la identificación de los ámbitos en que existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, y alentar a las mujeres a considerar la posibilidad de optar por trayectorias profesionales menos tradicionales.

92. Véase también el informe de mitad de período presentado por el Reino Unido en el marco del EPU¹¹⁰.

Legado del conflicto en Irlanda del Norte

93. La situación en Irlanda del Norte tal como se la define en el derecho internacional nunca se consideró como un conflicto armado, por lo que la aplicación de las disposiciones de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad¹¹¹ con respecto a Irlanda del Norte resultaría inoportuna. Aun así, el Gobierno del Reino Unido considera que algunos aspectos de esa resolución son aplicables a Irlanda del Norte, como los relacionados con la participación de la mujer en la vida pública y política. El Gobierno del Reino Unido seguirá fomentando una mayor representación de las mujeres en la vida pública y política de Irlanda del Norte.

10. Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas

94. La violencia contra las mujeres y las niñas es un delito inadmisibles que el Reino Unido está resuelto a eliminar.

95. En la estrategia denominada “*Call to End Violence Against Women and Girls*” (Llamamiento a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas)¹¹², publicada el 25 de noviembre de 2010, se establecen los cuatro principios fundamentales por los que se rige el Gobierno del Reino Unido para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas: prevenir cualquier acto de violencia en primer lugar; prestar servicios adecuados a las víctimas; trabajar en colaboración con socios; y reducir el riesgo y llevar a los autores ante la justicia. Para facilitar la aplicación de la estrategia, se han elaborado planes de acción anuales¹¹³ para cada uno de los últimos cuatro años. En el último informe sobre los avances realizados, publicado el 8 de marzo de 2015¹¹⁴, se describen las medidas adoptadas por el Gobierno del Reino Unido en los últimos cinco años para poner coto a esos graves delitos, a saber:

- La asignación de un fondo fijo de cerca de 40 millones de libras esterlinas hasta 2015 para servicios de apoyo especializados y líneas de asistencia telefónica nacionales.

¹¹⁰ Informe de mitad de período de 2014, págs. 79 a 81.

¹¹¹ [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325\(2000\)&referer=/english/&Lang=S](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)&referer=/english/&Lang=S).

¹¹² <https://www.gov.uk/government/publications/call-to-end-violence-against-women-and-girls>.

¹¹³ <https://www.gov.uk/government/collections/ending-violence-against-women-and-girls-action-plans>.

¹¹⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/call-to-end-violence-against-women-and-girls-progress-report-2010-to-2015>.

- La tipificación como delito del matrimonio forzado (véase por ejemplo la Ley relativa a las Conductas Antisociales, la Delincuencia y la Vigilancia Policial de 2014¹¹⁵) y de dos nuevos delitos de acoso.
 - La introducción de las órdenes de protección en casos de violencia doméstica y de un programa para la publicación de información sobre personas con antecedentes de violencia doméstica en toda Inglaterra y Gales. Las órdenes de protección son un nuevo medio para subsanar las “deficiencias” en materia de protección de las víctimas en la medida en que permiten a la policía y a los tribunales aplicar medidas de protección inmediatamente después de un incidente de violencia doméstica; en el programa para la publicación de información (conocido también como “Clare’s Law”) se introducen procesos reconocidos y uniformes que permiten a la policía facilitar a una persona información sobre delitos violentos cometidos en el pasado por su pareja, nueva o ya existente, cuando se considere que ello pueda contribuir a proteger a las víctimas contra nuevos delitos violentos.
 - La introducción, en abril de 2011, de los exámenes de casos de homicidio relacionados con la violencia doméstica, de manera que las zonas y los organismos locales puedan identificar las lecciones aprendidas para ayudar a prevenir otros homicidios y actos de violencia contra las mujeres y las niñas.
 - El encargo por la Inspección Nacional de Policía de una evaluación de las medidas adoptadas por la policía ante la violencia doméstica; actualmente se están estudiando las conclusiones de dicha evaluación.
 - La puesta en marcha de campañas de prevención para hacer frente a las violaciones y los abusos entre los adolescentes dentro de la pareja.
 - La introducción de un plan de acción nacional de lucha contra las violaciones para garantizar que las víctimas reciban la ayuda que merecen.
 - La tipificación, en enero de 2015, de un nuevo delito de violencia doméstica, a saber: la conducta coercitiva y de control (para la que se prevé una pena máxima de cinco años de cárcel y una multa).
 - La intensificación sustancial de las medidas para acabar con la mutilación genital femenina, entre ellas:
 - La celebración, en julio de 2014, de la primera “Cumbre para las Niñas”¹¹⁶, en la que se formuló una declaración de condena de la mutilación genital femenina que fue firmada por más de 300 líderes religiosos de las principales confesiones.
 - El establecimiento de una dependencia especializada en la cuestión de la mutilación genital femenina¹¹⁷.
 - La imposición de la obligación para todos los profesionales de la atención de la salud y la asistencia social y los profesores de denunciar a la policía los casos de mutilación genital femenina.
 - La introducción de una nueva orden de protección civil para proteger a las víctimas o posibles víctimas de la mutilación genital femenina.
96. El objetivo perseguido en Irlanda del Norte consiste en prestar servicios y medios de apoyo efectivos a todas las víctimas y todos los testigos, y hacer que los

¹¹⁵ www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/part/10.

¹¹⁶ <https://www.gov.uk/government/news/girl-summit-2014-outcomes-and-commitments>.

¹¹⁷ <https://www.gov.uk/government/collections/female-genital-mutilation>.

autores de delitos tengan que responder de sus actos. Entre los principales logros y avances realizados en Irlanda del Norte cabe destacar los siguientes:

- Las conferencias interinstitucionales de evaluación de riesgos, para examinar los casos de violencia doméstica y abuso de alto riesgo y disponer medidas y recursos apropiados para garantizar la seguridad de las víctimas y sus hijos. Desde enero de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2014 se examinaron 7.752 casos que afectaban a 10.131 niños. Entre las víctimas, 6.024 eran mujeres (95,4%) y 284 eran hombres (4,6%)¹¹⁸.
- La línea de asistencia telefónica para víctimas de violencia doméstica y sexual, operativa las 24 horas del día: esa línea de asistencia telefónica, que anteriormente solo atendía a las víctimas de violencia doméstica, se ha ampliado para incluir a las víctimas de violencia sexual. Según las cifras de 2013 y 2014¹¹⁹, se respondió a 50.335 llamadas (765 hombres recibieron asistencia a través de esta línea telefónica, lo que equivale al 1,5% de las llamadas atendidas).
- Actualmente se somete a las mujeres embarazadas a interrogatorios de rutina, como parte de los cuidados prenatales, para determinar si han sido o son víctimas de violencia o abusos.
- El establecimiento de “The Rowan” (El Serbal), el primer centro de derivación de casos de agresión sexual de Irlanda del Norte. El centro está situado en el hospital de la región de Antrim y fue inaugurado en mayo de 2013. Desde entonces se han enviado al centro 781 personas para recibir asistencia. La mayoría de ellas (un 87%) eran mujeres, y el 42% eran niños y jóvenes¹²⁰.
- La publicación de un directorio regional de servicios para las víctimas y sobrevivientes de actos de violencia sexual.
- Desde el período 2010-2013, en el marco del programa “Helping Hands” (Manos amigas), establecido por el Departamento de Educación de Irlanda del Norte y aplicado por la Women’s Aid Federation (Federación de Asistencia a la Mujer) de Irlanda del Norte, se ha impartido capacitación a más de 500 maestros en 332 escuelas primarias¹²¹. Con el programa se ayuda a los maestros a entender el contexto y los efectos de la violencia doméstica en las vidas de los niños y sus familias y a elaborar estrategias de prevención e intervención tempranas en relación con los niños que se sienten desprotegidos, en particular los niños afectados por la violencia doméstica.
- La potestad de los tribunales de imponer órdenes de alejamiento se hizo efectiva el 30 de septiembre de 2009, en virtud de la Ley sobre Violencia Doméstica, Delitos y Víctimas de 2004, y con ella se brinda una mayor protección a las víctimas de acoso y de abusos relacionados con la violencia doméstica.
- La introducción de cambios para que un mayor número de personas pueda beneficiarse de asistencia letrada para solicitar una orden de protección contra abusos y conseguir de ese modo la protección judicial que necesitan para ellas mismas y sus familias; esos cambios se hicieron permanentes en diciembre de 2011. Los cambios deben garantizar que ninguna víctima de violencia doméstica tenga que preocuparse por los gastos que conlleva la solicitud de una orden de protección contra abusos.

¹¹⁸ Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

¹¹⁹ Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

¹²⁰ Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

¹²¹ Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

- Los oficiales de policía especializados en casos de violencia en el hogar y las dependencias de protección pública. En 2008 se establecieron dependencias de protección pública en cada distrito policial; entre estas dependencias cabe destacar la unidad de investigación de abusos de menores, la unidad de violencia en el hogar, la unidad de tratamiento de los delincuentes sexuales y la unidad de personas desaparecidas y vulnerables. Esa estructura permite adoptar medidas más robustas para hacer frente a los diversos delitos, a través de métodos mejorados de recopilación e intercambio de información.
- Las medidas especiales adoptadas para ayudar a los testigos vulnerables e intimidados a prestar declaración en las mejores condiciones posibles.
- Los acuerdos de protección pública para Irlanda del Norte. Mediante el Decreto de Justicia Penal de 2008 (Irlanda del Norte), se dotó al Departamento de Justicia de las facultades legislativas necesarias para formular orientaciones destinadas a los organismos especializados con miras a evaluar y gestionar el riesgo que representaban determinados delincuentes. Las orientaciones por las que se establecieron los acuerdos de protección pública para Irlanda del Norte se publicaron en 2008.
- El Programa Integrado de Lucha contra la Violencia en el Hogar para delincuentes. La Junta de Libertad Condicional de Irlanda del Norte inició la puesta en marcha del Programa en 2009. La Junta cumple las prescripciones adicionales establecidas por los tribunales.
- La estrategia quinquenal para las víctimas y los testigos, publicada en junio de 2013, primera desde la descentralización, con 51 medidas fundamentales. Entre los principales elementos de esa estrategia figuran una nueva Carta de Derechos de las Víctimas y el establecimiento de una “dependencia de atención a las víctimas y los testigos”.
- La prestación de servicios de asesoramiento para las víctimas de violencia sexual de más de 16 años de edad;
- Una nueva Carta de Derechos de las Víctimas, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2014. En ella se establecen los derechos de las víctimas de delitos en los procedimientos penales, el nivel de servicios que pueden exigir y los medios de apoyo disponibles. En la Carta también se establecen claramente las obligaciones que tienen los proveedores de servicios de cumplir esos derechos. La Carta es aplicable a todas las víctimas de delitos.

97. En 2004 se estableció el Servicio de Interpretación para el Sector de la Asistencia Sanitaria y Social de Irlanda del Norte. A lo largo de los años, el uso de ese Servicio ha aumentado de 1.850 solicitudes en el ejercicio 2004-2005 a más de 84.000 en el ejercicio 2013-2014¹²². Actualmente, el Servicio abarca 35 idiomas y utiliza una lista centralizada de más de 430 intérpretes, todos los cuales han sido acreditados como profesionales de nivel 4 por el Open College Network Northern Ireland, un organismo de calificación profesional, o están realizando las gestiones necesarias para ello. Se han elaborado programas de desarrollo profesional para intérpretes en varios ámbitos complejos, como la salud mental, la violencia doméstica, el habla y el lenguaje, la gestión de experiencias traumáticas y el trabajo social y la maternidad. En la Universidad Queen’s de Belfast se imparte capacitación a los estudiantes de medicina, en el marco del módulo para médicos generalistas, sobre las buenas prácticas de colaboración con los intérpretes, con el fin de que los médicos comprendan su deber legal de ofrecer servicios de interpretación, así como las

¹²² Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

ventajas que conlleva el uso de los servicios de un intérprete profesional y acreditado para atender a un paciente que no domina el inglés como primera o segunda lengua.

98. En Escocia, el Gobierno destinó un total de 34,5 millones de libras esterlinas durante el período 2012-2015 a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, y sigue trabajando en estrecha colaboración con sus principales asociados, como la Policía de Escocia, las autoridades locales, las juntas del Servicio Nacional de Salud y organizaciones voluntarias. En junio de 2014, el Gobierno de Escocia publicó la estrategia denominada *“Equally Safe: Scotland’s strategy for preventing and eradicating violence against women and girls”*¹²³ (Igualmente seguras: la estrategia de Escocia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas). El Gobierno de Escocia también se comprometió a celebrar consultas en 2015 sobre la definición de un nuevo delito específico de violencia en el hogar a fin de reflejar mejor la realidad de las víctimas, y brindó apoyo a la Policía de Escocia para llevar adelante su proyecto piloto del “Programa para la Comunicación de Información sobre Personas con Antecedentes de Violencia en el Hogar”, que se puso en marcha el 25 de noviembre de 2014.

99. En junio de 2014 se sometió a la Asamblea Nacional de Gales un proyecto de ley orientado a combatir la violencia contra la mujer, la violencia en el hogar y la violencia sexual. En esa ley no se abordarán cuestiones relacionadas con la justicia penal; más bien, se complementarán las disposiciones penales en vigor, centrándose en las cuestiones sociales en materia de prevención, protección y apoyo.

100. La ley estará respaldada por una serie de iniciativas de política fundamentales. Esas iniciativas incluyen actividades para garantizar que se impartan cursos sobre relaciones saludables en todas las escuelas, y que las escuelas adopten un “enfoque escolar integral” al abordar la violencia de género, la violencia en el hogar y la violencia sexual, además de un “marco nacional de capacitación”, con arreglo al cual se impartirá una formación sistemática para los profesionales de todos los principales sectores públicos y los proveedores de servicios especializados en todo Gales. También se han registrado avances considerables en la ejecución del “10,000 Safer Lives Project” (Proyecto para 10.000 vidas más seguras). Entre abril de 2011 y marzo de 2014, más de 7.000 personas declararon estar más seguras o sentirse más a salvo como resultado del apoyo directo de las organizaciones especializadas creadas por el Gobierno de Gales. Cabe mencionar como un logro fundamental del Proyecto que las 42 organizaciones autónomas de la administración pública de Gales han establecido o revisado sus políticas laborales relativas a la violencia en el hogar, la violencia contra las mujeres y la violencia sexual, y están trabajando para promover y aplicar esas políticas. Junto con el apoyo de los directores y de los departamentos de recursos humanos, con esas políticas se facilitará a los empleados la posibilidad de recibir orientación y servicios para hacer frente a situaciones difíciles sin dejar el trabajo. El Gobierno de Gales también incrementó el presupuesto destinado a combatir la violencia contra la mujer y la violencia en el hogar de 3,6 millones a 4 millones de libras esterlinas para el período 2014/15. En el próximo ejercicio presupuestario, los ingresos y los fondos de capital alcanzarán los 5 millones de libras esterlinas. Esos fondos van dirigidos a organizaciones asociadas para prestar servicios eficaces en todo Gales, incluida una línea de asistencia telefónica especializada en la violencia en el hogar y la violencia sexual operativa las 24 horas del día, así como cursos sobre relaciones saludables en las escuelas. El fondo también se utiliza para campañas de sensibilización.

¹²³ www.scotland.gov.uk/Publications/2014/06/7483.

Bermudas – eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas

101. El Ministerio Público de las Bermudas reconoce la importancia de los casos de esa naturaleza; cuando se producen casos de violencia doméstica y agresión sexual, se designa lo antes posible a un fiscal para que se ocupe de ellos, desde la acusación inicial hasta el pronunciamiento de la sentencia. Los fiscales y el personal de la dependencia de atención a los testigos reciben formación junto con los agentes de las fuerzas del orden, los proveedores de servicios para las víctimas y el personal médico para la preparación y el enjuiciamiento de los casos de agresión sexual, con miras a brindar una mejor asistencia a las víctimas y llevar a los delincuentes ante la justicia. Además, las Bermudas cuentan con los siguientes instrumentos en los que se aborda la violencia contra la mujer:

- La Ley sobre la Violencia Doméstica, en la que se contempla un recurso civil contra el abuso para las personas que viven con sus parejas, independientemente de su estado civil.
- La Ley sobre el Acoso, en virtud de la cual se prohíbe el acoso y en la que se contempla el endurecimiento de las sanciones y las penas en los casos en que haya circunstancias agravantes, así como la emisión de órdenes de protección.
- El Código Penal, que contiene una serie de delitos de agresión sexual con sus correspondientes sanciones penales, a fin de reflejar los diversos grados de gravedad asociados a los distintos tipos de agresión. En ese instrumento se reconoce la violación conyugal como un delito, se elimina el requisito de la corroboración en los casos de delitos sexuales, se declara inadmisibles (con algunas excepciones) cualquier prueba sobre la actividad sexual de la víctima, se declaran inadmisibles las pruebas sobre la reputación sexual de la víctima y se protege la privacidad del demandante de las audiencias públicas y la publicación.

102. El Servicio de Policía de las Bermudas recibe cada mes una media de 70 denuncias de incidentes de carácter doméstico¹²⁴, 15 de los cuales entrañan algún tipo de violencia física. La mayoría de los agresores son hombres y el porcentaje de víctimas de sexo femenino es del 95%. Algunos de esos incidentes consisten en enfrentamientos verbales, conflictos relacionados con la guarda y custodia de los hijos, el incumplimiento de órdenes judiciales y conductas amenazadoras. Los incidentes también pueden ser de diversa naturaleza, desde las agresiones comunes hasta las agresiones graves y las agresiones sexuales. El Servicio de Policía de las Bermudas sigue velando por que en cada curso de formación de reclutas se imparta capacitación sobre el modo en que debe abordarse la violencia en el hogar. Alrededor del 95% de todos los agentes en servicio han recibido capacitación en esa esfera. Además, el Servicio de Policía de las Bermudas cuenta con una política sobre la violencia doméstica, actualizada en 2014, que sirve como estrategia de resolución de problemas para brindar asistencia a las víctimas de actos de violencia en el hogar dentro de la comunidad. El Servicio de Policía de las Bermudas también cuenta con un funcionario de enlace para casos de violencia doméstica, entre cuyas tareas figuran las siguientes:

- Asistencia a las víctimas de violencia doméstica en los procesos de solicitud de una orden de protección y, con carácter más general, en los procedimientos judiciales;
- Establecimiento de contactos con las diversas partes interesadas, como las organizaciones benéficas Women's Resource Centre y Centre Against Abuse; el Servicio para la Infancia y la Familia; los servicios de protección de la infancia y la familia y de atención residencial; los centros de día; el Servicio de Orientación

¹²⁴ Fuente: Gobierno de las Bermudas.

para Jóvenes de las Bermudas; y el Equipo de Respuesta ante Agresiones Sexuales (un equipo especializado que atiende a víctimas de agresión sexual, violencia doméstica, y abuso y abandono de menores).

Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en Irlanda del Norte

103. En primavera de 2015 se publicará una nueva estrategia titulada “*Stopping domestic and sexual violence and abuse*” (Acabemos con la violencia doméstica y sexual), que responderá a las necesidades de las víctimas y los sobrevivientes de actos de violencia doméstica y sexual. En la estrategia se destacarán las necesidades particulares de los distintos grupos. La publicación de la nueva estrategia vendrá acompañada de un plan de acción en el que se contemplará, entre otras cosas, la adopción de nuevas medidas para garantizar a las víctimas una protección oportuna y adecuada. Ello entrañará la necesidad de estudiar la posibilidad de introducir notificaciones y órdenes de protección en Irlanda del Norte, como las recientemente introducidas en Inglaterra y Gales. Junto con el Gobierno del Reino Unido, el poder ejecutivo de Irlanda del Norte está mejorando la normativa para hacer frente al problema de la mutilación genital femenina (de hecho, el Parlamento del Reino Unido está examinando un proyecto de ley sobre los delitos graves).

104. Véanse asimismo los párrafos 94 a 100.

11. Legislación de lucha contra el terrorismo

105. En el artículo 1 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000¹²⁵ se define el terrorismo como toda acción o amenaza concebida para influenciar al Gobierno (incluidos los gobiernos extranjeros) o a una organización internacional, o para intimidar a la población, o una parte de la población, con el fin de promover una causa política, religiosa, racial o ideológica. Para determinar si un acto corresponde a la definición de terrorismo y si una persona o un grupo concretos han cometido un delito, se tendrán que considerar todos los hechos y circunstancias del caso. Existen varias salvaguardias que rigen la aplicación de la definición legal de terrorismo. Las decisiones en materia de enjuiciamiento competen a la Fiscalía General del Estado, que se asegurará de que se enjuicien los casos apropiados, esto es, cuando existan pruebas suficientes y cuando hacerlo redunde en el interés público. El Gobierno del Reino Unido tiene bien presente que la amenaza del terrorismo es sumamente grave y polifacética, y varía constantemente. El Gobierno del Reino Unido tiene la obligación de garantizar que los organismos de las fuerzas del orden estén en condiciones de combatir el terrorismo de manera eficaz y de proteger a la población a la luz de las cambiantes circunstancias. En ese contexto, y en respuesta a la aparición de amenazas nuevas y diversas, resulta aún más importante contar con un marco legal flexible, con salvaguardias adecuadas, que permita hacerles frente. Cualquier cambio en la definición de terrorismo exigirá un análisis minucioso a fin de garantizar que la capacidad operacional del Reino Unido para gestionar esas amenazas, y a través de ello proteger a la población, no se vea limitada.

106. En el artículo 1 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2006¹²⁶ queda tipificada como delito la “incitación” o “enaltecimiento” de los actos de terrorismo. Ese delito se introdujo en parte para hacer efectivas las prescripciones del artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, en el que se exige a los Estados partes que tipifiquen como delito la “provocación pública para cometer delitos terroristas”. Se incurre en ese delito al formular declaraciones que pudieran entenderse como una incitación o inducción directa o indirecta a la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo (o cuando una persona las formula

¹²⁵ www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/1.

¹²⁶ www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/section/1.

siendo consciente de que pueden tener ese efecto). La tipificación de ese delito es necesaria para combatir a quienes tratan de crear, directa o indirectamente, un clima en el que es más probable que prospere el terrorismo. El Consejo de Seguridad, en su resolución 1624 (2005), también repudió de manera unánime “los intentos de justificación o glorificación de actos de terrorismo que puedan incitar a la comisión de nuevos actos de terrorismo”¹²⁷. Por lo tanto, el Gobierno del Reino Unido considera que la tipificación de ese delito sigue siendo necesaria y proporcionada.

107. Por último, cabe señalar que los delitos mencionados se han invocado con moderación; el Gobierno del Reino Unido no considera que ello socave directa o indirectamente la libertad de expresión. En todo caso, el Gobierno del Reino Unido sigue examinando el conjunto de instrumentos disponibles y las atribuciones necesarias para contrarrestar la amenaza del terrorismo.

Respuesta al Examinador Independiente de la Legislación de Lucha contra el Terrorismo

108. En julio de 2014¹²⁸, el Examinador Independiente de la Legislación de Lucha contra el Terrorismo, Sr. David Anderson (Consejero de la Reina), recomendó una serie de cambios con respecto a la legislación en materia de terrorismo actualmente en vigor. Sugirió que se añadieran determinadas partes de la legislación en materia de lucha contra el terrorismo al mandato legal del Examinador Independiente y que se asignaran más recursos para el desempeño de sus funciones. Esas recomendaciones también incluían la sustitución del actual sistema, en que se prevé el examen anual de cuatro leyes específicas, por un sistema más flexible. En virtud de la Ley de Seguridad y Lucha contra el Terrorismo de 2015¹²⁹ se otorgan al Examinador Independiente facultades adicionales mediante la creación de la Junta de Protección de la Privacidad y las Libertades Civiles. Esa Junta velará por que el Examinador Independiente obtenga la asistencia y el apoyo adicionales necesarios, y ofrecerá garantías a la población de que en las disposiciones del Reino Unido en materia de lucha contra el terrorismo se contemple un equilibrio justo entre las medidas destinadas a combatir las amenazas que afronta el Reino Unido y el respeto de la privacidad y las libertades civiles. El 17 de diciembre de 2014 se abrió una consulta pública sobre la propuesta relativa a la Junta de Protección de la Privacidad y las Libertades Civiles; la consulta se cerró el 30 de enero de 2015¹³⁰. Actualmente el Gobierno del Reino Unido está realizando un examen exhaustivo de las recomendaciones formuladas por el Examinador Independiente y responderá formalmente a su informe a su debido tiempo.

Legislación de lucha contra el terrorismo – vías de recurso efectivas

109. Cuando una persona considere que se han violado sus derechos en el marco de las actividades de lucha contra el terrorismo puede reclamar por ello, entre otras cosas solicitando reparación en los tribunales. Para obtener información general sobre el acceso de las personas a diversas vías de recurso, véase el portal del Gobierno del Reino Unido¹³¹.

12. Medidas para hacer frente las tasas de suicidio

110. En junio de 2012 se publicó en Irlanda del Norte el documento “*Protect Life Strategy and Action Plan*” (Estrategia y Plan de Acción de Protección de la Vida).

¹²⁷ [www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624\(2005\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)).

¹²⁸ <https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/the-terrorism-acts-in-2013-july-2014/>.

¹²⁹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/contents/enacted.

¹³⁰ <https://www.gov.uk/government/consultations/privacy-and-civil-liberties-board>.

¹³¹ <https://www.gov.uk/browse/justice/rights>.

Ante la diferencia sustancial observada entre las tasas de suicidio en las zonas deprimidas y las no deprimidas, en particular entre los hombres de 15 a 45 años de edad¹³², se considera que la reducción de esa disparidad constituiría la mejor forma de salvar vidas. Se han establecido diversos servicios e iniciativas para hacer frente al suicidio, entre los que cabe señalar los siguientes:

- Programas e iniciativas comunitarios;
- Campañas integrales de marketing social para alentar a las personas a pedir ayuda, crear conciencia acerca del suicidio y la salud mental positiva, y reducir los estigmas asociados con el suicidio y la salud mental;
- La línea de asistencia telefónica Lifeline y los servicios de apoyo conexos;
- El protocolo Card Before You Leave (Tarjeta para los pacientes dados de alta) en los centros de emergencia;
- Investigaciones locales sobre el suicidio;
- Servicios de apoyo para las personas en duelo;
- Actividades de capacitación y sensibilización sobre el suicidio y la salud mental;
- El Registro de Lesiones Deliberadamente Autoinfligidas en las unidades de emergencia;
- Elaboración de planes comunitarios de respuesta en casos de emergencia;
- Programas destinados a hombres jóvenes y vulnerables;
- Directrices de presentación de informes para los medios de comunicación y control continuo de dichos medios;
- Servicios mejorados de intervención en casos de crisis de salud mental;
- Procedimientos de asesoramiento y prevención del suicidio en hospitales psiquiátricos.

111. Esos servicios se mantienen gracias a una inversión anual de 6,7 millones de libras esterlinas en el marco de la “Protect Life Strategy” (Estrategia de Protección de la Vida), y a fondos procedentes de los servicios generales de salud mental. Además, en el marco de las actividades del Grupo de Coordinación Ministerial para la Prevención del Suicidio, se ha empezado a incorporar a los órganos deportivos, culturales y rurales en las labores de prevención del suicidio. Las medidas para reducir el abuso de sustancias, mejorar la seguridad y la cohesión comunitarias, promover una custodia más segura, mejorar los resultados del aprendizaje, incorporar el bienestar emocional en los programas de estudios escolares, reducir el acoso (incluido el ciberacoso) y la violencia doméstica y fortalecer a las familias también contribuyen a combatir el suicidio.

112. En Escocia, la tasa de suicidio disminuyó en un 19% durante el período abarcado por la estrategia del Gobierno de Escocia “Choose Life” (Opta por la vida) (2002 a 2013)¹³³. La estrategia comprendió entre otras cosas la colaboración entre varios asociados, actividades de capacitación y sensibilización sobre la prevención del suicidio en los servicios de primera necesidad del Servicio Nacional de Salud y otros sectores, medidas de sensibilización sobre el suicidio y su prevención (incluidas las actividades para combatir los estigmas asociados con el suicidio), la introducción de planes locales para la prevención del suicidio en las 32 circunscripciones locales y la recopilación sistemática de pruebas relativas a los factores que podrían estar

¹³² Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

¹³³ www.scotland.gov.uk/Topics/Health/Services/Mental-Health/Suicide-Self-Harm.

vinculados con el suicidio. También se han adoptado medidas adicionales para combatir los problemas de alcoholismo a través de intervenciones breves para la reducción del consumo de alcohol; mejorar el acceso a los tratamientos de la depresión en el ámbito de la atención primaria; mejorar el acceso a terapias psicológicas y facilitar información sobre las fuentes de ayuda apropiadas para las personas con depresión o ansiedad, incluidos los servicios de médicos generalistas; y las líneas de asistencia telefónica. La Estrategia de Prevención del Suicidio 2013-2016 del Gobierno de Escocia¹³⁴ (publicada el 3 de diciembre de 2013) se centra en 5 esferas de trabajo en las comunidades y servicios, y abarca 11 compromisos específicos orientados a lograr mejores resultados para las personas con tendencias suicidas que acuden a los servicios, para sus familias y cuidadores, así como para las personas que no están en contacto con los servicios, y a entender mejor qué medidas funcionan en esa esfera. Los principales ámbitos de trabajo consisten en: atender a las personas que se encuentran en una situación difícil, hablar del suicidio, mejorar las medidas del Servicio Nacional de Salud para combatir el suicidio, mejorar la base de datos empíricos y promover el cambio y las mejoras. El Grupo de Aplicación de la Estrategia de Prevención del Suicidio, que realiza sus actividades bajo la dirección del Gobierno de Escocia y cuenta con la participación de diversos interesados, proporciona los medios de gestión administrativa necesarios para la aplicación de esa Estrategia basada en datos empíricos.

113. Para obtener información general sobre las medidas adoptadas por el Reino Unido para hacer frente las tasas de suicidio, véase el sexto informe periódico presentado por el Reino Unido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹³⁵.

Medidas para combatir el suicidio en las cárceles

114. Todos los casos de suicidio son una tragedia, y el Gobierno del Reino Unido realiza ingentes esfuerzos para extraer enseñanzas de cada uno de ellos. El aumento del número de suicidios en las cárceles de Inglaterra y Gales ha sido motivo de gran preocupación y el Gobierno del Reino Unido ha trabajado arduamente para entender sus razones y ha procedido a aumentar la dotación de personal para ofrecer condiciones de reclusión más seguras a fin de incrementar el apoyo a las cárceles e intercambiar buenas prácticas. Los jóvenes adultos constituyen un grupo particularmente problemático y vulnerable, por lo que el Gobierno del Reino Unido encargó un estudio independiente sobre las muertes de personas de 18 a 24 años de edad en prisión preventiva¹³⁶. La reducción del número de suicidios en las cárceles es una prioridad fundamental. El personal presta apoyo a muchos presos vulnerables y a menudo salva vidas mediante intervenciones oportunas. Es demasiado simplista atribuir el aumento de la tasa de suicidios a las reducciones de personal o al proceso de evaluación comparativa. El aumento se ha registrado en cárceles privadas, que no se han visto afectadas por esas iniciativas, en cárceles del sector público, y tanto en cárceles que han finalizado el proceso de evaluación comparativa como en otras que no lo han hecho. Las muertes se han producido en cárceles que han obtenido valoraciones positivas durante las inspecciones y en cárceles que han obtenido valoraciones menos positivas, así como en cárceles con diferentes densidades de población reclusa.

115. En Irlanda del Norte, el organismo South Eastern Health and Social Care Trust es la entidad responsable a nivel local de la atención de la salud en las cárceles y ha creado servicios penitenciarios para dotarlas de un servicio de farmacia interno, un

¹³⁴ www.scotland.gov.uk/Publications/2013/12/7616.

¹³⁵ E/C.12/GBR/6, págs. 32 y 33.

¹³⁶ <http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/harris-review/>.

servicio personalizado de medicina general, un equipo especializado en adicciones y un procedimiento establecido para la atención primaria y de la salud mental. Asimismo, se han promovido iniciativas para mejorar los servicios, lo que ha resultado en la creación de un “equipo especializado en internamientos”, que realiza un reconocimiento médico de seguridad en el momento del internamiento y otro más minucioso en las 72 horas que siguen al internamiento. El procedimiento para la atención de la salud mental se basa en el modelo de atención escalonada, que conlleva una serie de consultas individuales, así como en una variedad de programas y trabajos en grupo. Los equipos de salud mental cuentan con psiquiatras forenses independientes, psiquiatras independientes y de plantilla, terapeutas cognitivo-conductuales, médicos especializados en diagnósticos duales y terapeutas ocupacionales. El organismo antes mencionado también tiene relaciones contractuales con proveedores de servicios voluntarios, entre los que cabe mencionar a los terapeutas musicales y la organización Adept/Start360, que ofrecen actividades de ayuda psicosocial y programas de rehabilitación. Entre los programas innovadores que llevan a cabo los terapeutas ocupacionales del organismo cabe mencionar la creación de un coro femenino en la cárcel de mujeres. Por lo que respecta a los presos vulnerables, el organismo, junto con el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte, ofrece una serie de programas en el Centro Donard de la cárcel de Maghaberry que ha dado resultados positivos en los servicios especializados. Actualmente, el organismo está colaborando con el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte para responder a las recomendaciones del informe sobre la seguridad de los presos, elaborado conjuntamente por el Organismo de Inspección de la Justicia Penal y la Autoridad de Reglamentación y Mejora de la Calidad. Eso dará paso a más reformas en los servicios de atención de la salud en el ámbito penitenciario para abordar la cuestión de la prevención de las autolesiones y el suicidio.

116. Véanse también los párrafos 184 a 192.

Prevención de las muertes de reclusos en Escocia

117. Todas las muertes que se producen en centros de reclusión son inicialmente investigadas por la policía y, posteriormente, el Servicio Penitenciario de Escocia realiza un análisis para determinar si hay enseñanzas que se puedan extraer o medidas que se deban adoptar. La investigación de accidentes mortales es obligatoria en el caso de las muertes de reclusos, si bien el Procurador General (Lord Advocate) tiene la potestad de declararla innecesaria si considera que las circunstancias de la muerte se han investigado satisfactoriamente durante las actuaciones penales. Actualmente, con el apoyo del Servicio Nacional de Salud, un equipo de directivos del Servicio Penitenciario de Escocia con conocimientos especializados en la materia está revisando la Estrategia de Gestión del Riesgo de Suicidio de 2005. Los motivos por los que se ha sometido la Estrategia a revisión son los siguientes: la transferencia, del Servicio Penitenciario de Escocia a las juntas de salud del Servicio Nacional de Salud en 2011, de la responsabilidad y la rendición de cuentas por la prestación de servicios de salud a los presos; las recomendaciones resultantes de las investigaciones de accidentes mortales, y las conclusiones de los servicios de auditoría y control del Servicio Penitenciario de Escocia.

118. El 21 de noviembre de 2014 se publicó un análisis de las respuestas a las propuestas del Gobierno de Escocia para modernizar la normativa sobre las investigaciones de accidentes mortales¹³⁷.

119. Véanse asimismo los párrafos 110 a 113.

¹³⁷ www.scotland.gov.uk/Publications/2014/11/2861.

Investigación de las muertes en instituciones de salud mental

120. En Inglaterra y Gales, las muertes violentas o no debidas a causas naturales, o cuya causa se desconoce, son investigadas por el *coroner* (investigador forense), un funcionario judicial independiente nombrado por un consejo local. Si no se pueden determinar las causas de la muerte a partir de la autopsia o se concluye que la muerte no se debe a causas naturales o se produjo en un centro de detención del Estado, el *coroner* debe llevar a cabo una investigación (esto es, una audiencia pública) a la mayor brevedad posible. La decisión del *coroner* (o su conclusión al finalizar la investigación) puede impugnarse ante la justicia. Además, también está la Comisión para la Calidad de la Atención, una entidad reguladora independiente de los servicios de salud y asistencia social en Inglaterra¹³⁸. Todos los proveedores de servicios que realicen actividades reguladas tienen la obligación legal de inscribirse en el registro de la Comisión, para lo cual deben cumplir una serie de requisitos basados en las normas de seguridad y calidad aplicables en Inglaterra. Por lo tanto, cualquier servicio de salud mental cuyas prestaciones puedan definirse como actividades reguladas debe inscribirse en el registro de la Comisión. La Comisión utiliza varias fuentes de información para administrar su régimen de inspección, entre otras cosas los datos sobre las muertes de personas que reciben servicios de salud mental. La Comisión cuenta con una serie de medidas de aplicación a las que puede recurrir cuando los proveedores no cumplen los requisitos de inscripción.

121. Véase asimismo el sexto informe periódico presentado por el Reino Unido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹³⁹.

13. Organizaciones paramilitares en Irlanda del Norte

122. Han transcurrido 21 años desde el alto el fuego de 1994 en Irlanda del Norte. La situación de la seguridad ha cambiado en las últimas dos décadas y la gran mayoría de las personas pueden seguir con sus vidas sin verse afectadas por la actual amenaza a la seguridad. En la normativa de Irlanda del Norte se mencionan o prohíben las organizaciones paramilitares, aunque todavía existen elementos y estructuras residuales de esas organizaciones que cuentan, en mayor o menor medida, con el apoyo de algunas comunidades. Aunque la gran mayoría de los máximos dirigentes de los grupos paramilitares lealistas siguen comprometidos con el proceso de paz, algunas personas asociadas con dichos grupos siguen participando en actos delictivos. Esos actos se manifiestan de distintas formas, como la extorsión, la intimidación y la violencia. En algunos casos también intentan controlar el modo de vida de algunas comunidades, tanto de manera encubierta como manifiesta. El paramilitarismo en Irlanda del Norte es un problema complejo y exige una respuesta de múltiples vías en la que se contemplen iniciativas económicas y sociales de prevención en las comunidades marginadas y desfavorecidas, así como medidas orientadas a la restauración y la recuperación, y la aplicación de las disposiciones legislativas civiles y penales, según el caso. Numerosas autoridades autónomas colaboran estrechamente con el Gobierno del Reino Unido y el Servicio de Policía de Irlanda del Norte para llevar a efecto esa estrategia. Además de esos grupos paramilitares, aún existen varios grupos republicanos disidentes, dispares pero peligrosos, que rechazan el proceso de paz y han hecho manifiesta su intención de cometer actos violentos de terrorismo. En los últimos años, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte ha asumido la dirección de las operaciones de aplicación de la ley y ha conseguido resultados en materia de vigilancia policial y administración de justicia penal compatibles con los derechos humanos y orientados a reducir las amenazas y garantizar la seguridad de las personas. Eso ha limitado considerablemente las actividades de los grupos republicanos

¹³⁸ www.cqc.org.uk/content/mental-health.

¹³⁹ E/C.12/GBR/6, págs. 30 a 33.

disidentes. El Gobierno del Reino Unido está resuelto a velar por que el terrorismo nunca prevalezca en Irlanda del Norte. En la Estrategia Nacional de Seguridad de 2010¹⁴⁰ se fijó el objetivo de la lucha contra el terrorismo en Irlanda del Norte como prioridad de primer orden, la máxima prioridad para el Gobierno del Reino Unido. Ese enfoque estratégico del Reino Unido también supone una estrecha colaboración con la República de Irlanda; la cooperación con ese Estado nunca ha sido mejor, tanto en términos de política como de seguridad.

123. A través de la Dependencia para la Igualdad Racial, el poder ejecutivo de Irlanda del Norte trabaja con diversos interlocutores dentro de las comunidades para dar a conocer los daños que les causan el odio y la intolerancia y las posibles consecuencias del odio a largo plazo.

Marco para la gestión de las muertes relacionadas con el conflicto de Irlanda del Norte

124. En septiembre de 2014, el Organismo de Inspección de la Justicia Penal informó de que se había realizado una labor considerable en la Oficina del Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte para examinar casos históricos y el modo en que se investigaban. A partir de diversas pruebas, los inspectores concluyeron que se había restablecido la independencia de la Oficina. En el tercer informe trimestral de 2014 relativo a la Encuesta sobre la Delincuencia en Irlanda del Norte se señaló que el 86% de los encuestados estaban convencidos de que el Ombudsman de la Policía era independiente en el ejercicio de sus funciones¹⁴¹. Recientemente, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte y el Ombudsman de la Policía llegaron a un acuerdo sobre el acceso a la documentación durante las investigaciones de denuncias contra la policía, entre ellas varias investigaciones de asesinatos. El Acuerdo de Stormont House constituye el marco necesario para la adopción de un enfoque integral orientado a abordar el pasado, incluidas las muertes relacionadas con el conflicto. El Acuerdo se basa en la ya existente estructura complementaria de los mecanismos de investigación del conflicto y con él se promueve la elaboración de medidas para seguir agilizando los procesos destinados a reducir los retrasos.

125. En cuanto al número de investigaciones pendientes de muertes relacionadas con el conflicto, en diciembre de 2014 aún quedaban por resolver 978 casos del Equipo de Investigaciones Históricas, 298 casos de la Oficina del Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte y otras 53 investigaciones relacionadas con el conflicto¹⁴².

Ley de Investigaciones de 2005

126. En su informe de fecha 11 de marzo de 2014, el Comité Especial de la Cámara de los Lores sobre la Ley de Investigaciones de 2005 formuló varias recomendaciones para ampliar la obligación de rendir cuentas de los ministros de Gobierno y limitar las facultades que les permiten actuar sin el consentimiento del Jefe de Investigación. En su respuesta¹⁴³ de fecha 30 de junio de 2014, el Gobierno del Reino Unido reconoció que los jefes de investigación debían tener la garantía de que podían actuar sin la interferencia del Gobierno en sus investigaciones y deliberaciones. Sin embargo, no consideraba deseable modificar la Ley de tal modo que los ministros tuvieran que obtener el consentimiento del Jefe de Investigación en lugar de consultarlo antes de tomar solo determinadas medidas, como la modificación del mandato o el

¹⁴⁰ <https://www.gov.uk/government/publications/the-national-security-strategy-a-strong-britain-in-an-age-of-uncertainty>.

¹⁴¹ Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

¹⁴² Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

¹⁴³ <https://www.gov.uk/government/publications/government-response-to-select-committee-post-legislative-scrutiny-of-the-inquiries-act-2005>.

nombramiento de los miembros del equipo de investigación. Por lo observado en el pasado, los jefes de investigación y los ministros colaboraban satisfactoriamente para acordar los detalles sobre el modo en que se establecería una investigación. El Gobierno del Reino Unido también consideró que los ministros debían seguir mantener sus atribuciones para dictar órdenes de restricción para prevenir la publicación de información de carácter reservado. Los ministros son los que mejor pueden entender al significado integral de consideraciones tales como la seguridad nacional y las relaciones internacionales, y adoptan decisiones en consecuencia en un modo que no podría esperarse de un Jefe de Investigación.

Caso “Pat Finucane”

127. El informe de Sir Desmond de Silva (Consejero de la Reina), titulado “*Report of the Patrick Finucane Review*” (Informe sobre el Examen del Caso Patrick Finucane) se publicó el 12 de diciembre de 2012¹⁴⁴. En aquella época, el Primer Ministro formuló una declaración en la que reconocía que en el informe quedaba demostrado que la muerte del Sr. Finucane se había producido con la connivencia de Estado. El Primer Ministro también pidió perdón a la familia Finucane y afirmó que “la connivencia no debería existir jamás. Por lo tanto, en nombre del Gobierno, y de todo el país, permítanme decirle nuevamente a la familia Finucane que lo lamento profundamente”.

128. El Gobierno del Reino Unido estima que el examen realizado por Sir Desmond de Silva fue el mejor medio para dar a conocer al público la mayor cantidad de información posible de manera oportuna. En palabras de Sir Desmond: “He recibido la colaboración plena e incondicional de todos los departamentos y organismos pertinentes durante el desempeño de mi labor. Aunque no tenía ningún poder legal de coerción, pude acceder a todas las pruebas que buscaba, entre ellas documentos altamente confidenciales”.

14. La normativa sobre el aborto en Irlanda del Norte

129. En virtud de la normativa sobre el aborto vigente en Irlanda del Norte se tipifica como delito el que una mujer aborte ilegalmente, o que cualquier persona efectúe un aborto ilegal. También está tipificado como delito el suministro de cualquier medicamento o instrumento destinado a la ejecución de un aborto. No obstante, el marco actual para el aborto en Irlanda del Norte se ha elaborado a partir de la jurisprudencia de los tribunales respecto de su interpretación de estas disposiciones. En resumidas cuentas, los tribunales han dictaminado que es legal efectuar una operación para interrumpir un embarazo cuando esta resulte necesaria para salvar la vida de la mujer, o cuando exista el riesgo cierto de secuelas graves para su salud física o mental, ya sea a largo plazo o con carácter permanente. En otras circunstancias, dicha operación sería ilegal.

130. El 8 de octubre de 2014, el Ministerio de Justicia de Irlanda del Norte publicó un documento de consulta sobre la normativa penal relativa al aborto en los casos de anomalía letal del feto y de delitos sexuales. El documento abarca:

- Propuestas para modificar la ley de manera que las mujeres puedan optar por interrumpir el embarazo cuando se haya establecido un diagnóstico de anomalía letal del feto (esto es, cuando los profesionales médicos hayan identificado un problema en el feto y lo consideren incompatible con la vida, y cuando se haya adoptado una decisión clínica durante el embarazo según la cual no se podría efectuar ninguna intervención médica tras el parto a falta de un tratamiento para

¹⁴⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/the-report-of-the-patrick-finucane-review>.

mejorar las posibilidades de supervivencia). En el documento también se recomienda que esas decisiones sean adoptadas por dos profesionales médicos.

- Un debate sobre la posibilidad de que la interrupción del embarazo se permita en el caso de las mujeres embarazadas a raíz de un delito sexual, incluidas las violaciones o los casos de incesto. Sin embargo, a la luz de las complejas e intrincadas cuestiones relacionadas con los delitos sexuales, en el documento se promueve la elaboración de políticas con los principales interesados y otras partes, en primer lugar para recoger y oír opiniones sobre el modo en que se puede avanzar en estos ámbitos problemáticos en lugar de proponer una modificación específica de la normativa en esta etapa del proceso.
- Un debate acerca de si se debería considerar la posibilidad de introducir una disposición sobre un derecho a la objeción de conciencia para cualquier propuesta legislativa que resulte de la consulta. Si se introduce un cambio en la ley de manera que en ella se contemple la interrupción del embarazo en circunstancias en que no exista peligro para la vida, o en casos de abuso sexual, será necesario reflexionar sobre la pertinencia de reconocer un derecho a la objeción de conciencia en esas circunstancias específicas.

131. La consulta pública se cerró el 17 de enero de 2015. Se publicará un resumen de las respuestas y una respuesta de política a la mayor brevedad posible. Cabe señalar que cualquier propuesta legislativa que resulte de este proceso deberá contar con la anuencia del poder ejecutivo de Irlanda del Norte antes de ser presentada a la Asamblea de Irlanda del Norte y ser sometida al proceso legislativo como proyecto de ley.

132. Véase también la información de seguimiento del Reino Unido sobre las observaciones finales formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer¹⁴⁵.

15. Supervisión del uso de dispositivos de descarga eléctrica (Taser) en Inglaterra y Gales

133. El Gobierno del Reino Unido tiene claro que el uso de la fuerza debe enmarcarse siempre dentro de la legalidad, hacerse de forma proporcional y responder a criterios de necesidad. Todas las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales están sujetas a los requisitos de la Ley de Derechos Humanos, concretamente en lo que respecta a la obligación de actuar de manera compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y también a las disposiciones de lucha contra la discriminación que figuran en la Ley de Igualdad de 2010. Además, en virtud del artículo 3 de la Ley Penal de 1967¹⁴⁶, el uso de la fuerza para evitar la delincuencia y aprehender a los delincuentes y, en general, a aquellos que incumplen la ley deber ser “razonable” en las circunstancias.

134. También cabe señalar que el uso policial de dispositivos de descarga eléctrica fue autorizado por el Gobierno del Reino Unido tras numerosas evaluaciones técnicas y una declaración médica independiente. El procedimiento de autorización de armas menos letales garantiza que se cumplan unos requisitos operacionales establecidos por la policía, e incluye un completo módulo de capacitación que debe impartirse antes de que se autorice su uso. Los agentes equipados con esos dispositivos reciben una formación especializada sobre su utilización, en la que se abordan, entre otras cosas, la toma de decisiones, la contextualización de los incidentes y las consecuencias médicas; además, para conservar la licencia operacional de sus dispositivos, los agentes deben realizar cursos de actualización al menos anualmente.

¹⁴⁵ CEDAW/C/GBR/CO/7/Add.1

¹⁴⁶ www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/58/section/3.

135. El Gobierno del Reino Unido publica sistemáticamente datos sobre el uso policial de dispositivos de descarga eléctrica para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la policía. Las estadísticas sobre el uso policial de dispositivos de descarga eléctrica en Inglaterra y Gales son públicas y pueden consultarse en el portal del Gobierno del Reino Unido¹⁴⁷. La tendencia actual muestra un aumento en el uso de dispositivos de descarga eléctrica por parte de la policía entre 2009 y 2013, debido a la implantación progresiva de esas armas en las fuerzas policiales.

Supervisión del uso de dispositivos de descarga eléctrica en Escocia

136. Existe una amplia gama de medidas de vigilancia y mecanismos de supervisión de las actuaciones y decisiones del Jefe de la Policía de Escocia. Entre esos controles y salvaguardias figura la supervisión ejercida por la Autoridad Policial Escocesa, que presenta informes anuales al Parlamento de Escocia, a la Inspección General de Policía de Su Majestad en Escocia, al Comisionado de Investigaciones Policiales y Reclamaciones y al Subcomité Parlamentario de Justicia para Asuntos Policiales. Actualmente, la Autoridad Policial Escocesa y la Inspección General de Policía de Su Majestad en Escocia desempeñan un papel fundamental en el examen de la utilización de agentes armados por parte de la policía escocesa. El Jefe de la Policía debe informar al Comisionado de Investigaciones Policiales y Reclamaciones de toda intervención en la que un miembro del cuerpo de policía de Escocia haya utilizado un arma de fuego. El Comisionado de Investigaciones Policiales y Reclamaciones llevará a cabo una evaluación independiente y decidirá si es pertinente iniciar una investigación completa, además de formular recomendaciones cuando lo estime conveniente.

Uso de proyectiles de energía atenuada en Irlanda del Norte

137. En función de las circunstancias, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte dispone de una gama de opciones menos letales. Los proyectiles de energía atenuada se utilizan únicamente cuando existe una amenaza inmediata de lesiones graves o letales. Si no se dispusiese de alternativas menos letales para su despliegue en incidentes graves, es muy probable que tuvieran que utilizarse armas de fuego convencionales, con una alta probabilidad de consecuencias fatales. El Ombudsman de la Policía investiga todos los casos en que se disparan proyectiles de energía atenuada. En lo que va de año, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte solo ha disparado un proyectil de energía atenuada¹⁴⁸.

16. Trato de las personas detenidas en el extranjero por personal británico

138. La Policía Militar, institución independiente de la cadena de mando, investiga sistemáticamente las denuncias de actividades ilícitas derivadas de las operaciones. A los implicados puede remitírseles a su oficial al mando o al director del servicio encargado de entablar actuaciones judiciales, que estudiará entonces el posible procesamiento de esos individuos por delitos tipificados en la Ley de las Fuerzas Armadas de 2006. Algunos procesos por actos realizados en el Iraq y el Afganistán resultaron en sentencias condenatorias. En 2010, el Gobierno del Reino Unido creó el Grupo de Denuncias Históricas en el Iraq para investigar las denuncias de malos tratos y las ejecuciones ilegales en el Iraq. El Grupo está investigando actualmente 53 denuncias de muertes ilegales y 110 de malos tratos. Su presupuesto asciende a 57 millones de libras esterlinas y su período de funcionamiento se ha prorrogado recientemente hasta 2019. Las denuncias de malos tratos en el Afganistán se remiten a

¹⁴⁷ <https://www.gov.uk/government/collections/use-of-taser-statistics>.

¹⁴⁸ Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

la oficina pertinente de la Policía Militar, para que proceda a su investigación. Por otra parte, el Gobierno del Reino Unido ha establecido un procedimiento para detectar deficiencias sistémicas y problemas más genéricos derivados de las operaciones de detención del ejército del Reino Unido. El 7 de julio de 2014, el Gobierno británico publicó por primera vez un informe¹⁴⁹ que presentaba los resultados del examen de los problemas sistémicos existentes en el Iraq y en otras operaciones militares en el extranjero.

139. La investigación llevada a cabo por el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento está en curso. El Gobierno del Reino Unido ha facilitado al Comité las respuestas de los organismos de seguridad e inteligencia a las cuestiones señaladas en el informe de la investigación sobre los detenidos, así como las opiniones del Comisionado de Servicios de Inteligencia (figura independiente) sobre el cumplimiento de las Directrices Unificadas para la Gestión de Detenidos en Otros Países por parte de esos organismos. El Comité también tiene acceso a todo el material proporcionado por el Gobierno acerca de la investigación sobre los detenidos, y ha manifestado que dicha investigación se completará en el próximo Parlamento.

140. La investigación penal de las denuncias presentadas en los dos casos de Libia sigue su curso, y se encarga de ella el Servicio de Policía Metropolitana.

141. La investigación pública sobre el caso Al-Sweady se llevó a cabo a raíz de las denuncias de que las fuerzas británicas torturaron y asesinaron hasta a 20 iraquíes el 14 y 15 de mayo de 2004 y maltrataron a otros 9 detenidos durante los combates que se libraron en torno al puesto permanente de control de vehículos Danny Boy. Los resultados de la investigación se publicaron el 17 de diciembre de 2014¹⁵⁰. Durante los 169 días de audiencias, el Presidente de la investigación, Sir Thayne Forbes, tomó declaración a 55 testigos iraquíes, 222 militares y exmilitares y 4 peritos. También estudió las declaraciones escritas de otros 328 testigos. Llegó a la conclusión de que la totalidad de las personas asesinadas o capturadas durante los combates del 14 de mayo de 2004 habían participado activamente en una serie de emboscadas coordinadas que los insurgentes armados llevaron a cabo contra las fuerzas británicas, y que las afirmaciones de que algunas personas se encontraban en el lugar con fines pacíficos eran totalmente falsas. También concluyó que todos los iraquíes cuyos cuerpos fueron entregados a las autoridades iraquíes el 15 de mayo de 2004 para que se procediese a su entierro habían muerto en el campo de batalla, y que las alegaciones de que habían sido capturados con vida y torturados eran deliberadamente falsas. En su informe criticaba a varios testigos iraquíes por declarar falsamente haber visto o hablado con algunos de esos hombres después de la batalla, y a varios médicos iraquíes por mostrar una indiferencia deliberada respecto de la verdad a la hora de rellenar los certificados de defunción. Si bien en el informe se aceptaba la veracidad de algunas de las acusaciones de malos tratos, se señalaba que, desde 2004, las fuerzas armadas habían adoptado medidas adecuadas para corregir casi totalmente esas prácticas y, en consecuencia, formulaba solo un reducido número de recomendaciones para la introducción de mejoras adicionales en el trato de los detenidos.

142. En lo que respecta a las denuncias relativas al personal de las Fuerzas Especiales del Reino Unido, es una política de larga data del Gobierno británico no realizar comentarios sobre las cuestiones relacionadas con este contingente.

143. Véase también el informe de mitad de período de 2014 presentado por el Reino Unido en el marco del EPU¹⁵¹.

¹⁴⁹ <https://www.gov.uk/government/publications/review-of-systemic-issues-arising-from-military-operations-overseas>.

¹⁵⁰ <https://www.gov.uk/government/publications/al-sweady-inquiry-report>.

¹⁵¹ Informe de mitad de período de 2014, págs. 32, 84 a 87, 108 a 109 y 159.

17. Delito de tortura

144. Los artículos 134 4) y 5) de la Ley de Justicia Penal de 1988¹⁵² no han sido derogados y no se prevé hacerlo. El Gobierno del Reino Unido considera que el derecho interno es compatible con las obligaciones del país dimanantes de la Convención contra la Tortura, y ha expuesto en detalle las justificaciones de esa postura en los informes y exámenes sobre la Convención contra la Tortura que ha presentado en el marco del EPU. La principal reside en el hecho de que la definición de tortura que recoge la Ley de 1988 es más amplia que la de la Convención; incluye todo tipo de dolor o sufrimiento grave infligido en el ejercicio de funciones oficiales, sin hacer referencia al motivo de la conducta. De no existir eximente alguno, en virtud de esa Ley se podría criminalizar, por ejemplo, la angustia mental causada por el encarcelamiento; las lesiones graves infligidas por un agente de la policía en la prevención de un delito, aun en los casos en que el reo estuviese hiriendo a otra persona o atentando contra el agente; o la detención de un sospechoso. Además, en la Ley de 1988 existe una superposición entre el eximente de autoridad, justificación o excusa lícitas y la excepción enunciada en el artículo 1 de la Convención: sanciones autorizadas por la ley.

18. Nuevo sistema de coerción física en la expulsión de inmigrantes

145. Con respecto al nuevo sistema de coerción física introducido para gestionar en condiciones de seguridad la expulsión de inmigrantes¹⁵³, el personal de escolta al extranjero comenzó su formación el 28 de julio de 2014. Todos sus integrantes completaron la formación y pasaron a tomar parte en operaciones reales a partir del 6 de octubre de 2014. La supervisión del uso de la fuerza por parte de esos escoltas se realiza a través de un nuevo sistema de presentación de informes, en los que se incluye amplia información acerca de las técnicas empleadas, el punto del trayecto en el que tuvo lugar el incidente, la duración de la coerción física y las lesiones producidas. El nuevo sistema de formación se revisará periódicamente.

Coerción física de menores infractores

146. El Gobierno del Reino Unido está de acuerdo en que las medidas de coerción física en el caso de jóvenes deben ser empleadas única y exclusivamente como último recurso, cuando sea absolutamente necesario hacerlo y cuando no haya otra forma de intervención posible o apropiada. El Sistema de Gestión y Limitación del Uso de la Coerción Física se centra en reducir en la medida de lo posible la necesidad de recurrir a medios físicos de inmovilización. La formación tiene una marcada orientación hacia el trato con los menores y se centra en el desarrollo de la capacidad de apaciguar una situación, así como en la aplicación de medios físicos de inmovilización. Para el Gobierno británico es evidente que la utilización de técnicas de inducción del dolor debe limitarse a circunstancias en las que sea necesario proteger al menor o a otras personas de un riesgo inminente de grave daño físico. Hay ocasiones en que el comportamiento de algunos jóvenes es tan difícil y violento que se hace necesario proceder a su aislamiento para garantizar su seguridad y la de los demás. En tales circunstancias, el aislamiento solo puede imponerse por un período estrictamente regulado, y no puede utilizarse como castigo.

147. El Sistema de Gestión y Limitación del Uso de la Coerción Física se está aplicando en centros correccionales de formación y en instituciones para menores infractores de Inglaterra y Gales. Se están recabando datos de todos esos centros y las primeras estadísticas oficiales sobre la utilización del Sistema se publicaron en

¹⁵² www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/33/section/134.

¹⁵³ <https://www.gov.uk/government/speeches/new-system-of-restraint-for-managing-people-safely-during-immigration-removals>.

octubre de 2014¹⁵⁴. Una de las conclusiones obtenidas es que una formación de alta calidad es fundamental para aumentar la seguridad de las medidas de coerción física. Con el nuevo sistema, los funcionarios tienen que asistir al doble de cursos anuales de actualización.

148. En Irlanda del Norte, el método de coerción física utilizado en el correccional de menores no se basa en infligir dolor. Todos los funcionarios que trabajaban en contacto directo con los menores han recibido capacitación en técnicas de conversación y apaciguamiento que les permiten abordar situaciones difíciles y problemáticas, y garantizar que las medidas de coerción se utilicen únicamente como último recurso para prevenir lesiones. Existen directrices y procedimientos detallados en lo que respecta al examen y la autorización del aislamiento y la inmovilización. Esas decisiones están en manos de directivos de nivel superior. El Fiscal General de Irlanda del Norte está preparando la publicación de una serie de directivas conformes a la normativa internacional en las que se abordarán, entre otras cuestiones jurídicas, la aplicación de medidas de coerción física y el régimen de aislamiento.

149. En Escocia, todos los efectivos del Servicio Penitenciario de Escocia que puedan entrar en contacto con los reclusos reciben formación sobre cómo detectar, disuadir y apaciguar mediante técnicas de carácter no físico (y, de ser necesario, protegerse a sí mismos, a los reclusos y a otras personas de actos violentos). Solo debe recurrirse al uso de la fuerza cuando se hayan agotado todos los demás medios o se piense que no tendrían éxito. El supervisor/oficial al mando llevará a cabo una evaluación dinámica continua del riesgo durante cualquier incidente en el que se esté empleando la fuerza y reconsiderará si es posible optar por una estrategia de conciliación. Se llevará a cabo un examen de las circunstancias en torno al uso de la fuerza y, cuando se considere apropiado, se hará partícipe a la persona implicada. Se elaborará un informe completo en todos los casos y, si se estimara oportuno, podrá recurrirse a la grabación en vídeo de las operaciones en las que se prevea utilizar la fuerza. La experiencia acumulada por las instituciones residenciales para menores, la policía y el Servicio Penitenciario de Escocia demuestra que las medidas de coerción física deben emplearse únicamente como último recurso, y nunca como castigo. En las Directrices sobre el Uso de la Fuerza del Servicio Penitenciario de Escocia se reconoce que cada recluso es una persona con sus propias necesidades singulares. En esas Directrices se incluyen algunas de las observaciones de la Oficina del Comisionado para la Infancia. Las técnicas de “obediencia como respuesta al dolor” no forman parte de ninguno de los programas de capacitación utilizados en las residencias o los centros de protección de menores de Escocia. En las directrices del Gobierno de Escocia, que llevan por título “Inmovilizar de forma segura”¹⁵⁵ se esbozan los parámetros para inmovilizar a un menor (por ejemplo, se explica que la coerción física debe limitarse a inmovilizar al menor durante el tiempo más corto posible) y se alienta a todos los servicios a que elaboren planes para reducir su uso. El personal de atención en los hogares no utiliza ningún tipo de coerción física sobre los niños a su cuidado.

Investigación sobre la Fundación Fiduciaria del Servicio Nacional de Salud de Mid Staffordshire

150. La respuesta completa del Gobierno del Reino Unido al informe del Consejero de la Reina Robert Francis acerca de la investigación pública sobre la Fundación Fiduciaria del Servicio Nacional de Salud de Mid Staffordshire se publicó en noviembre de 2013¹⁵⁶. Cabe señalar que el Gobierno británico puso en marcha una

¹⁵⁴ <https://www.gov.uk/government/statistics/mmpr-data-march-2013-to-march-2014>.

¹⁵⁵ www.scotland.gov.uk/Topics/People/Young-People/protecting/lac/residentialcare/Publications/Holding-Safely.

¹⁵⁶ <https://www.gov.uk/government/publications/mid-staffordshire-nhs-ft-public-inquiry-government-response>.

serie de proyectos individuales para introducir mejoras en la forma en que se tramitan las quejas en los ámbitos de la salud y la atención social para que el sistema de atención pueda detectar antes las deficiencias existentes y aprender de ellas. Esos proyectos han sido supervisados por la Junta del Programa de Denuncias, un órgano que trabaja con las diversas partes interesadas. La Junta sigue un programa de trabajo único y consensuado, y comparte el objetivo de garantizar que las denuncias se atiendan con eficacia, y que las lecciones extraídas se compartan y apliquen a nivel local y nacional en beneficio de los pacientes, los usuarios de los servicios, el público en general, los cuidadores y los familiares.

151. Véase también el sexto informe periódico del Reino Unido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹⁵⁷.

Medidas adoptadas para hacer frente a los abusos registrados en centros de salud y de asistencia social en Irlanda del Norte

152. La Autoridad Encargada de la Reglamentación y Mejora de la Calidad es el órgano independiente que se ocupa de la supervisión y la inspección de los servicios de atención social y de la salud en Irlanda del Norte. Las residencias y los centros de atención residencial están obligados a cumplir las normas mínimas de atención promulgadas por el poder ejecutivo de Irlanda del Norte y, a tal efecto, la Autoridad Encargada de la Reglamentación y Mejora de la Calidad lleva a cabo inspecciones. Esas normas incluyen requisitos destinados a proteger a los residentes frente a los abusos. Los Fondos de Salud y Atención Social de Irlanda del Norte utilizan asociados de la comunidad en la gestión de los servicios de protección de adultos a nivel local. El poder ejecutivo de Irlanda del Norte está celebrando consultas para la elaboración de un proyecto de política de protección de adultos, cuyo objetivo es mejorar la situación de los adultos vulnerables mediante el fomento de las prácticas preventivas y las intervenciones de protección sólidas cuando sea necesario. En 2009, se introdujo un Protocolo para la investigación conjunta de denuncias y sospechas de abusos perpetrados contra adultos vulnerables, en el que se esbozan las funciones y responsabilidades de los organismos respectivos (entre ellos el Servicio de Policía de Irlanda del Norte) y se proporcionan pautas para el trabajo conjunto y la investigación. En 2011 se llevó a cabo una revisión del Protocolo. Todos los organismos de atención de la salud y asistencia social se han dotado de políticas de denuncia de irregularidades que alientan la notificación de sospechas o indicios de abuso.

19. Medidas adoptadas con respecto a los abusos perpetrados contra niños

153. Los abusos físicos o sexuales perpetrados contra niños constituyen un crimen execrable.

154. En la Ley del Niño de 1989 se define como tal a “una persona menor de 18 años de edad”. En Inglaterra y Gales, en el derecho penal y civil se proporciona un marco amplio para la protección de los niños. Existe una extensa variedad de pautas, entre ellas las directrices oficiales denominadas “Trabajar juntos para proteger a los niños” de 2013¹⁵⁸, en las que se describe la forma en que las autoridades locales deberían examinar los casos en que se sospeche que un niño está sufriendo abusos. Cuando se hayan perpetrado delitos, o de considerarse oportuno, deberán llevarse a cabo exámenes e investigaciones que cuenten con la participación de diversos organismos. La policía, que comparte la responsabilidad de proteger a los niños, debe investigar cualquier delito. Las Juntas Locales de Protección del Niño supervisan la eficacia de los acuerdos de protección en cada demarcación local (véanse las directrices). Para cada uno de los niños tutelados debe elaborarse un plan de atención sobre la base de

¹⁵⁷ E/C.12/GBR/6, págs. 32 y 33.

¹⁵⁸ <https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children>.

una evaluación de sus necesidades particulares, incluidas las de protección. Esa evaluación deberá determinar la ubicación más adecuada para el niño en cuestión, que podría ser una familia de acogida o un hogar infantil. El plan de atención para cada niño tutelado debe revisarse periódicamente para comprobar que siga recibiendo una atención adecuada que garantice su protección y promueva su bienestar. Las familias de acogida y los hogares infantiles adscritos a las administraciones locales deben cumplir numerosas normativas y requisitos mínimos de carácter nacional, entre los que figuran las normas de protección de los niños. Esos servicios se inspeccionan de manera independiente. El órgano de inspección (Ofsted – Oficina de Control de los Niveles de Educación, Servicios y Formación de la Infancia) está facultado para intervenir ante cualquier sospecha que surja sobre la protección de los niños por parte de esos servicios. Todos los niños tutelados tienen también derecho a que se los ayude a expresar sus opiniones sobre las cuestiones relativas a su cuidado. Las autoridades locales deben tener en cuenta los deseos y sentimientos de los niños a la hora de planificar su atención y proporcionar a cada uno de ellos información acerca de sus derechos adaptada a su edad.

155. Por último, a través del Grupo Nacional sobre la Violencia Sexual contra los Niños y las Personas Vulnerables, el Gobierno del Reino Unido está impulsando un ambicioso programa de reformas para abordar con urgencia los problemas detectados en casos pasados y actuales de abusos sexuales. Los objetivos generales del Grupo Nacional son propiciar un cambio duradero que posibilite una mejor detección de las personas que corren riesgo de sufrir abusos sexuales, fortalecer la resiliencia institucional en lo que respecta a los abusos sexuales, y crear una cultura que se centre en las víctimas dentro de la policía, los servicios de salud y los servicios infantiles. En esa línea, la campaña “Esto es abuso”, que lleva funcionando desde 2010, está sacando a la luz el tema del abuso entre compañeros y ayuda a los adolescentes a desarrollar la confianza necesaria para no aceptar el abuso cuando lo presencian. Además, a través de los Defensores de los Jóvenes, el Gobierno británico también está apoyando a los jóvenes que sufren violencia o explotación sexual a manos de bandas o corren peligro de sufrirlas. Se ha habilitado financiación para desplegar 13 defensores en todo el país, con el fin de que proporcionen apoyo directo a los jóvenes que hayan sido víctimas de violencia sexual o corran peligro de sufrirla. Trabajarán en las zonas más afectadas por las bandas y conocerán los riesgos específicos que comporta la violencia de esos grupos delictivos. El Grupo Nacional publicó su primer informe de situación y plan de acción en julio de 2013¹⁵⁹, que incluye medidas para priorizar acciones destinadas a prevenir el abuso en primer lugar, a proteger a los niños cuando navegan por Internet, a velar por que la policía pueda detectar y hacer frente a los problemas y a garantizar que las víctimas constituyan el centro de atención del sistema de justicia penal.

156. La Policía de Escocia ha destinado unidades a esa cuestión en todo su territorio de competencia, con el objetivo de que delitos como el abuso de niños se aborden e investiguen siguiendo un enfoque más coherente. Además, dispone de agentes de enlace especializados para interactuar con las víctimas de delitos sexuales. Recientemente, se ha anunciado la creación de una Unidad Nacional de Investigación del Abuso de Niños. El 27 de octubre de 2014, el Gobierno de Escocia respondió al plan de acción para el proceso InterAcción sobre el Abuso Histórico de Niños Institucionalizados, de la Comisión Escocesa de Derechos Humanos, y actualmente está planificando un programa de participación de los supervivientes y organizaciones para revisar, en 2015, la Estrategia Nacional para los Supervivientes de Abuso Infantil y para esbozar el diseño de un fondo de apoyo a los supervivientes y de los actos conmemorativos (dos de los compromisos contenidos en el Plan InterAcción). En

¹⁵⁹ <https://www.gov.uk/government/publications/sexual-violence-against-children-and-vulnerable-people-national-group>.

virtud de la Ley de Víctimas y Testigos (Escocia) de 2014, se ha establecido un Foro Nacional Confidencial que tenía previsto comenzar a aceptar solicitudes en enero de 2015. El Foro dará a las personas que fueron internadas durante su niñez en instituciones de atención residencial o centros de salud la oportunidad de compartir sus experiencias a través de un proceso confidencial, compasivo y libre de prejuicios. El 17 de diciembre de 2014 se anunció el inicio de una investigación pública sobre el abuso histórico de niños institucionalizados. El mandato se decidirá después de un período de consultas con los supervivientes y complementará la labor del Foro.

Medidas adoptadas con respecto al abuso de niños en Irlanda del Norte

157. El 17 de noviembre de 2014 se recibió el Informe Marshall sobre la explotación sexual infantil. Contiene una amplia gama de recomendaciones que han de ser aplicadas por el Departamento de Salud, Servicios Sociales y Seguridad Pública de Irlanda del Norte, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia y otros organismos e instituciones de Irlanda del Norte. Una de las recomendaciones destacadas es el establecimiento de un proceso encaminado a promover y supervisar la aplicación de las recomendaciones del informe, de lo que se está ocupando el Departamento de Salud, Servicios Sociales y Seguridad Pública, con la colaboración del Departamento de Justicia. Este último ha constituido también un grupo de trabajo encargado de supervisar la puesta en práctica de las recomendaciones que afectan al Departamento y a sus organismos asociados. En la Carta de la Víctima se proporcionan pautas en materia de indemnización cuando una persona haya sido víctima de un delito violento. Los tribunales también pueden dictar órdenes de indemnización.

158. La Investigación sobre Maltrato Institucional Histórico está en curso. Su mandato es averiguar si el Estado o las instituciones cometieron errores sistémicos en el cumplimiento de sus deberes para con los niños menores de 18 años que se encontraban bajo tutela gubernamental en instituciones residenciales entre 1922 y 1995. El Presidente de la Investigación ha solicitado una prórroga de un año, lo que significa que las vistas orales continuarán hasta junio de 2016, y el informe del Presidente estará listo a más tardar en enero de 2017.

Santa Elena – medidas adoptadas para abordar los delitos sexuales contra niños

159. Santa Elena trabaja en la protección de todas las personas vulnerables, incluidos los niños. A raíz de las recomendaciones de un estudio independiente realizado por la Lucy Faithfull Foundation en 2013 se renovaron los esfuerzos para proteger a los niños y Santa Elena elaboró un completo plan de protección que está siendo dirigido por la Junta de Protección, presidida por el Vicegobernador. Forman parte de la Junta la policía; los trabajadores sociales, de la educación y de la salud; las ONG; y el Directorio de Protección. El Gobierno de Santa Elena ha contratado a una serie de profesionales en esos organismos clave para mejorar las medidas de protección y ha realizado nuevas inversiones en la capacitación del personal de atención al público. El trabajo coordinado de los diversos organismos se está desarrollando bien. Gracias a la mejora de los procesos, la isla ha experimentado un aumento en el número de denuncias, investigaciones y enjuiciamientos de casos de delitos sexuales cometidos contra niños y jóvenes. Se está contratando a personal con más experiencia para hacer frente al aumento de las denuncias y a la acumulación de casos pendientes. En la actualidad, los casos se investigan siguiendo los procedimientos policiales normales. El Gobierno de Santa Elena también está estudiando cómo se trataban esos casos en el pasado y está intentando obtener financiación para dotarse de apoyo adicional que le permita revisar esos casos y, de ser necesario, tomar medidas al respecto. Se está elaborando un programa de capacitación para todos los que trabajan con niños, y la

formación ya ha comenzado en áreas tales como la mejora en la obtención de testimonios (por ejemplo, la habilitación de una nueva sala de entrevistas), la protección por parte de los padres y la concienciación general sobre cuestiones de protección. También existe una campaña de sensibilización pública sobre la explotación sexual infantil. La Consejera de la Reina Sasha Wass liderará una investigación independiente sobre las denuncias de conspiración para encubrir el abuso infantil en la isla, y se espera que presente un informe a finales de 2015.

Falkland (Escocia) – medidas adoptadas con respecto al abuso de niños

160. Seis hombres han sido detenidos y acusados de múltiples delitos de abuso físico y sexual presuntamente cometidos en la antigua escuela Saint Ninian de Falkland, en la región de Fife, en los años setenta y ochenta. Esa investigación sigue en curso.

Castigo corporal de los niños

161. La opinión del Reino Unido es que un pequeño azote no constituye violencia y que no debe enjuiciarse a los padres por propinar un pequeño azote a sus hijos. Para más detalles, véase el informe de mitad de período de 2014 presentado por el Reino Unido en el marco del EPU¹⁶⁰.

20. Examen del artículo 41 de la Ley Antiterrorista de 2000 en Irlanda del Norte

162. Se proporcionará una actualización sobre esta cuestión en el momento del examen.

Estadísticas sobre la aplicación del artículo 41 de la Ley Antiterrorista de 2000

163. El 4 de diciembre de 2014, el Gobierno del Reino Unido publicó las estadísticas trimestrales¹⁶¹ sobre las operaciones de los cuerpos de policía regidas por la Ley Antiterrorista de 2000 y la legislación posterior: detenciones, resultados e interpelaciones y registros, efectuadas en Gran Bretaña (actualización trimestral hasta el 30 de junio 2014). Esos datos muestran que en el año concluido el 30 junio de 2014, se realizaron 43 detenciones (18% del total) en virtud del artículo 41 de la Ley Antiterrorista de 2000 en Gran Bretaña (lo que excluye a Irlanda del Norte). Ninguna de esas detenciones tuvo una duración superior a ocho días¹⁶².

164. Según el informe de julio de 2014¹⁶³ elaborado por la personalidad independiente encargada de examinar la legislación en materia de terrorismo, el número de detenciones efectuadas en Irlanda del Norte en virtud del artículo 41 de la Ley Antiterrorista de 2000 en 2012/13 y 2013/14 fue de 157 y 168, respectivamente; cifras próximas a la media de los últimos ocho años. La privación de libertad de las 157 personas detenidas en 2012/13 duró menos de una semana.

Libertad bajo fianza en casos de terrorismo

165. No existe ninguna disposición que prevea la libertad bajo fianza para las personas detenidas en virtud del artículo 41 de la Ley Antiterrorista de 2000¹⁶⁴. El Gobierno británico sigue opinando que los sospechosos de terrorismo que se encuentran en detención preventiva en el Reino Unido no deben poder beneficiarse de

¹⁶⁰ Informe de mitad de período de 2014, págs. 99 a 103.

¹⁶¹ <https://www.gov.uk/government/collections/operation-of-police-powers-under-the-terrorism-act-2000>.

¹⁶² <https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2014/07/Independent-Review-of-Terrorism-Report-2014-print2.pdf>.

¹⁶³ <https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/the-terrorism-acts-in-2013-july-2014/>.

¹⁶⁴ www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/41.

la libertad bajo fianza. También cabe señalar que las decisiones relativas a la detención y la investigación son una cuestión operativa de la policía. Por naturaleza, las investigaciones terroristas presentan particularidades únicas y son complejas. En muchos casos, su propósito es evitar que se perpetre un ataque terrorista y proteger al público antes de que los ciudadanos sufran daño.

166. En el anexo 8 de la Ley Antiterrorista de 2000¹⁶⁵ se proporciona un marco claro para la detención y el mantenimiento en prisión preventiva de sospechosos en virtud de las facultades en materia de lucha contra el terrorismo. En ese texto se prescribe la supervisión judicial en las etapas apropiadas de la detención —la policía está obligada a solicitar al juez una orden para prolongar la detención más allá de las 48 horas. El tribunal debe cerciorarse de que la instrucción del presunto delito exige que se prorrogue la detención y de que la investigación se lleva a cabo con diligencia y prontitud. La detención puede durar un máximo de 14 días, a reserva de un nuevo examen a los 7 días.

167. La naturaleza de las detenciones por terrorismo hace que el riesgo que un individuo o su presunta participación en un complot terrorista presenta para la ciudadanía pueda no ser conocido en la primera etapa de una investigación y que la libertad bajo fianza no resulte adecuada en tales circunstancias. El Gobierno del Reino Unido está convencido de que las disposiciones actuales en la materia son proporcionadas y necesarias.

168. No obstante, el Gobierno del Reino Unido también reconoce la clara necesidad de que se protejan adecuadamente los derechos de los sospechosos de terrorismo. Por eso, en su revisión de 2011 de las facultades en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, el Gobierno del Reino Unido concluyó que el máximo período durante el que podía mantenerse detenido a un sospechoso de terrorismo sin cargos debía reducirse de 28 a 14 días, y una orden anterior que permitía prorrogar ese período hasta 28 días fue derogada por la Ley de Protección de las Libertades de 2012¹⁶⁶. En el anexo 8 de la Ley Antiterrorista de 2000 y el Código H de la Ley de Policía y Pruebas en Material Penal¹⁶⁷ (que se ocupa de la detención terrorista) ya se establecen el procedimiento y las garantías que deben respetarse en las detenciones de sospechosos de terrorismo.

21. Tratamientos de salud mental y otros cuidados en Escocia

169. Las personas descritas están protegidas por la legislación sobre la salud mental y la incapacidad, que impone obligaciones legales a la Comisión de Bienestar Mental (órgano independiente) para que cumpla sus funciones de protección. Su labor, que incluye la investigación, la supervisión y la realización de visitas, tiene por objeto garantizar que la atención, el tratamiento y el apoyo prestados se adecúen a la legislación, respeten los derechos de las personas con enfermedades mentales, dificultades de aprendizaje y trastornos relacionados, y fomenten su bienestar. Los usuarios del servicio y los cuidadores están representados en la Junta Directiva de la Comisión y también toman parte en las visitas.

170. El enfoque general de la Ley de Salud Mental (Cuidados y Tratamiento) (Escocia) de 2003 (Ley de 2003) es velar por que en la legislación y en la práctica en materia de salud mental se reflejen una serie de principios, por ejemplo el de mínima interferencia en la libertad de las personas. Toda persona que desempeñe funciones o dispense tratamientos regidos por la Ley de 2003 está obligada a seguir esos principios. Las autoridades locales deben asegurarse de que los funcionarios de salud

¹⁶⁵ www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/schedule/8.

¹⁶⁶ www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/9/section/57/enacted.

¹⁶⁷ <https://www.gov.uk/government/publications/pace-code-h-2012>.

mental sean asignados a trabajar con personas que necesitan atención o tratamiento de acuerdo con la Ley de 2003 cuya residencia habitual esté situada dentro de la misma área local. La Ley de 2003 requiere el consentimiento de los funcionarios de salud mental para la ejecución de ciertas órdenes y la toma de determinadas decisiones relativas a la renovación o a la modificación de ciertas órdenes. Puesto que esos funcionarios son empleados de las administraciones locales, las decisiones se adoptan con independencia del estamento médico. En la parte 16 (Tratamiento Médico) de la Ley de 2003 se establecen garantías rigurosas para la prestación de atención médica a los pacientes, tengan capacidad de consentimiento o no.

171. La Ley sobre los Adultos Incapacitados (Escocia) de 2000 (Ley de 2000) contiene una serie de disposiciones que abarcan el bienestar personal y los asuntos financieros de los adultos que carecen de capacidad para tomar algunas o todas las decisiones por cuenta propia, y protege a esos adultos mediante el desempeño de las funciones y competencias de las instituciones pertinentes. En ella se establecen las disposiciones que se han de adoptar para las órdenes de tutela y las órdenes de intervención dictadas por los tribunales del condado, que facultan legalmente a un tercero para tomar decisiones y actuar en nombre de la persona que carece de capacidad suficiente para hacerlo, a fin de salvaguardar y promover sus intereses. La autorización para tomar decisiones destinadas a velar por el bienestar de esa persona puede incluir el internamiento en una institución de atención si así se especifica. Deben tenerse en cuenta las opiniones de las personas que albergan un interés en el bienestar del adulto. Ha de notificarse la presentación de la solicitud a todas las partes interesadas, para asegurarse de que cualquier persona que pueda tener objeciones al respecto tenga la oportunidad de expresarlas ante el magistrado. El Gobierno de Escocia está estudiando las recomendaciones formuladas en el Informe de la Comisión Legislativa Escocesa sobre Adultos con Discapacidad, en el que se examina la posible aplicación del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta a las disposiciones de atención de los adultos que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 2000.

22. Hacinamiento en las cárceles (Inglaterra y Gales)

172. Las cárceles disponen de espacio suficiente para alojar a todos los delincuentes, y el Gobierno del Reino Unido nunca se encontrará en la situación de no poder encarcelar a los condenados por los tribunales. Todas las prisiones tienen niveles de población seguros, y las estadísticas¹⁶⁸ muestran que el hacinamiento está en sus niveles más bajos desde 2007/08. El Gobierno británico ha aumentado considerablemente la capacidad de las cárceles para varones adultos respecto al nivel heredado del anterior Parlamento. Las estadísticas¹⁶⁹ muestran un descenso en el porcentaje de presos en situación de hacinamiento, que pasó del 23,3% en 2012/13 al 22,9% en 2013/14 (el nivel más elevado se observó en 2007/08, con un 25,3%). En los últimos 2 años, el Gobierno del Reino Unido ha añadido 2.500 nuevas plazas, y en los próximos 9 meses esa cifra aumentará en otras 2.000. También se está iniciando la construcción de un nuevo centro penitenciario en Wrexham, que tendrá capacidad para 2.000 reclusos y estará plenamente operativo, a más tardar, a fines de 2017.

173. Véase también el informe de mitad de período de 2014 presentado por el Reino Unido en el marco del EPU¹⁷⁰.

¹⁶⁸ Fuente: Gobierno del Reino Unido.

¹⁶⁹ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322504/NOMS_AR_2014.pdf.

¹⁷⁰ Informe de mitad de período de 2014, págs. 111 a 115.

Hacinamiento en las cárceles (Irlanda del Norte)

174. El documento decenal del Servicio de Prisiones de Irlanda del Norte denominado “Estrategia de centros penitenciarios (2012-2022)” contiene planes para el desarrollo del parque de establecimientos penitenciarios existente y la incorporación de dos nuevas instalaciones para mujeres. Entre los proyectos concretos, figuran:

- Un nuevo bloque de 360 celdas para varones adultos en la prisión de Maghaberry, que estará terminado para 2018;
- Una dependencia de alta seguridad de categoría A en la prisión de Maghaberry, que estará terminada para 2018;
- Una dependencia de transición para mujeres dotada de seis camas, prevista para julio de 2015;
- Una nueva prisión femenina, que estará terminada para 2020;
- La remodelación de la prisión masculina de Magilligan, para convertirla en un nuevo centro de 720 camas, prevista para 2022.

175. El desarrollo del parque de centros penitenciarios aliviará las presiones de alojamiento gracias al aumento de la capacidad total, de las 1.800 plazas actuales a unas 2.200. Eso también permitirá al Servicio de Prisiones de Irlanda del Norte reducir el número de presos que comparten celda. Todos los proyectos mencionados están sujetos a la disponibilidad de fondos para financiarlos. Como parte de los planes para reformar el sistema penitenciario, se está introduciendo legislación para reducir el número de personas condenadas a penas de cárcel por impago de multas. En el proyecto de ley de multas y ejecución se prevé que el pago de las multas pueda hacerse progresivamente por medio de deducciones sobre los ingresos. También se ampliarán las posibilidades para sustituir la entrada en prisión por falta de pago por trabajos en beneficio de la comunidad.

Hacinamiento en las cárceles (Escocia)

176. Desde que en 2011 entraron en vigor la normativa sobre retribución a la comunidad y el principio de evitar las condenas breves, el número de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad ha aumentado y el número de penas privativas de libertad se ha reducido. Entre los períodos 2010-2011 y 2013-2014, el número de condenas de tres meses o menos (lo que se considera condena breve) descendió un 23% en términos absolutos (pasó de 5.324 a 4.126) y en 6 puntos porcentuales como proporción del total de las condenas a privación de libertad (pasó del 35% al 29%)¹⁷¹. En lo que respecta a la reinserción de los presos, el Gobierno de Escocia ya ha identificado la reducción de la reincidencia como un ámbito en el que una actitud activa en la realización de mejoras podría contribuir de manera significativa a la reducción de la delincuencia, lo cual beneficiaría a la vida pública y reduciría la población carcelaria. En la segunda iteración trianual del Programa de Reducción de la Reincidencia 2012-2015 se incluirá un examen detallado de la financiación, las estructuras y la gestión operativa de la prestación de servicios de justicia comunitaria para adultos, y del establecimiento de nuevas estructuras y procesos mejorados cuando sea necesario. En el marco de un proyecto independiente se analizará la manera de gestionar la transición de los delincuentes de una situación de custodia a otra de integración en la comunidad, y se mejorarán los procesos y servicios de que pueden beneficiarse todos los presos puestos en libertad, prestando atención especial a aquellos condenados a penas cortas.

¹⁷¹ Véase *Criminal Proceedings in Scotland, 2013-14* (publicado en diciembre de 2014) – www.scotland.gov.uk/Resource/0046/00469252.pdf, y *Criminal Proceedings in Scotland, 2010-11* (publicado en diciembre de 2011) – www.scotland.gov.uk/Resource/0038/00389834.pdf.

177. Véase también el informe de mitad de período de 2014 presentado por el Reino Unido en el marco del EPU¹⁷².

Examen de las prisiones de Irlanda del Norte

178. Véanse los párrafos 174 y 175.

Instituciones para menores infractores en Escocia

179. La institución para menores infractores de Su Majestad de Polmont ha creado una unidad de seguridad comunitaria que trabaja con un amplio abanico de organizaciones asociadas de la comunidad, el sector de la educación y el Gobierno de Escocia. El Grupo Directivo en materia de Seguridad Comunitaria del Gobierno de Escocia ha decidido que la “comunidad” de Polmont reciba una atención específica. La Policía de Escocia se ha comprometido a dotar a la comunidad de una “policía del campus” para encauzar de manera constructiva las actitudes hacia la autoridad y apoyar el trabajo de lucha contra la violencia, tanto dentro de la institución como en la comunidad, una vez que los internos obtengan la libertad. Se está desarrollando y llevando a la práctica una serie de intervenciones *in situ*, tales como: prácticas restaurativas para la resolución de conflictos, manuales para combatir la violencia y la intimidación, grupos de trabajo para luchar contra la intimidación y los delitos con arma blanca, y capacitación del personal asociado. El Gobierno de Escocia trabaja en cuestiones como la violencia doméstica y los delitos que atentan contra la igualdad y la diversidad en la sociedad, así como en la creación de vínculos entre la seguridad de la comunidad y la presencia de grupos de padres para apoyar el aprendizaje integrado. También se está investigando sobre una serie de cuestiones para mejorar la comprensión de las necesidades de los varones jóvenes. Muchos de los problemas subyacentes que conducen a un comportamiento violento, como traumas, situaciones de duelo y dificultades de aprendizaje, se están abordando a través de intervenciones y evaluaciones de tipo educativo. Se han incrementado los recursos del Sistema Nacional de Salud dedicados a terapia del habla y el lenguaje, y se está realizando una revisión más global del sistema. Se han adoptado medidas para reducir el número de residentes de Polmont con el fin de que cada joven disponga, en la medida de lo posible, de una habitación individual. Esa actuación ya ha dado resultados en lo que respecta a la mejora del ambiente en la institución, y facilita una interacción más estrecha con el personal. Tras una revisión curricular realizada por el organismo Education Scotland (Educación Escocia), se está desarrollando una amplia gama de actividades complementarias, entre ellas algunas enfocadas al desarrollo de las aptitudes de relación y a la preparación para ser buenos ciudadanos. Esas actividades incluyen la enseñanza de aptitudes necesarias para la vida, el apoyo por parte de los padres, el apoyo entre compañeros y el apoyo individual para los jóvenes más desarraigados, muchos de los cuales exhiben también comportamientos violentos. Todo el personal de Polmont está recibiendo formación, impartida por Educación Escocia, entre otros, que se centra en el bienestar emocional y social de los jóvenes y en su desarrollo personal. El Servicio Penitenciario de Escocia ha adoptado el documento de política denominado “Visión de la juventud en custodia”¹⁷³, en el que, atendiendo a sus necesidades individuales, se establecen los objetivos a medio y largo plazo para que los jóvenes aprendan y se desarrollen durante el período de privación de libertad.

180. Véanse también los párrafos 169 a 171.

¹⁷² Informe de mitad de período de 2014, págs. 111 a 120.

¹⁷³ www.sps.gov.uk/MediaCentre/News-5544.aspx.

Reclusas

181. El Gobierno del Reino Unido publicó sus objetivos estratégicos para las mujeres delincuentes en marzo de 2013. En ellos se establece cuáles son las prioridades para hacer frente a las necesidades de las mujeres infractoras y para reducir el número de mujeres en prisión. En marzo de 2014¹⁷⁴ se publicó un informe inicial de situación sobre el primer año. En virtud de las reformas introducidas en virtud de la iniciativa Transformación en la Rehabilitación, por primera vez en la historia reciente, prácticamente cada delincuente que salga de la cárcel recibirá apoyo durante al menos 12 meses y tendrá acceso a programas destinados a reducir la reincidencia. Proporcionalmente, hay más mujeres que hombres cumpliendo condenas cortas, por lo que se beneficiarán especialmente de ese elemento de las reformas. El Gobierno del Reino Unido también ha puesto en marcha medidas de salvaguardia para garantizar que los nuevos proveedores de servicios de libertad condicional tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. Otras iniciativas son:

- El ensayo de un proyecto de orientación en el área metropolitana de Manchester, cuyo objetivo es proporcionar opciones firmes y eficaces de condenas dentro de la comunidad que permitan evitar, en la medida de lo posible, la entrada en prisión de las mujeres. Las experiencias que se adquieran con ese proyecto servirán de base para un nuevo modelo operativo orientado a trabajar de manera diferente con las mujeres en el sistema de justicia penal.
- El ensayo de un nuevo modelo de comunicación y derivación hacia los servicios de apoyo para las personas que se encuentren bajo custodia policial o encausadas ante los tribunales. Ese sistema tendrá como objetivo detectar, evaluar y derivar a las personas con problemas de salud mental, de aprendizaje, de abuso de sustancias y de vulnerabilidad social hacia los servicios de tratamiento o de apoyo. Véanse también los párrafos 184 a 192.
- La reorganización de los centros de reclusión de manera que las internas permanezcan cerca del lugar donde vayan a vivir cuando queden en libertad. Como parte de las reformas, todas las prisiones femeninas se convertirán en cárceles de reasentamiento, con lo cual la mayoría de las reclusas cumplirá su condena lo más cerca posible de su casa. Así, les será más sencillo mantener el contacto con sus familias e hijos y adquirir las competencias necesarias para encontrar un empleo cuando queden en libertad, de manera que puedan reorientar sus vidas y dejar atrás la delincuencia.
- La introducción de un plan de estudios que se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres encarceladas. En la actualidad, los centros penitenciarios públicos cuentan con trabajadores encargados de la vinculación familiar para ayudar a las mujeres a conservar y estrechar la relación con sus familias.
- La facilitación del acceso de las mujeres a programas específicos y a los servicios de progresión durante el cumplimiento de la condena mediante la mejora y el aumento de la capacidad de las prisiones cerca de las zonas urbanas;
- La mejora de la colaboración entre los diversos organismos del Gobierno del Reino Unido para dar respuesta a las necesidades de las mujeres que han delinuido o presentan riesgo de hacerlo.

182. En Escocia, la modernización de la prisión de Su Majestad de Cornton Vale ha incluido la renovación de los edificios de la cárcel y la creación de una nueva dependencia para familiares y visitas. También se ha impartido formación especializada a todo el personal del Servicio Penitenciario de Escocia que tiene

¹⁷⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/strategic-objectives-for-female-offenders--5>.

contacto con mujeres. La revisión de los Servicios Voluntarios de Atención y Acompañamiento que se está realizando servirá para mejorar el apoyo que reciben las mujeres condenadas a penas cortas cuando abandonan la cárcel: los proveedores de servicios integrales trabajarán juntos para proporcionar servicios de vivienda, salud física y mental, educación y fomento de la empleabilidad con el fin de que el apoyo ofrecido resulte eficaz. En Cornton Vale se está aplicando un proyecto de prueba para que las reclusas soliciten esos servicios de apoyo antes de su liberación, para que así puedan recibirlos sin demora una vez excarceladas. En Glasgow se está llevando a cabo un proyecto piloto para encontrar el uso más eficaz de las alternativas al enjuiciamiento para mujeres delincuentes cuyo caótico estilo de vida puede dar lugar en ocasiones a que no resulten elegibles para programas normales de alternativas al enjuiciamiento.

183. El Gobierno de Escocia ha indicado que planea trabajar conjuntamente con las partes interesadas para examinar la futura configuración del conjunto de cárceles para mujeres. En ese examen se estudiarán la propuesta de crear una prisión nacional destinada a mujeres que cumplan condenas de larga duración —así como las opciones posibles para establecer un centro nacional para mujeres infractoras jóvenes—, la de utilizar cárceles regionales y la de contar con más centros de tipo comunitario para las reclusas. Además de esas cuestiones, se examinará también el trabajo que se está llevando a cabo para ampliar y reforzar la provisión de alternativas de carácter comunitario a la encarcelación y los servicios comunitarios para ayudar a las mujeres a no volver a delinquir.

Presos con problemas de salud mental

184. En Inglaterra, el Gobierno británico prevé reforzar la prestación de servicios de salud mental en las cárceles. Se están diseñando alternativas para una nueva orientación que incluya las instalaciones de custodia, la comunidad y los hospitales vigilados y garantice que cualquier preso pueda recibir un tratamiento de salud mental equivalente al mejor que podría recibir en la comunidad, y que también pueda recibirlo durante el cumplimiento de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad y después de salir de la cárcel. El objetivo de los servicios de apoyo y alternativas a la prisión¹⁷⁵, que funcionan en las comisarías de policía y los tribunales, es conseguir que los delincuentes con problemas de salud mental reciban tratamiento o apoyo adecuados durante su interacción con el sistema de justicia penal. Se han realizado ya 10 ensayos en 2014 siguiendo el modelo estándar de 2014/15, y está previsto efectuar otros 13 en 2015/16. Los servicios de apoyo y alternativas a la prisión están integrados por equipos de profesionales de la salud mental capaces de detectar (y remitir a un tratamiento adecuado) a los delincuentes afectados por un problema de salud mental u otra vulnerabilidad. Se realizará una evaluación independiente del modelo de apoyo y alternativas a la prisión que pueda servir de base para la propuesta de ampliación de esos servicios a toda la población de Inglaterra en 2017/18. Los pormenores del modelo¹⁷⁶, así como las normas de los servicios¹⁷⁷, son de dominio público. Además, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ha establecido normas específicas de carácter nacional para la prestación de esos servicios que está aplicando en todo el sistema penitenciario. Dichas especificaciones son niveles de referencia nacionales que sirven para evaluar el desempeño en la prestación de los servicios. Por otra parte, en la Ley de Asistencia de 2014¹⁷⁸ se garantiza que, a partir de abril de 2015, los presos con necesidades de atención y apoyo elegibles recibirán los servicios apropiados para satisfacerlas, de manera que

¹⁷⁵ www.england.nhs.uk/commissioning/health-just/liaison-and-diversion/ld-about/#trials.

¹⁷⁶ www.england.nhs.uk/commissioning/wp-content/uploads/sites/12/2014/04/ld-op-mod-1314.pdf.

¹⁷⁷ www.england.nhs.uk/commissioning/wp-content/uploads/sites/12/2014/04/ld-ser-spec-1314.pdf.

¹⁷⁸ www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/23/contents.

cuenten con el mayor grado de independencia posible dentro de las limitaciones de la vida bajo custodia.

185. En lo que respecta a los trastornos de personalidad, se han creado servicios de tratamiento de esas afecciones para mujeres delincuentes en las prisiones de Su Majestad de Foston Hall, Eastwood Park y New Hall. Las destinatarias de esos servicios son mujeres que han cometido delitos violentos o sexuales, o delitos contra niños, que presentan un riesgo elevado de reincidencia y que probablemente sufren trastornos de la personalidad o tienen necesidades complejas. El Gobierno del Reino Unido también ha introducido “entornos de planificación psicológica informada” en dos prisiones de Su Majestad (Low Newton y Send); mejoras en los servicios comunitarios, incluidos los programas de tratamiento y los de tutoría y defensa individualizados en regiones específicas; y una nueva perspectiva de género en los cursos de formación del personal sobre la manera de trabajar con mujeres delincuentes que sufren trastornos de personalidad.

186. También cabe señalar que los servicios de atención a los delincuentes con trastornos de personalidad están enfocados principalmente a los hombres con una elevada peligrosidad potencial para los demás y a las mujeres que presentan un alto riesgo de reincidencia en la comisión de delitos violentos, sexuales o de daños a la propiedad, y que también tienen propensión a padecer trastornos de personalidad vinculados con los actos delictivos (problemas interpersonales complejos de larga data). El programa se centra en ofrecer un hoja de ruta de servicios adaptados al plan sancionador impuesto al delincuente, e incluye: una mejor detección y evaluación de esos delincuentes desde el principio de su condena; un aumento de la capacidad de tratamiento; servicios de progresión durante la privación de libertad; y alojamientos especiales autorizados para ayudar a los delincuentes a obtener el mayor beneficio posible del tratamiento y facilitar el trato de esas personas tanto en la cárcel como en la comunidad. Por lo que respecta a los servicios dirigidos a los hombres, además de los existentes en las prisiones de alta seguridad de Su Majestad de Frankland y Whitemoor, se han creado cinco nuevos servicios de tratamiento de trastornos de la personalidad en las prisiones de Su Majestad de Garth, Swaleside y Wayland, así como en las instituciones para menores infractores de Su Majestad de Aylesbury y Swinfen Hall, que comenzaron a funcionar en 2014. El programa también incluye la habilitación de tres pequeñas comunidades terapéuticas para hombres con problemas de aprendizaje en las prisiones de Su Majestad de Grendon, Gartree y Dovegate. Asimismo, existen servicios de progresión en 7 cárceles masculinas y 5 alojamientos especiales autorizados para varones.

187. Fuera de las prisiones, además de los servicios de apoyo y las alternativas a la prisión ya mencionados, algunas fuerzas policiales están probando sistemas de clasificación en la calle, en cuyo marco un profesional sanitario especializado en salud mental acompaña a la policía en las intervenciones en las que se considera que podría necesitarse apoyo psicológico inmediato. Los informes iniciales sobre los sistemas de clasificación puestos en marcha en Leicestershire y Cleveland demuestran que esa práctica puede contribuir a mantener a la gente fuera de regímenes de privación de libertad y ahorrar a la policía un valioso tiempo.

188. Con respecto a las autolesiones, los datos publicados en octubre 2014¹⁷⁹ muestran que se produjeron 23.798 casos de autolesiones en los 12 meses finalizados en junio de 2014, un pequeño aumento respecto a los 12 meses anteriores, pero menor que el experimentado entre 2009 y 2011. Las tendencias son diferentes para mujeres y hombres: las autolesiones entre las mujeres se han reducido un 43% en los últimos tres años (hasta junio de 2014); por el contrario, las autolesiones entre los hombres han

¹⁷⁹ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/368370/safety-in-custody-2014.pdf.

aumentado año tras año en 8 de los últimos 9 años. El Gobierno del Reino Unido trabaja con ahínco para averiguar cuáles son las razones de este incremento de las autolesiones masculinas.

189. Por último, cabe señalar que:

- En la Directriz núm. 64/2011 del Servicio de Prisiones¹⁸⁰ sobre el trato de los reclusos que corren peligro de autolesionarse, lesionar a otros o ser lesionados por terceros se establecen las pautas para aumentar la seguridad de los procedimientos y las prácticas de custodia utilizados, de manera que las prisiones sean lugares seguros para todos los que están internados o trabajan en ellas. Uno de esos procedimientos es el de evaluación, atención en custodia y trabajo en equipo, que es un sistema de planificación de la atención flexible centrado en los reclusos y diseñado teniendo presentes a los presos propensos a suicidarse o autolesionarse.
- Todos los presos nuevos son sometidos a un examen, que incluye una evaluación del estado de salud, y puede verles un médico si es necesario. Cualquier sospecha acerca del estado de salud mental de una persona, en la etapa de admisión o posteriormente, puede ser dar lugar a una evaluación adicional. Las personas que se encuentran en prisión preventiva a las que se ha diagnosticado un trastorno mental pueden, si se considera apropiado, ser trasladadas a un hospital psiquiátrico. En virtud del artículo 48 de la Ley de Salud Mental de 1983¹⁸¹, el preso puede ser transferido a un hospital vigilado si así lo recomiendan dos psiquiatras. Los reclusos a quienes se diagnostica un trastorno mental posteriormente pueden, si se considera oportuno, ser trasladados a un hospital psiquiátrico en virtud del artículo 47 de la Ley de Salud Mental. Si un preso precisa recibir tratamiento hospitalario por un trastorno mental grave, y cumple los requisitos para el internamiento que figuran en los artículos 47 o 48 de la Ley de Salud Mental de 1983, puede solicitarse al Secretario de Estado de Justicia que autorice un traslado, con el fin de facilitar al sujeto los cuidados de salud mental necesarios.

190. En Escocia, el Sistema Nacional de Salud es responsable de la atención primaria de las reclusas con enfermedades mentales. Cada prisión que alberga a mujeres cuenta con un equipo multidisciplinario de salud mental que trabaja conjuntamente para evaluar y desarrollar planes de atención individuales. Las mujeres que se encuentran en situaciones particularmente angustiosas son atendidas en el marco de la estrategia denominada “Acción para la atención”, que se centra en aquellas internas que corren peligro de autolesión o suicidio. El Gobierno de Escocia ha financiado recientemente el programa de formación STORM en todos los centros penitenciarios e instituciones asimiladas de Escocia para dotarlos de un programa sostenible de prevención del suicidio y las autolesiones. El programa STORM está basado en datos reales y ayuda a capacitar y a desarrollar la confianza del personal para hacer preguntas sensibles sobre las autolesiones y el suicidio.

191. En Gales, la salud es uno de los servicios descentralizados. En la actualidad, Gales cuenta con cuatro cárceles, cada una de las cuales dispone de su propia Junta de Cooperación para la Sanidad Penitenciaria que se encarga de detectar las necesidades de la población carcelaria en materia de salud y de darles respuesta. En virtud de las Medidas de Salud Mental (Gales) de 2010¹⁸² se imponen deberes legales a las juntas de salud y a las autoridades locales para mejorar el apoyo que reciben las personas con problemas de salud mental. Se hace hincapié en la necesidad de promover una mejor

¹⁸⁰ www.justice.gov.uk/downloads/offenders/psipso/psi-2011/psi-64-2011-safer-custody.doc.

¹⁸¹ www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/part/III/crossheading/transfer-to-hospital-of-prisoners-etc.

¹⁸² www.legislation.gov.uk/mwa/2010/7/contents.

salud y un mayor bienestar entre el conjunto de la población, y de garantizar que se conceda la prioridad oportuna a las personas vulnerables que más lo necesitan. Esas medidas son un elemento clave de la estrategia decenal de salud mental del Gobierno de Gales¹⁸³ y su plan de aplicación¹⁸⁴, y respaldan las funciones básicas de los servicios penitenciarios de salud mental en Gales, que incluyen: la detección; la evaluación; la obtención y gestión adecuadas de la información clínica; el uso compartido de información con los organismos pertinentes, cuando corresponda; y la derivación de las personas afectadas. A raíz de una consulta pública¹⁸⁵, el Gobierno de Gales publicó en mayo de 2014 un documento titulado “Pautas para la aplicación de políticas: servicios de salud mental para presos”, en el que se abordan las funciones de los servicios de salud para los presos. Existen además otras orientaciones anteriores más específicas, como las que figuran en el documento denominado “Prisiones concienciadas sobre las necesidades de los veteranos – pautas para mejorar la salud y aumentar el bienestar de los veteranos encarcelados en Gales” (noviembre de 2013). El Gobierno de Gales está llevando a cabo consultas sobre la estrategia de prevención del suicidio y la autolesión denominada “Háblame 2” y un plan de acción quinquenal para Gales¹⁸⁶. La estrategia “Háblame 2” se centra en la prevención del suicidio y las autolesiones, y su objetivo es reducir el índice de suicidios entre la población en general. También servirá para coordinar los planes de prevención del suicidio y alentar a las instituciones públicas y las ONG a trabajar conjuntamente.

192. Véanse también los párrafos 114 a 116 y 174 a 175.

Centro de Expulsión de Inmigrantes de Yarl’s Wood

193. La Inspección de Prisiones de Su Majestad llevó a cabo una inspección del Centro de Expulsión de Inmigrantes de Yarl’s Wood en junio de 2013, antes de la publicación en la prensa de las acusaciones de abusos sexuales endémicos surgidas a raíz de un caso ocurrido en 2012. La Inspección volvió a visitar el centro cuando las alegaciones de abusos se hicieron públicas, y entrevistó a 50 detenidos seleccionados al azar. No se encontró indicio alguno de que se hubiera establecido una cultura más amplia de victimización o abusos sistémicos.

194. En respuesta a una recomendación de los servicios de inspección, Serco, el proveedor de servicios, se ha esforzado en reclutar más personal femenino. La distribución de género entre los agentes encargados de la custodia de los detenidos durante el año pasado (hasta noviembre de 2014) fue de un 54% de varones y un 46% de mujeres¹⁸⁷.

195. El Gobierno del Reino Unido exige los más altos estándares de los agentes encargados de la custodia de los detenidos. Todas las denuncias de mala conducta son tratadas muy seriamente. Cuando se demuestra que un miembro del personal ha actuado de manera inapropiada, su empleador (incluido Serco, en el caso del Centro de Expulsión de Inmigrantes de Yarl’s Wood) puede tomar medidas disciplinarias y el trabajador puede ser despedido. En casos extremos, se puede llegar a procesar al empleado. Serco ha adoptado una política firme y sólida en cuanto a las medidas disciplinarias aplicadas, que han llegado hasta el despido. El Gobierno del Reino Unido considera que se han adoptado las medidas necesarias.

¹⁸³ <http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/121031tmhfinalen.pdf>.

¹⁸⁴ <http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/121203planen.pdf>.

¹⁸⁵ <http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/prisoner/?lang=en>.

¹⁸⁶ <http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/talk2/?lang=en>.

¹⁸⁷ Fuente: Serco.

23. Procedimiento aplicable cuando se maneja material reservado

196. La Ley de Justicia y Seguridad de 2013 faculta a los tribunales superiores para aplicar un “procedimiento de manejo de material reservado” en las causas civiles que conllevan el uso de material sensible cuya revelación sería perjudicial para la seguridad nacional¹⁸⁸. Ese proceso incluye diversas salvaguardias judiciales. Para más información, véase el informe de mitad de período del Reino Unido de 2014 presentado en virtud del EPU¹⁸⁹.

Denegación de justicia

197. En el artículo 14, párrafo 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se define lo que constituye una denegación de justicia, por lo que la definición y los parámetros de ese concepto dependen de los Estados partes. El fundamento del artículo 175 de la Ley de Comportamiento Antisocial, Delincuencia y Vigilancia de 2014¹⁹⁰, en el que se establece la definición legal de denegación de justicia, figura en las notas explicativas de esa Ley¹⁹¹. El Gobierno británico considera que el texto del artículo 14, párrafo 6, coincide con su opinión de que debe pagarse una indemnización cuando un hecho nuevo muestra de forma “concluyente” que se ha producido una denegación de justicia y, por consiguiente, que el artículo 175 de la Ley de Comportamiento Antisocial, Delincuencia y Vigilancia de 2014 es compatible con el Pacto.

Sistema de justicia penal de Irlanda del Norte

198. En relación con las medidas encaminadas a hacer frente a los retrasos en el sistema de justicia penal de Irlanda del Norte, se ha elaborado un programa de reforma que comprende cambios de procedimiento, legislativos y estructurales. Ese programa incluye varias reformas de calado para hacer frente a los retrasos evitables, tales como una reforma del proceso de instrucción, la imposición de multas por el fiscal como alternativa al encausamiento, la adopción de medidas para fomentar que las declaraciones de culpabilidad se produzcan en una fase más temprana y la introducción de un reglamento para la gestión de las causas. Además, está previsto introducir plazos oficiales en las causas de los tribunales de menores antes de que concluya el actual mandato de la Asamblea de Irlanda del Norte (mayo de 2016).

Corroboración de pruebas en Escocia

199. En el marco del estudio independiente realizado por Lord Bonomy para examinar las salvaguardias posteriores a la corroboración, que comprende un grupo de referencia integrado por académicos destacados, abogados de renombre, jueces, representantes de grupos de víctimas y la Comisión de Derechos Humanos de Escocia, entre otros, se está analizando qué salvaguardias y cambios adicionales deben introducirse en la legislación y en la práctica para mantener la imparcialidad, la eficacia y la eficiencia del sistema de justicia penal una vez que se haya eliminado el requisito de corroboración. Para ello se tienen en cuenta necesariamente los derechos humanos. Lord Bonomy ha realizado una consulta pública, además de organizar eventos en toda Escocia, y está previsto que el informe final se publique en abril de 2015. La continuación del trámite parlamentario del proyecto de ley de justicia penal (Escocia) se ha reprogramado para 2015, una vez se haya finalizado el estudio.

¹⁸⁸ www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/18/contents.

¹⁸⁹ Informe de mitad de período de 2014, págs. 106 a 108.

¹⁹⁰ www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/section/175.

¹⁹¹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/notes/division/5/15/1.

24. Reforma de la revisión judicial

200. Los cambios introducidos en virtud de la enmienda N° 3 de 2014¹⁹² del Reglamento sobre la Remuneración de la Asistencia Letrada en Casos Civiles solo se refieren a la remuneración de los proveedores de asistencia jurídica.

201. El Gobierno británico está considerando cuidadosamente los pasos siguientes a la luz de los términos exactos de una reciente sentencia judicial sobre ese Reglamento. No obstante, en él no se eliminó ni restringió la disponibilidad de la asistencia jurídica civil para la revisión judicial. Por consiguiente, complace al Gobierno británico observar que esos cambios son compatibles con sus obligaciones legales internacionales y considera que los escasos recursos consignados para la asistencia jurídica deben destinarse adecuadamente a las causas de revisión judicial en que sean más necesarios a fin de que el sistema de asistencia letrada obtenga la confianza y la credibilidad de la población. En ese sentido, el Gobierno aplicó la propuesta de que los proveedores de asistencia jurídica solo deben cobrar por el trabajo realizado respecto de una solicitud de autorización en un caso de revisión judicial si el tribunal concede dicha autorización, con sujeción a una condición discrecional de pagar a los proveedores por el trabajo realizado respecto de una solicitud de autorización en las causas que finalicen antes de que se adopte una decisión sobre la autorización.

202. El Gobierno británico considera que las disposiciones sobre la revisión judicial en Inglaterra y Gales establecidas en la Ley de Justicia y Tribunales de lo Penal¹⁹³ de 2015 tienen por objeto mejorar el proceso de revisión judicial para que no produzcan abusos, y que las causas defendibles puedan tramitarse rápidamente hasta llegar a la resolución definitiva. Por consiguiente, considera que esas reformas son compatibles con sus obligaciones internacionales. Preocupa al Gobierno británico el reciente aumento de las solicitudes de revisión de causas judiciales que presentan pocas perspectivas de éxito, así como la presión añadida que suponen para los tribunales y otros servicios públicos esenciales. Esas solicitudes pueden utilizarse como un instrumento más de un sofisticado abanico de técnicas de campaña. Con las reformas se pretende poner coto a esas actividades, salvaguardando la capacidad de los ciudadanos de exigir responsabilidades al Gobierno británico ante los tribunales.

Reforma de la asistencia jurídica

203. Tal como se establece en el sexto informe periódico presentado por el Reino Unido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹⁹⁴, así como en el informe de mitad de período del Reino Unido presentado en virtud del EPU, desde 2010 se ha llevado a cabo una reforma considerable del sistema de asistencia jurídica en Inglaterra y Gales. La asistencia jurídica civil se ha reorientado hacia las causas en que está más justificada. La asistencia jurídica sigue estando disponible en los casos más graves, por ejemplo, cuando está en juego la vida o la libertad de las personas o cuando los menores pueden ser separados de sus padres y puestos bajo tutela. Otro objetivo de la reforma es desviar los casos que pueden resolverse con mayor eficacia fuera de los tribunales. También era preciso realizar reformas en las costas pagadas dentro del sistema para cumplir el requisito de ahorro. El Gobierno británico y el Organismo de Asistencia Jurídica examinan las repercusiones de las reformas del sistema de asistencia jurídica (tanto las estadísticas como la información sobre la igualdad y la diversidad en la prestación de la asistencia jurídica están a disposición del público en el sitio web del Gobierno del

¹⁹² www.legislation.gov.uk/uksi/2014/607/contents/made.

¹⁹³ www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/contents.

¹⁹⁴ E/C.12/GBR/6, pág. 43 e informe de mitad de período de 2014, págs. 7 a 8.

Reino Unido¹⁹⁵). El Gobierno del Reino Unido también se ha comprometido a realizar una revisión de la Ley sobre Asistencia Letrada, Sentencias y Castigo de los Delincuentes de 2012 una vez transcurrido un período de 3 a 5 años desde su aplicación. También cabe señalar que el Organismo de Asistencia Jurídica financia dos tipos de servicios de asesoramiento jurídico en el Centro de Detención del Ministerio del Interior, a saber, el proceso de detención y determinación acelerada del asilo y el asesoramiento a detenidos sobre el terreno. Ambos servicios funcionan mediante un sistema de rotación de tareas en el que el Ministerio del Interior o el Centro de Detención derivan al proveedor del servicio correspondiente a los solicitantes de asilo que forman parte del proceso de detención y determinación acelerada del asilo o los detenidos que requieren asesoramiento jurídico sobre el terreno.

Reforma de la asistencia jurídica en Escocia

204. La residencia no se toma en consideración a la hora de determinar el derecho a la asistencia jurídica en Escocia. La estrategia del Gobierno de Escocia para la reforma de la asistencia jurídica se expone en la publicación de octubre de 2011 titulada *A Sustainable Future for Legal Aid*¹⁹⁶ (“Un futuro sostenible para la asistencia jurídica”) y tiene por objeto: destinar la asistencia jurídica a los más necesitados; garantizar un acceso más fácil a la justicia (la ayuda correcta en el momento adecuado); optimizar los gastos en asistencia jurídica; y mejorar la eficiencia del sistema de justicia. Todos los cambios introducidos en el sistema de asistencia jurídica en Escocia se evalúan para determinar su repercusión en los aspectos relacionados con la igualdad. La Junta de Asistencia Letrada de Escocia, a través de su función de seguimiento, y el Grupo de Referencia sobre el Acceso a la Justicia, realizan un control del acceso a la asistencia jurídica. No se han detectado incidencias en relación con el acceso a la asistencia jurídica civil; la red de oficinas de asistencia jurídica civil está facultada para solicitar dicha asistencia en nombre de las personas que reúnen los requisitos para ello, así como para actuar como su representante.

25. Edad mínima de responsabilidad penal

205. El Gobierno del Reino Unido no tiene previsto aumentar la edad mínima de responsabilidad penal en Inglaterra y Gales. Para más información, véase el informe de mitad de período del Reino Unido de 2014¹⁹⁷.

206. En un examen independiente del sistema de justicia juvenil realizado en 2011 en Irlanda del Norte, se recomendó que debería aumentarse la edad mínima de responsabilidad penal. Sin embargo, no está previsto aumentarla porque el cambio requeriría el apoyo de varios partidos y actualmente no hay un consenso político para ello.

207. En Escocia, el Gobierno fijó la edad mínima de enjuiciamiento en 12 años en la Ley de Justicia Penal y Concesión de Licencias (Escocia) de 2010. Eso significa que no puede enjuiciarse a ningún menor de 12 años (tampoco puede enjuiciarse a ninguna persona mayor de 12 años por un delito cometido cuando tenía menos de 12 años); en lugar de ello, su comportamiento se abordará mediante el sistema de audiencias para niños. Cabe señalar que en los seis años anteriores a 2010, solo hubo un caso de enjuiciamiento de un niño de entre 8 y 11 años. Finalmente, ese caso se remitió a una audiencia para niños para su resolución. A partir de los cambios introducidos en la Ley de 2010, los niños de 8 a 11 años que hayan cometido un delito siguen derivándose a una audiencia para niños por comisión de un delito. La vista de un delito remitido a

¹⁹⁵ <https://www.gov.uk/government/collections/legal-aid-statistics>; <https://www.gov.uk/government/publications/corporate-equality-information>.

¹⁹⁶ www.scotland.gov.uk/Publications/2011/10/04161029/0.

¹⁹⁷ Informe de mitad de período de 2014, págs. 125 a 126.

una audiencia para niños no constituye un procedimiento penal. Los menores de 8 años (la edad mínima actual de responsabilidad penal) también pueden ser derivados al sistema de audiencias para niños, pero todo delito se abordará desde la perspectiva del bienestar social.

208. En la actualidad, la Ley de Audiencias para Niños (Escocia) de 2011 contiene disposiciones que, cuando se apliquen, redefinirán las audiencias para niños por comisión de un delito como “alternativas al enjuiciamiento”, en lugar de condenas a efectos del Plan de Rehabilitación de Delincuentes. Los cambios de las disposiciones contenidas en la Ley de la Policía de 1997 introducidos en virtud de la Ley de 2011 restringirán, cuando se apliquen, la divulgación en el futuro de esas alternativas al enjuiciamiento a los casos relacionados con delitos sexuales o violentos considerados graves. El Gobierno de Escocia está resuelto a reconsiderar la edad de la responsabilidad penal durante el mandato actual del Parlamento de Escocia, incluidas las consecuencias prácticas de los cambios introducidos en las normas sobre la capacidad penal.

Detención de niños en Irlanda del Norte

209. A raíz de las recomendaciones formuladas en la Revisión de la Justicia de Menores, se han introducido varios cambios en materia de políticas y procedimientos encaminados a desarrollar una respuesta más proporcionada para los delitos cometidos por menores, considerando el interés superior del menor, con el fin de alejarlos del sistema formal de justicia y favorecer las intervenciones no penales. Esos cambios incluyen la aplicación de la política de discreción de la policía, la inclusión de una prueba sobre el “interés superior” en el código de prácticas de enjuiciamiento y la introducción experimental de los centros de participación de menores con el fin de reducir el número de menores que entran en el sistema formal de justicia penal y velar por que los menores delincuentes tomen decisiones plenamente fundamentadas. Gracias a la repercusión de esas iniciativas, el número de casos sobre los que tuvo que pronunciarse el Ministerio Público entre 2010 y 2013 se redujo más del 40%¹⁹⁸.

26. Lucha contra la trata de personas

210. El 11 de noviembre de 2014 se publicó un examen independiente del mecanismo nacional de remisión de las víctimas de la trata de personas¹⁹⁹, en el que se recomendaba que debía reformarse el sistema para detectar y prestar apoyo a esas personas. El Gobierno del Reino Unido respondió a esta revisión mediante la Estrategia contra la Esclavitud Moderna²⁰⁰ y acogió las recomendaciones con satisfacción. Asimismo, el Gobierno colabora con otras entidades para desarrollar medios eficaces para aplicar los cambios. El Gobierno británico:

- Aplicará experimentalmente las recomendaciones de la revisión, en particular la introducción de puntos de protección contra la esclavitud (los primeros puntos de captación de posibles víctimas), para mejorar la detección de las víctimas;
- Evaluará la eficacia de la campaña de concienciación sobre la lucha contra la esclavitud y examinará cómo puede ampliarse, junto con la aplicación de la Estrategia contra la Esclavitud Moderna;
- Colaborará con las principales partes interesadas para desarrollar una formación orientada a las organizaciones de respuesta inmediata y otras entidades que puedan entrar en contacto con posibles víctimas de la trata con objeto de mejorar su capacidad de detectarlas;

¹⁹⁸ Fuente: Ejecutivo de Irlanda del Norte.

¹⁹⁹ <https://nrm.homeoffice.gov.uk/documents/2014/11/nrm-final-report.pdf>.

²⁰⁰ <https://www.gov.uk/government/publications/modern-slavery-strategy>.

- Dará continuidad al proyecto de ley sobre la esclavitud moderna, en virtud del cual el Secretario de Estado tiene la obligación de elaborar unas orientaciones oficiales sobre la detección de las víctimas y los servicios puestos a su disposición para que los profesionales que están en primera línea entiendan cómo pueden detectar e identificar a las posibles víctimas de la esclavitud moderna y ayudarlas a obtener el apoyo que necesitan;
- Mejorará los sistemas de recopilación de datos.

211. En el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa se recomienda que las víctimas potenciales dispongan de un plazo mínimo de restablecimiento y reflexión de 30 días. Actualmente el Gobierno británico ofrece un plazo de restablecimiento y reflexión de 45 días o el tiempo necesario para tomar una decisión firme basada en “razones concluyentes” (el que sea más largo). Todas las posibles víctimas son diferentes y, como parte del contrato de atención a la víctima financiado por el Gobierno del Reino Unido, se realiza una evaluación detallada de sus necesidades para que sean satisfechas con el apoyo que reciben durante el plazo de restablecimiento y reflexión.

212. El proyecto de ley sobre la esclavitud moderna incluye disposiciones específicas para hacer frente a las cuestiones de la coacción y el consentimiento. En el artículo 1 del proyecto de ley, relativo a los delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio, se establece que el consentimiento de una persona (sea adulto o menor) en todo acto que presuntamente constituya alguno de esos delitos no impedirá que los tribunales determinen que esa persona fue sometida a esclavitud o servidumbre u obligada a realizar un trabajo forzoso u obligatorio.

213. En el artículo 2 del proyecto de ley, relativo al delito de la trata de seres humanos, también se establece claramente que, a los efectos del delito, es irrelevante si la víctima consintió en realizar el viaje. Tampoco se exige que la víctima haya sido obligada a desplazarse, lo que constituye un reconocimiento de que, con frecuencia, se convence a las víctimas para que viajen mediante promesas y lisonjas. Existe delito cuando una persona organiza o facilita el desplazamiento de otra con el fin de someterla a explotación. La explotación se define como la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio; la comisión de un delito sexual (por ejemplo, la violación o la prostitución); el hecho de alentar u obligar a una persona a que permita que se le extirpen órganos o esperar que lo permita; la obtención de servicios o beneficios mediante la fuerza, las amenazas o el engaño; o la obtención de servicios de un niño o una persona vulnerable. La última forma de explotación (por ejemplo, la obtención de servicios) no implica necesariamente la existencia de coacción, ya que también puede ser cometida mediante engaño. No se exige que la víctima se oponga o intente resistirse a la explotación.

214. El proyecto de ley comprende dos delitos fundamentales relativos a la esclavitud moderna: por un lado, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio; y, por otro, la trata de seres humanos. Para demostrar el delito de trata de seres humanos, es necesario demostrar que una persona organizó o facilitó el desplazamiento de otra con el propósito de someterla a explotación. No es necesario que la víctima haya realizado el viaje en sí, ya que el mero hecho de tomar medidas para organizar o facilitar el desplazamiento ya es constitutivo de delito. Del mismo modo, cuando existe esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso u obligatorio, pero no así elementos de organización o facilitación del viaje, la Fiscalía podrá igualmente enjuiciar al delincuente en virtud del artículo 1. La explotación delictiva que no pueda tipificarse como esclavitud puede ser constitutiva de otros delitos, como los delitos sexuales. También podrá enjuiciarse a quienes participen indirectamente en el abuso o la explotación de otras personas. Además, mediante el proyecto de ley sobre delitos graves se pretende introducir como nueva figura delictiva la participación, de forma

que las personas integradas en un grupo dedicado a la delincuencia organizada puedan ser procesadas y condenadas por los delitos cometidos como integrantes del grupo.

215. El Departamento de Justicia de Irlanda del Norte, junto con las entidades asociadas, trabaja para mejorar la detección de las víctimas mediante actividades de concienciación y formación orientadas a los grupos que tienen más probabilidades de entrar en contacto con posibles víctimas de la trata de seres humanos. Un ejemplo de ello es un vídeo que se muestra como formación obligatoria al personal del Ayuntamiento de Belfast, en el que se ofrece una visión general de la trata de seres humanos en Irlanda del Norte. El Departamento de Justicia también organizó, junto con el Gobierno de Irlanda, un foro transfronterizo sobre la trata de seres humanos que se centró en la detección de las víctimas y la reducción de la demanda. El Departamento de Justicia y las entidades asociadas colaboran en la concienciación de la población sobre la trata de personas mediante iniciativas como el proyecto Gift Box de las Naciones Unidas. En relación con la recopilación de datos, el Departamento de Justicia apoya las recomendaciones que figuran en la revisión del mecanismo nacional de derivación y que tienen por objeto mejorar la recopilación de datos, incluida la elaboración de un nuevo sistema informático de apoyo al mecanismo de derivación de las víctimas de la trata y de gestión de los datos de forma que puedan utilizarse en el acopio de inteligencia. Además, en virtud de la Ley contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (justicia penal y apoyo a las víctimas) (Irlanda del Norte) de 2015 determinadas autoridades públicas de Irlanda del Norte están obligadas a notificar al Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia la posible existencia de una víctima de un delito de trata de personas o esclavitud. La inmigración es un asunto reservado, por lo que el Departamento de Justicia no tiene competencias en relación con los centros de detención. El Departamento de Justicia considera que el actual plazo de restablecimiento y reflexión de 45 días es adecuado y señala que es superior al período mínimo de 30 días estipulado en el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata de Seres Humanos. En muchos casos, el plazo de 45 días se aplica con flexibilidad, y las víctimas pueden recibir apoyo a más allá de ese período.

216. Asimismo, en el artículo 18 de la Ley contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (justicia penal y apoyo a las víctimas) (Irlanda del Norte) de 2015 se establece que el Departamento de Justicia debe prestar asistencia y apoyo a las posibles víctimas de la trata de personas durante un período mínimo de 45 días o, si no se llega a una decisión concluyente dentro de ese período de 45 días, hasta que se tome esa decisión. De hecho, en muchos casos el Departamento de Justicia ya presta apoyo más allá de los 45 días y, en esas circunstancias, tiene la obligación legal de hacerlo.

217. En el artículo 2 de la Ley contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (justicia penal y apoyo a las víctimas) (Irlanda del Norte) de 2015 se tipifica como un nuevo delito en la legislación de Irlanda del Norte la trata de seres humanos. En el párrafo 5 se precisa que el consentimiento de la víctima en todo acto que forme parte del delito de la trata de personas es irrelevante, tanto si se trata de un menor como de un adulto. No se elimina el vínculo con el desplazamiento, pero se garantiza que estén comprendidos todos los aspectos relacionados con la organización o la facilitación del viaje. Además, en el artículo 4 de la Ley se tipifica como delito cualquier infracción cometida con la intención de perpetrar un delito de trata de seres humanos o de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio. De esa forma, en la Ley se garantiza que todos los participantes en la cadena de la trata de personas puedan ser encausados como cómplices de los delitos.

218. En Escocia, tras la Cumbre sobre la Trata de Seres Humanos, organizada por el Gobierno en octubre de 2012, los ministros han colaborado con otros organismos asociados para fortalecer la respuesta de Escocia a la trata de seres humanos. El

proyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos (Escocia)²⁰¹, presentado en el Parlamento el 11 de diciembre de 2014, contiene disposiciones para consolidar y fortalecer el derecho penal vigente contra los traficantes y los explotadores de otras personas; mejorar la situación y la asistencia prestada a las víctimas de la trata; y exigir a los ministros y a los organismos pertinentes escoceses que colaboren para elaborar y aplicar una estrategia contra la trata y la explotación en Escocia.

219. La recopilación de datos precisos y fiables sobre la trata de seres humanos es muy compleja y difícil. Las cifras más fiables figuran en la evaluación estratégica del Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia²⁰², en la que se estima que en 2013 podría haber habido 55 víctimas en Escocia.

220. El Gobierno de Escocia colaborará con el Gobierno del Reino Unido en la aplicación de las recomendaciones formuladas tras la revisión del mecanismo nacional de derivación a los servicios de apoyo.

221. En el proyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos (Escocia) se precisa, con relación al delito de la trata de seres humanos, que el consentimiento de cualquier persona, sea adulto o menor, es irrelevante, y que la organización y la facilitación de los viajes incluye la captación, el transporte, el intercambio del control de la persona y su acogida o recepción.

Retorno de los solicitantes de asilo a sus países de origen

222. Las personas que demuestren un temor bien fundado a sufrir persecución o daños graves en caso de regresar a su país de origen tendrán derecho a recibir asilo (o protección humanitaria si no se cumplen las condiciones establecidas en la convención sobre los refugiados). Estar expuesto a condiciones de vida difíciles normalmente no permite que las personas se acojan a ese derecho, salvo que exista un riesgo real de sufrir un trato prohibido en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si la víctima de la trata de personas no tuviera derecho a asilo ni a ninguna otra forma de protección, el Gobierno del Reino Unido, en consonancia con el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, examinará si las circunstancias personales de la víctima, o su asistencia en las investigaciones penales, justifican un permiso de estadía discrecional. Si así fuera, se concedería dicho permiso durante un mínimo de 12 meses y 1 día. Si resultara evidente que es necesario un permiso de mayor duración, el Gobierno del Reino Unido puede conceder un permiso de estadía discrecional de hasta 3 años en un único período. Tras el vencimiento del permiso, la víctima puede solicitar una prórroga.

223. Si la víctima de la trata de personas no tuviera derecho a recibir asilo, protección o un permiso de estadía discrecional, el Gobierno del Reino Unido podrá prestar apoyo para la reinserción de la víctima a fin de ayudarla a regresar a su país y reconstruir su vida.

Lucha contra el trabajo forzoso y el abuso de los trabajadores migratorios

224. El Gobierno británico está adoptando medidas para poner fin a las prácticas que explotan a los trabajadores vulnerables y perjudican a las empresas locales que cumplen las normas, tales como:

- Mejorar la colaboración y aumentar las operaciones interdepartamentales destinadas a hacer cumplir la ley;

²⁰¹ www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/Bills/84356.aspx.

²⁰² www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/399-nca-strategic-assessment-the-nature-and-scale-of-human-trafficking-in-2013/file.

- Hacer frente a la explotación en las cadenas de suministro del sector privado y prestar apoyo a las empresas para determinar qué otras medidas pueden tomarse;
- En el proyecto de ley sobre la esclavitud moderna se incluirá una medida específica que exigirá que las empresas de un tamaño determinado informen sobre los pasos que toman para combatir la esclavitud moderna en las cadenas de suministro.

225. Asimismo, los trabajadores domésticos extranjeros que soliciten entrar al Reino Unido para trabajar en hogares privados tienen que demostrar a los funcionarios de inmigración que existe una relación laboral previa con el empleador para el que tengan la intención de trabajar en el Reino Unido, por ejemplo facilitando nóminas o documentos laborales (además, se requiere una carta del empleador que confirme esa relación). Las personas que consideren que han sido víctimas de la trata disponen de apoyo y protección a través del mecanismo nacional de derivación. Toda persona que de alguna forma se considere maltratada por su empleador puede pedir ayuda a diversas organizaciones, tales como la policía, la línea directa sobre derechos salariales y laborales y los tribunales laborales de su jurisdicción. Durante el proceso de expedición de visados se informa a los trabajadores domésticos sobre los derechos que los asisten en el Reino Unido. Actualmente se ha puesto en marcha un proyecto piloto para repartir a los trabajadores domésticos extranjeros, a su llegada al Reino Unido, unas tarjetas informativas muy sencillas y fáciles de entender para complementar la información que ya reciben con su visado y garantizar que entiendan los derechos y la protección que los asisten en el Reino Unido.

226. En Irlanda del Norte, la Sección de Relaciones, Políticas y Leyes Laborales del Departamento de Empleo y Aprendizaje, que tiene la responsabilidad principal en materia de política de trabajadores migratorios, trabaja para aunar esas divisiones del Departamento mediante estrategias que repercutan en los asuntos de los trabajadores migratorios, a fin de elaborar una política y un enfoque globales y coherentes al respecto. Entre las iniciativas cabe destacar un taller destinado a fomentar el uso de las principales esferas de actividad del Departamento en materia de empleo y aprendizaje entre los representantes de las comunidades migratorias del Cuerno de África a fin de proporcionarles información, asesoramiento y orientaciones sobre los distintos programas y servicios disponibles.

227. En Escocia, en el artículo 4 (esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio) del proyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos (Escocia) se tipifica un único delito, que refleja el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado).

228. Véase también el informe de mitad de período del Reino Unido de 2014 presentado en virtud del EPU²⁰³.

Establecimiento de un comisionado de lucha contra la esclavitud

229. En los artículos 40 a 44 del proyecto de ley sobre la esclavitud moderna se establece un Comisionado Independiente de la Lucha contra la Esclavitud para impulsar mejoras y dar una respuesta más coordinada a la esclavitud moderna a la hora de hacer cumplir la ley, velando por los intereses de las víctimas. Ya se ha designado a una persona para dicho cargo. El cometido del Comisionado es fomentar las buenas prácticas en la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos relacionados con la esclavitud moderna y en la identificación de las víctimas. En el proyecto de ley se describen las principales funciones del Comisionado, como la presentación de informes, la investigación, la colaboración (incluida la cooperación internacional), la enseñanza y la formación.

²⁰³ Informe de mitad de período de 2014, pág. 144.

230. En los artículos también se establecen funciones específicas relativas a la creación de un plan estratégico y un informe anual. En el proyecto de ley se dispone que determinadas autoridades públicas tienen la obligación de cooperar con el Comisionado, en la medida de lo posible, en el ejercicio de sus funciones. Los informes del Comisionado serán independientes y su informe anual se presentará ante el Parlamento del Reino Unido. El Comisionado trabajará, cuando proceda, en estrecha colaboración con el Organismo de Concesión de Licencias a Empresarios de Mano de Obra del Reino Unido, los comisionados de la infancia de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, el Coordinador de la Lucha contra la Esclavitud de Gales y otras organizaciones, incluso de la sociedad civil, para informar, sin temor ni favoritismo, sobre la eficacia de la respuesta a la esclavitud moderna en el cumplimiento de la ley, así como sobre la identificación de las víctimas.

231. El 8 de diciembre de 2014, la Asamblea de Irlanda del Norte aprobó una moción de consentimiento legislativo para ampliar a Irlanda del Norte el ámbito de aplicación de varias disposiciones del proyecto de ley sobre la esclavitud moderna, incluida la relativa al Comisionado Independiente de Lucha contra la Esclavitud. Un Comisionado con competencia en todo el Reino Unido proporcionará un modelo eficaz que incluya la supervisión de todos los órganos pertinentes que tratan esos asuntos en Irlanda del Norte, tengan o no las competencias transferidas, y podrá determinar cuáles son las mejores prácticas en todo el Reino Unido y prestar asesoramiento al respecto.

232. El Gobierno de Escocia trabaja para obtener la aprobación del Parlamento de Escocia para ampliar a ese territorio el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al Comisionado Independiente de Lucha contra la Esclavitud del proyecto de ley sobre la esclavitud moderna.

27. No devolución y garantías diplomáticas

233. El Gobierno del Reino Unido no tiene previsto renunciar a su política de expulsión con garantías. No obstante, el Examinador Independiente de la Legislación de Lucha contra el Terrorismo del Reino Unido, el Sr. David Anderson (Consejero de la Reina), aceptó una invitación del Gobierno para realizar una revisión de la política de expulsión con garantías. El Sr. Anderson está examinando el marco de la política de expulsión con garantías del Reino Unido y formulará recomendaciones sobre cómo se podría reforzar o mejorar, haciendo especial hincapié en los aspectos jurídicos. Está previsto que el informe esté concluido en 2015, y se presentarán copias del mismo ante el Parlamento del Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido estudiará detenidamente las recomendaciones, en caso de que las haya.

234. Cabe señalar que la política de expulsión con garantías ha hecho posible que el Reino Unido reduzca la amenaza terrorista al permitir la expulsión de los ciudadanos extranjeros que presentan un riesgo para la seguridad nacional, sin dejar de cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El Gobierno británico se declara satisfecho con que, en determinados casos, las garantías mutuas entre gobiernos avalen el respeto de los derechos humanos de las personas repatriadas. Los tribunales han avalado el principio de recurrir en determinados casos a las garantías entre gobiernos. Por ejemplo, en su resolución sobre Othman (Abu Qatada) en 2012²⁰⁴, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó que la prestación de garantías diplomáticas podía evitar el riesgo de que las personas sufrieran malos tratos. El Gobierno británico ha recurrido a la expulsión con garantías en un reducido número de casos en los que no era posible el enjuiciamiento en el Reino Unido y existía un riesgo para la seguridad nacional, o cuando la persona había sido condenada y había cumplido una pena por un delito de terrorismo en el

²⁰⁴ <http://hobhouse.bailii.org/eu/cases/ECHR/2012/56.html>.

Reino Unido. El Gobierno británico no procederá a la expulsión si existen razones fundadas para creer que la persona en cuestión corre el riesgo de padecer tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en su país de origen, o cuando si existe un riesgo importante de que se aplique la pena de muerte. Hasta la fecha, el Reino Unido ha expulsado a 12 personas en virtud de esos acuerdos.

235. Por último, los acuerdos de expulsión con garantías del Gobierno británico incluyen garantías públicas y verificables que han sido, y siguen siendo, probadas y avaladas por los tribunales. Estas garantías se exponen en los acuerdos establecidos entre el Reino Unido y los países en cuestión. Entre ellas cabe destacar las garantías específicas para cada persona devuelta y la designación de un órgano de vigilancia, por lo general una ONG o una institución nacional de derechos humanos local e independiente que garantice el cumplimiento de las condiciones del acuerdo en cada caso.

Internamiento en centros de expulsión de inmigrantes

236. El Gobierno británico tiene un gran interés en que el internamiento se utilice solo como último recurso y durante el período más posible. Todos los casos se examinan periódicamente para que el internamiento se prolongue únicamente el tiempo que sea necesario y razonable. No obstante, puede prorrogarse en el caso de personas que no hayan seguido el proceso presentación de nueva documentación o de expulsión, o bien presenten solicitudes o recursos fuera de plazo o en repetidas ocasiones. Desde hace tiempo el Gobierno británico considera que sería inadecuado introducir un período de tiempo fijo para el internamiento. Dicho período sería arbitrario, ya que no se tendrían en cuenta las circunstancias personales, y solo serviría para que las personas retrasaran u obstaculizaran los procesos de inmigración o asilo, incluida su expulsión legal del Reino Unido, para llegar a un punto en que tuvieran que ser puestas en libertad. Ello sería incompatible con la necesidad de proteger la frontera del Reino Unido y realizar un control efectivo de la inmigración. Así pues, no está previsto modificar esa política.

Sistema de detención y determinación acelerada del asilo

237. El Alto Tribunal de Justicia estableció que en algunos casos se asignaban representantes legales a los solicitantes de asilo demasiado tarde en el proceso de detención y determinación acelerada del asilo y consideró que ello podía entrañar un elevado riesgo de falta de equidad para las personas vulnerables. Inmediatamente después de dictarse el fallo, el Gobierno británico introdujo unas modificaciones para que se asignaran representantes legales a los solicitantes de asilo que lo necesitaran (alrededor del 50% ya llegan con un abogado²⁰⁵) el día de apertura del proceso de detención y determinación acelerada del asilo o, de no ser posible, a más tardar dos días laborables tras la apertura del proceso. Además, el Gobierno garantiza ahora un plazo de cuatro días laborables completos entre la asignación de un abogado y la entrevista con el solicitante de asilo, salvo si este y su abogado piden que la entrevista se celebre antes.

238. En dicho fallo se observó que el proceso actual de detención y determinación acelerada del asilo presentaba carencias en la detección y exclusión de las personas vulnerables o con situaciones especialmente complejas. Posteriormente el Gobierno británico modificó las preguntas de la entrevista de selección para ayudar a resolver esa cuestión; además, el proceso de selección se revisa constantemente para que refleje la opinión de las partes interesadas externas y el debate mantenido con ellas.

²⁰⁵ Fuente: Ministerio del interior.

239. Se constató que los procesos establecidos en la Norma 35²⁰⁶ del Gobierno del Reino Unido no funcionaban lo bien que deberían. Los informes elaborados en virtud de la Norma 35 pueden dar lugar a la puesta en libertad de personas, y así ha sucedido en algunos casos; en un muestreo reciente se ha confirmado esa situación y se han detectado otros aspectos que deben mejorarse. El Gobierno del Reino Unido ya ha adoptado medidas para mejorar el conocimiento de los requisitos actuales del proceso y ha consultado a las entidades asociadas externas sobre las mejoras que podrían introducirse en el funcionamiento de la Norma 35. En los próximos meses se introducirán otras medidas para que el proceso funcione con la mayor eficacia posible.

28. Interceptación de comunicaciones

240. La interceptación y el acceso a los datos de las comunicaciones están sujetos a estrictas salvaguardias mediante la Ley de Regulación de las Facultades de Investigación de 2000²⁰⁷ (LRFI), en virtud de la cual se garantiza la compatibilidad con las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos. En la LRFI se dispone que solo el Secretario de Estado puede emitir y renovar las órdenes de interceptación, y únicamente a un número reducido de organismos y para unos objetivos determinados. En la Ley se prevé una supervisión por parte de comisionados independientes, así como un recurso imparcial de reparación a través del Tribunal de Facultades de Investigación. Tanto los tribunales nacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado sobre el régimen jurídico de la interceptación. Dicho régimen es legítimo y con él se respetan los derechos humanos.

241. Existen salvaguardias bien establecidas sobre el uso de los datos de las comunicaciones. Solo las autoridades públicas autorizadas por el Parlamento del Reino Unido pueden obtener de los proveedores de telecomunicaciones datos sobre las comunicaciones. La obtención de datos es discrecional y debe ser autorizada por un alto funcionario de una categoría establecida por el Parlamento británico. Dicho funcionario solo puede autorizar una solicitud de datos de las comunicaciones si el caso en cuestión supera las pruebas de necesidad y proporcionalidad. El Comisionado para la Interceptación de las Comunicaciones supervisa de forma independiente la obtención de los datos sobre las comunicaciones por las autoridades públicas, en particular mediante la inspección de estas autoridades, y publica informes pormenorizados, actualmente bianuales. También tiene el deber de velar por el cumplimiento de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Retención de Datos y Facultades de Investigación de 2014²⁰⁸ (LRDFI) respecto de la integridad, la seguridad y la supresión de los datos obtenidos.

242. En virtud de la LRDFI no se establecieron nuevas facultades, derechos de acceso ni obligaciones para los proveedores de servicios de comunicación que fueran más allá de los que ya existían. La LRDFI aclara y complementa la LRFI, una ley sólida por la que se regula el uso de esos instrumentos de investigación. En respuesta al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2014, que dejó sin validez la Directiva sobre la Conservación de Datos de la Unión Europea, con la LRDFI se establece un marco jurídico claro por el que se puede obligar a las empresas nacionales a conservar determinados tipos de datos de las comunicaciones cuando sea necesario y proporcionado para uno de los objetivos previstos en la LRFI. EN la LRDFI también se aclara el alcance territorial de la LRFI. Ante la falta de una jurisdicción extraterritorial explícita, algunas empresas extranjeras cuestionaron que la LRFI las afectase. Por consiguiente, en la LRDFI se aclara que todas las empresas que prestan servicios a clientes del Reino Unido deben registrarse por las autorizaciones

²⁰⁶ www.legislation.gov.uk/uksi/2001/238/article/35/made.

²⁰⁷ www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents.

²⁰⁸ www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/27/contents.

oficiales expedidas en virtud de la LRFI, independientemente de donde tengan su sede.

243. La Ley de Seguridad y Lucha contra el Terrorismo de 2015 contiene cláusulas que modifican la LRDFI para permitir que los proveedores de servicios de comunicación conserven los datos necesarios para correlacionar una dirección del protocolo de Internet (IP) con una persona o un dispositivo. Esa disposición es vital para que las fuerzas del orden puedan seguir detectando y reprimiendo la actividad delictiva cuando las comunicaciones se realicen telemáticamente.

Conservación del ADN

244. En el capítulo 1 de la parte 1 de la Ley de Protección de las Libertades de 2012²⁰⁹ se prevén las modalidades para la destrucción, la conservación y la utilización de las huellas dactilares y el ADN; la mayoría de las disposiciones entraron en vigor el 31 de octubre de 2013. En virtud de esa Ley, las muestras de ADN deben destruirse tan pronto como se haya obtenido un perfil de ellas o a más tardar transcurridos seis meses, independientemente de que la persona haya sido condenada o no. En la Ley también se exige que, a menos que una persona sea declarada culpable por una infracción (incluidos los apercibimientos, las amonestaciones y las advertencias), debe destruirse su perfil de ADN y el registro de sus huellas dactilares, con las siguientes excepciones:

- Si una persona es acusada, pero no condenada, por un delito calificado (por ejemplo, un delito sexual, violento, de terrorismo o de robo con escalón), la policía puede conservar su perfil de ADN y el registro de las huellas dactilares durante un período de tres años (que puede prorrogarse otros dos años con una autorización judicial).
- Si una persona es detenida, pero no acusada, por un delito calificado, la policía puede conservar su perfil de ADN y el registro de las huellas dactilares durante un período de tres años, pero únicamente con la autorización del Comisionado de Biometría²¹⁰, que habrá de determinar si la conservación de los datos es procedente. Si se concede la autorización, una vez transcurrido el período de tres años, la policía podrá dirigirse a un tribunal para solicitar una prórroga de dos años, como en el caso anterior.
- En casos que puedan afectar a la seguridad nacional, los jefes de policía pueden hacer una declaración de seguridad nacional que autoriza a conservar el perfil de ADN y las huellas dactilares durante dos años. El Comisionado de Biometría examinará esas declaraciones y, si las considera inapropiadas, el perfil de ADN y las huellas dactilares deberán destruirse. Transcurrido el período de dos años, el jefe de policía podrá solicitar una prórroga de la declaración de seguridad nacional.
- Si una persona recibe un aviso de sanción por desorden, su perfil de ADN y sus huellas dactilares podrán conservarse durante dos años.

245. El Gobierno británico considera que con esas disposiciones se logra el equilibrio adecuado entre la protección de las libertades de las personas inocentes de cualquier delito y la necesidad de que la policía siga teniendo la capacidad de proteger a la población y llevar a los delincuentes ante la justicia.

246. En Irlanda del Norte, el ADN y las huellas dactilares obtenidos por la policía en virtud del Decreto sobre la Policía y los Medios de Prueba en materia Penal (Irlanda del Norte) de 1989 pueden conservarse indefinidamente. En la Ley de Justicia

²⁰⁹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/9/part/1/chapter/1.

²¹⁰ <https://www.gov.uk/government/organisations/biometrics-commissioner>.

Penal (Irlanda del Norte) de 2013 se establece un nuevo régimen para la conservación y el uso o la destrucción del material biométrico que impone unas normas mucho más restrictivas y se establece una distinción clara entre las personas que han sido condenadas por un delito y las que no. Está previsto que el nuevo marco entre en vigor en octubre de 2015. En virtud de la nueva normativa, con algunas excepciones en el caso de las condenas de menores, la policía puede seguir conservando indefinidamente el ADN y las huellas dactilares de las personas condenadas por un delito calificado. Ese aspecto es actualmente objeto de una impugnación presentada ante el Tribunal Supremo del Reino Unido (UKSC 2013/0090), que se prevé adoptará una resolución a principios de 2015. En espera de la sentencia judicial, el ADN y las huellas dactilares de las personas condenadas pueden seguir conservándose indefinidamente, al considerarse que con la conservación de los datos biométricos de una persona por razón de que podría cometer otro delito se persigue un objetivo legítimo de asistencia a la policía en la detección y la prevención de la delincuencia. El Departamento de Justicia de Irlanda del Norte sostiene que se trata de una justificación necesaria con la que se logra un equilibrio proporcionado entre las exigencias del interés general de la comunidad y las necesidades de protección de los derechos fundamentales de la persona.

247. En Escocia, el sistema de conservación del ADN ha sido ampliamente elogiado por establecer un equilibrio adecuado entre la protección de la población y la protección de los derechos de la persona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha destacado que el enfoque del Gobierno de Escocia respecto de la retención del ADN constituye un buen modelo (*S & Marper c. el Reino Unido*). Mediante la Ley de Justicia Penal y Concesión de Licencias (Escocia) de 2010 se reforzó la política de conservación de datos y se incluyeron disposiciones para la conservación de los datos de las personas que aceptarían enajenaciones fiscales y avisos de sanción.

29. Leyes sobre la difamación en Irlanda del Norte

248. En Irlanda del Norte se celebró una consulta amplia sobre las leyes relativas a la difamación, que finalizó el 20 de febrero de 2015.

Leyes sobre la difamación en Escocia

249. El Parlamento de Escocia aprobó la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley de Difamación de 2013 a Escocia para que en relación con las actividades académicas (incluidas las científicas) se pudiera plantear la defensa de inmunidad relativa²¹¹. Además, el Gobierno de Escocia está preparando una revisión independiente de esa Ley.

Ley de Secretos de Estado de 1989

250. El Gobierno del Reino Unido no está de acuerdo con que la afirmación de que esa Ley es incompatible con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se consagra el derecho a la libertad de expresión y a recibir y difundir información. En virtud de la Ley de Secretos Estado de 1989²¹² se protege la información relativa a las cuestiones de seguridad nacional, y la posición del Gobierno del Reino Unido sigue siendo la que indicó en su séptimo informe periódico²¹³ presentado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a saber, que la divulgación de toda información protegida sin facultades legales es perjudicial. El hecho es que hay cauces disponibles para los empleados que tienen motivos de

²¹¹ www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/Bills/52618.aspx.

²¹² www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/6/contents.

²¹³ CCPR/C/GBR/7, pág. 48.

preocupación y solo se iniciará un procesamiento si hay pruebas suficientes, se ha tenido en cuenta el interés público y el Fiscal General ha dado su consentimiento.

Definición de “extremismo doméstico”

251. En la Estrategia de Prevención del Gobierno del Reino Unido se define el extremismo como “la oposición enérgica o activa a los valores británicos fundamentales, en particular la democracia, el estado de derecho, la libertad individual y el respeto y la tolerancia mutuos de las distintas religiones y creencias”. La definición también incluye el llamamiento al asesinato del personal de las fuerzas armadas del Reino Unido, tanto en el país como en el extranjero. En diciembre de 2013, el Grupo de Expertos sobre Extremismo del Gobierno del Reino Unido estableció las propuestas para combatir el extremismo²¹⁴, entre ellas cabe citar: frenar a los extremistas; luchar contra el planteamiento y la ideología de los extremistas; prevenir la radicalización; y detener el extremismo en las instituciones. La definición de “extremismo nacional” formulada por la Asociación de Jefes de Policía se planteó en el informe de la Inspección General de Policía de Su Majestad²¹⁵ al que se hace referencia en el párrafo 252 (véase la respuesta siguiente).

Vigilancia de los grupos de protesta

252. El 20 de marzo de 2013, el Gobierno del Reino Unido encargó a la Inspección General de Policía de Su Majestad que examinara el avance de la policía en la aplicación de las recomendaciones contenidas en su informe sobre las unidades nacionales de policía que proporcionan información sobre los nexos entre criminalidad y protestas. La Inspección General de Policía emitió su informe el 27 de junio de 2013²¹⁶. En la sección 5 del informe se afirma que: “5.1 Como resultado del informe de la Inspección General de Policía de Su Majestad de 2012, la gestión de las actividades secretas de la policía relativas al extremismo doméstico es actualmente mucho más estricta, aunque ello solo representa una pequeña parte de sus actividades secretas. La mayor parte de esas actividades están orientadas al crimen organizado de gran peligrosidad, los delitos graves o la lucha contra el terrorismo. 5.2 Por consiguiente, consideramos que es necesario proseguir la labor de inspección para examinar toda la actividad secreta de la policía (incluido el despliegue de las actividades secretas de base). Ello contribuiría a tranquilizar a los ministros y a la población al garantizar que esa táctica se utiliza de forma legal, proporcionada y ética”. En consecuencia, el 27 de junio de 2013 el Gobierno británico encargó una inspección más amplia de las actividades secretas; la Inspección General de Policía publicó su informe el 13 de octubre de 2014²¹⁷. El Gobierno del Reino Unido pidió al College of Policing y a las Guías Policiales Nacionales que elaboraran un plan de acción para responder a las recomendaciones del informe. Ese plan se presentó en la Biblioteca de la Cámara de los Comunes el 5 de enero de 2015. El 12 de marzo de 2015, el Gobierno británico anunció²¹⁸ el inicio de una investigación oficial de las actividades secretas de la policía dirigida por el magistrado Pitchford.

²¹⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/tackling-extremism-in-the-uk-report-by-the-extremism-taskforce>.

²¹⁵ www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/media/review-of-national-police-units-which-provide-intelligence-on-criminality-associated-with-protest-20120202.pdf.

²¹⁶ <https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publication/national-police-units-which-provide-intelligence-on-criminality-associated-with-protest-progress-review/>.

²¹⁷ <https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publication/an-inspection-of-undercover-policing-in-england-and-wales/>.

²¹⁸ <https://www.gov.uk/government/news/home-secretary-announces-statutory-inquiry-into-undercover-policing>.

253. En Escocia, la vigilancia secreta se rige por la Ley de Regulación de las Facultades de Investigación (Escocia) de 2000. En esa Ley se exige que la autorización de vigilancia debe, en primer lugar, ser necesaria para uno o varios objetivos legalmente establecidos: prevenir o detectar los delitos o impedir el desorden, mantener la seguridad pública, o bien proteger la salud pública. Una vez demostrado que la actividad secreta es necesaria, es preciso demostrar que es proporcionada. Ello entraña lograr un equilibrio entre el grado de intrusión de la actividad en la persona o personas afectadas y la necesidad de realizar la actividad desde el punto de vista operativo. Los agentes secretos se clasifican como fuentes secretas de inteligencia humana, que también se regulan en la Ley de Regulación de las Facultades de Investigación (Escocia) de 2000. En diciembre de 2014 se introdujo una legislación secundaria en el Parlamento de Escocia²¹⁹ cuyo objetivo es regular aún más el uso de los agentes secretos elevando el nivel de autorización requerido e incorporando un elemento de supervisión independiente y aprobación previa por parte de la Oficina de Comisionados de Supervisión.

Medidas para contener a los manifestantes

254. Con respecto a la “contención”, el Gobierno del Reino Unido mantiene la posición expuesta en su séptimo informe presentado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos²²⁰. Respecto al uso de otras medidas, cabe señalar que en la parte 2 de la Ley de Orden Público de 1986²²¹ se otorgan a la policía facultades para imponer condiciones en las manifestaciones y las reuniones públicas a fin de reducir al mínimo el riesgo de que se produzcan desórdenes públicos, daños graves a la propiedad, una perturbación grave de la comunidad o la intimidación de otras personas. Además, en la Ley figuran disposiciones para la prohibición de las manifestaciones públicas (si las condiciones impuestas no son suficientes), con el fin de evitar graves alteraciones del orden público, y también se permite la prohibición de reuniones invasivas (es decir, reuniones que tienen lugar en terrenos privados o en terrenos con acceso limitado para el público).

Ley de Policía, Orden Público y Justicia Penal (Escocia) de 2006

255. Toda restricción impuesta a las marchas y las manifestaciones debe tener en cuenta los derechos fundamentales enunciados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno de Escocia apoya plenamente la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las manifestaciones estáticas no requieren notificación previa y la policía solo intervendrá en caso de que se cometan delitos. El Gobierno de Escocia no tiene previsto modificar el actual período de notificación de 28 días para las manifestaciones públicas con arreglo a la parte 5 (manifestaciones públicas) de la Ley de Gobierno Cívico (Escocia) de 1982 (“Ley de 1982”). De hecho, un Gobierno de Escocia anterior ya amplió el plazo de notificación de 7 a 28 días (mediante la enmienda de la Ley de 1982 en virtud de la Ley de Policía, Orden Público y Justicia Penal (Escocia) de 2006) para dar a las autoridades locales más tiempo para examinar las notificaciones y tomar una decisión sobre la conveniencia de permitir la manifestación, hacer públicos los actos que hayan de desarrollarse en la zona y facilitar una planificación eficaz de los recursos de la policía. En cuanto a los costes, los cargos se discuten y negocian con los organizadores. El propósito de los cargos es atenuar los efectos negativos reales y potenciales de las manifestaciones en las comunidades locales, así como garantizar la seguridad tanto de los participantes como del público. De no existir esos cargos, algunas manifestaciones no podrían celebrarse. El Gobierno de Escocia considera que esos costes son apropiados, legítimos y

²¹⁹ www.legislation.gov.uk/ssi/2014/339/policy-note/contents.

²²⁰ CCPR/C/GBR/7, pág. 165.

²²¹ www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/part/II.

proporcionados, y que no tienen el efecto de limitar indebidamente el ejercicio de las reuniones pacíficas. El Grupo Consultivo para Combatir el Sectarismo ha encargado una investigación sobre las marchas y las manifestaciones. El objetivo principal de la investigación es estudiar los efectos que tienen en las comunidades locales donde se celebran. Ese proyecto servirá de base para el diálogo sobre la mejor forma de equilibrar los principales aspectos relativos a las marchas y las manifestaciones. El informe final está previsto para marzo de 2015.

30. Derecho de voto de los reclusos

256. El Gobierno del Reino Unido sigue evaluando la cuestión del derecho de voto de los reclusos, aunque se trata de un asunto difícil y complejo. En noviembre de 2012 se presentaron proyectos de propuestas al Parlamento del Reino Unido²²². Sin embargo, a pesar de que esas cuestiones se han analizado repetidamente, resulta evidente que no se logrará un consenso con la constitución actual del Parlamento, por lo que el Gobierno británico no tienen previsto introducir legislación sobre el derecho de voto de los reclusos.

²²² <https://www.gov.uk/government/news/prisoner-voting-rights>.